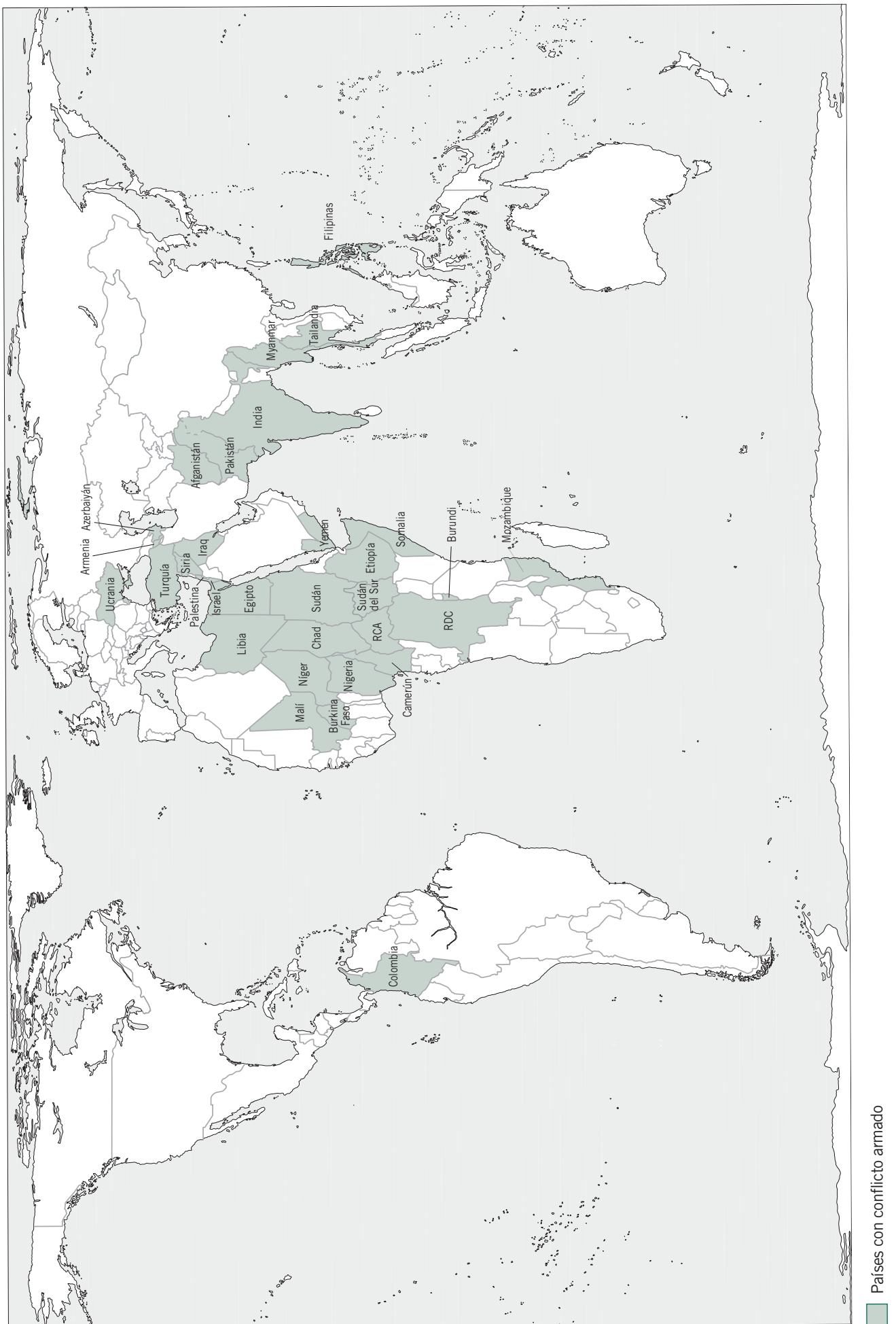


Mapa 1.1 Conflictos armados



Países con conflicto armado

1. Conflictos armados

- Durante 2020 se registraron 34 conflictos armados, la misma cifra que el año anterior. La mayoría de los conflictos armados se concentró en África (15) y Asia (nueve), seguidos por Oriente Medio (seis), Europa (tres) y América (uno).
- En 2020 se observó un incremento significativo de los conflictos armados de alta intensidad, que representaron casi la mitad de los casos, un 47% del total.
- En noviembre se inició un conflicto armado entre el Gobierno de Etiopía y las autoridades de la región septentrional de Tigray, en el que se habrían producido centenares de víctimas mortales y graves violaciones de los derechos humanos.
- La escalada de la violencia por parte de las ADF en el este de RDC como consecuencia de una operación militar de las Fuerzas Armadas congoleesas iniciada en octubre de 2019 continuó durante 2020, causando centenares de víctimas civiles.
- En el norte de Mozambique, en la provincia de Cabo Delgado, la violencia escaló gravemente debido a las acciones de grupos con agendas yihadistas y a la respuesta de las fuerzas de seguridad.
- Burkina Faso se convirtió en la crisis de desplazamiento forzado de más rápido crecimiento del mundo durante 2020 debido a la violencia en la región de Liptako-Gourma.
- La situación de seguridad en el Sahel Occidental se deterioró debido al incremento de las acciones armadas de grupos yihadistas, de milicias comunitarias y por las respuestas militares de las fuerzas de seguridad de los países de la región y los aliados externos.
- Se redujo la violencia en Afganistán tras el acuerdo firmado entre EEUU y los talibanes debido a la retirada de tropas extranjeras y la menor acción ofensiva de las Fuerzas Armadas e ISIS, aunque no disminuyó la actividad armada de los talibanes.
- En consonancia con la tendencia de los últimos años, la violencia en el sur de Tailandia volvió a reducirse y se situó en sus niveles más bajos desde el inicio del conflicto en 2004.
- Se reinició la guerra entre Armenia y Azerbaiyán en torno a Nagorno-Karabaj, con varios miles de fallecidos y decenas de miles de personas desplazadas forzadas, la partición del territorio de Nagorno-Karabaj y la transferencia a Bakú de los distritos adyacentes.
- El conflicto armado en Yemen siguió siendo uno de los más graves del mundo y provocó la muerte de unas 20.000 personas en 2020.

El presente capítulo analiza los conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo del año 2020. Está estructurado en tres partes. En el primer apartado se expone la definición de conflicto armado y sus características. En el segundo se analizan las tendencias de los conflictos durante 2020, incluyendo las dinámicas globales y regionales y otras cuestiones relacionadas con la conflictividad internacional. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Además, al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan los países afectados por conflictos armados en 2020.

1.1. Conflictos armados: definición

Se entiende por **conflicto armado** todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual y de género, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o interrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciados de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a:

- demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;
- oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;
- o control de los recursos o del territorio.

Tabla 1.1. Resumen de los conflictos armados en 2020

Conflicto ¹ -inicio-	Tipología ²	Actores principales ³	Intensidad ⁴
			Evolución ⁵
ÁFRICA			
Burundi -2015-	Interno internacionalizado	Gobierno, Juventudes Imbonerakure, partido político CNDD-FDD, partido político CNL, grupos armados RED-TABARA, FPB (anteriormente FOREBU), FNL	1
	Gobierno		=
Camerún (Ambazonia/ North West y South West) -2018-	Interno internacionalizado	Gobierno de Camerún, movimiento secesionista político-militar en el que destacan la coalición opositora Ambazonia Coalition Team (ACT, incluyendo IG Sako, del que forman parte los grupos armados Lebialem Red Dragons y SOCADEF) y Ambazonia Governing Council (AGovC, incluyendo el IG Sisiku, cuyo brazo armado es el Ambazonia Defence Forces, ADF)	3
	Autogobierno, Identidad		=
Etiopía (Tigray) -2020-	Interno internacionalizado	Gobierno de Etiopía, Gobierno de Eritrea, Gobierno regional del estado de Tigray, cuerpos de seguridad y milicias del Tigray People's Liberation Front (TPLF)	3
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		↑
Libia -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) con sede en Trípoli, Gobierno con sede en Tobruk/Bayda, grupos armados de diverso signo, incluyendo el Ejército Nacional de Libia (LNA) -también denominado Fuerzas Armadas Árabes de Libia (ALAF)-, milicias de Misrata, Petroleum Facilities Guard, Brigadas de Defensa de Bengasi (BDB), ISIS, AQMI, mercenarios, EEUU, Francia, Reino Unido, Egipto, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudita, Jordania, Turquía, Qatar, Rusia, entre otros países	3
	Gobierno, Recursos, Sistema		=
Mali -2012-	Interno internacionalizado	Gobierno, CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA), Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción), MSA, Ansar Dine, MUYAO, AQMI, MRRA, al-Mourabitoun, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP) -también conocido como Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS)-, Katiba Macina, MINUSMA, Francia (operación Barkhane), Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), EEUU, Takouba Task Force (Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Malí, Holanda, Níger, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido)	3
	Sistema, Autogobierno, Identidad		=

1. En esta columna se señala el Estado o la región en que se desarrolla el conflicto armado, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado a la que se circunscribe el conflicto o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
2. Este informe clasifica y analiza los conflictos armados a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses y por otra parte la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas principales, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, los conflictos armados pueden ser internos, internos internacionalizados o internacionales. Se considera conflicto armado interno aquel enfrentamiento protagonizado por actores armados del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por conflicto armado interno internacionalizado aquel en el que alguna de las partes contendientes es foránea, y/o cuando el enfrentamiento se extiende al territorio de países vecinos. Para considerar un conflicto armado como interno internacionalizado también se tiene en cuenta el hecho de que los grupos armados tengan sus bases militares en los países vecinos, en connivencia con esos Estados, y lancen sus ataques desde éstos. Finalmente, se entiende por conflicto internacional aquel en el que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la mayoría de los conflictos armados actuales tienen una importante dimensión e influencia regional o internacional debido, entre otros factores, a los flujos de personas refugiadas, al comercio de armas, a los intereses económicos o políticos (como la explotación legal o ilegal de recursos) que los países vecinos tienen en el conflicto, a la participación de combatientes extranjeros o al apoyo logístico y militar proporcionado por otros Estados.
3. En esta columna se señalan los actores que intervienen de manera directa en las hostilidades. Los actores principales que participan de forma directa en los enfrentamientos conforman una amalgama de actores armados regulares o irregulares. Los conflictos suelen ser protagonizados por el Gobierno, o sus Fuerzas Armadas, contra uno o varios grupos armados de oposición, pero también pueden abarcar otros grupos no regulares como clanes, guerrillas, señores de la guerra, grupos armados opuestos entre sí o milicias de comunidades étnicas o religiosas. Aunque el instrumento bélico que más utilizan los actores es el armamento convencional, y dentro de éste las armas ligeras (que son las causantes de la mayoría de las víctimas mortales de los conflictos), en muchos casos se utilizan otros medios, como ataques suicidas, atentados, violencia sexual, e incluso el hambre es utilizada como instrumento de guerra. Existen además otros actores que no participan directamente en las acciones armadas pero que sí influyen de manera significativa en el conflicto.
4. La intensidad de un conflicto armado (alta, media o baja) y su evolución (escalada de la violencia, reducción de la violencia, sin cambios) se evalúan principalmente a partir de su letalidad (número de víctimas) e impacto en la población y en el territorio. Asimismo, hay otras dimensiones que merecen ser consideradas, como la sistematización y frecuencia de la violencia o la complejidad de la disputa bélica (la complejidad está normalmente vinculada al número y fragmentación de los actores involucrados, al nivel de institucionalización y capacidad del Estado y al grado de internacionalización del conflicto, así como a la elasticidad de los objetivos y a la voluntad política de las partes para alcanzar acuerdos). Por tanto, suelen considerarse conflictos armados de alta intensidad aquellos que provocan más de 1.000 víctimas mortales anuales además de normalmente afectar a porciones significativas del territorio y la población e implicar a un número importante de actores (que establecen interacciones de alianza, confrontación o coexistencia táctica entre ellos). Los conflictos de media y baja intensidad, en los que se registran más de 100 víctimas mortales anuales, presentan las características anteriormente mencionadas con una menor presencia y alcance. Se considera que un conflicto armado finaliza cuando se produce una reducción significativa y sostenida de las hostilidades armadas, bien sea por victoria militar, acuerdo entre los actores enfrentados, desmovilización de una de las partes o bien porque una de las partes contendientes renuncia a o limita notablemente la lucha armada como estrategia para la consecución de unos objetivos. Cualquiera de estas opciones no significa necesariamente la superación de las causas de fondo del conflicto armado ni cierra la posibilidad de un rebrote de la violencia. El cese temporal de hostilidades, formal o tácito, no implica necesariamente el fin del conflicto armado.
5. En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2020 con la del 2019, apareciendo el símbolo de escalada de la violencia (↑) si la situación general del conflicto durante 2020 es más grave que la del año anterior, el de reducción de la violencia (↓) si es mejor y el de sin cambios (=) si no ha experimentado cambios significativos.

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ÁFRICA			
Mozambique (norte) -2019-	Interno internacionalizado	Gobierno, Islamic State Central Africa Province (ISCAP) -anteriormente autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ)-, al-Qaeda, empresa de seguridad privada sudafricana DAG (Dyck Advisory Group)	3
	Sistema, Identidad		↑
RCA -2006-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados de la ex coalición rebelde Séléka (FPRC, RPRC, MPC, UPC, MLCJ), milicias anti balaka, milicia 3R, grupo armado ugandés LRA, otros grupos armados locales y extranjeros, Francia, MINUSCA	2
	Gobierno, Recursos		↑
RDC (este) -1998-	Interno internacionalizado	Gobierno, FDLR, escisiones de las FDLR (CNRD-Ubwiyunge, RUD-Urunana), milicias Mai-Mai, Nyatura, APCLS, NDC-R, LRA, grupos armados de Ituri, milicias comunitarias de Kivu Sur, grupos armados burundeses, Burundi, Rwanda, MONUSCO	3
	Gobierno, Identidad, Recursos		=
RDC (este – ADF) -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO	3
	Sistema, Recursos		↑
Región Lago Chad (Boko Haram) - 2011-	Interno internacionalizado	Gobierno de Nigeria, milicia progubernamental Civilian Joint Task Force, facciones de Boko Haram (ISWAP, JAS-Abubakar Shekau, Ansaru, Bakura), milicias civiles, fuerza conjunta MNJTF (Benin, Nigeria, Camerún, Chad, Níger)	3
	Sistema		=
Región Sahel Occidental -2018-	Internacional	Burkina Faso, Malí, Níger, Costa de Marfil, Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), Joint Task Force para la región Liptako-Gourma (Malí, Níger y Burkina Faso), MINUSMA, Francia (operación Barkhane), EEUU, Takouba Task Force (Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Malí, Holanda, Níger, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido), Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP) –también conocido como Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS)–, Macina Liberation Front (FML), Ansaroul Islam, otros grupos yihadistas y milicias comunitarias	3
	Sistema, Identidad, Recursos		↑
Somalia -1988-	Interno internacionalizado	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna wal Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, AMISOM, EUNAVFOR Somalia, Operation Ocean Shield, al-Shabaab, ISIS	3
	Gobierno, Sistema		=
Sudán (Darfur) -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias progubernamentales PDF, milicias progubernamentales janjaweed, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), diversas facciones del SLA y otros grupos armados, UNAMID	2
	Autogobierno, Recursos, Identidad		↑
Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupo armado SPLM-N, coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF), milicias progubernamentales PDF, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), Sudán del Sur	1
	Autogobierno, Recursos, Identidad		↓
Sudán del Sur -2009-	Interno internacionalizado	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción ex vicepresidente Riek Machar), facciones disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet y Gathoth Gatkuoth, SPLM-FD, SSLA, SSDM/A, SSDM-CF, SSNLM, REMNASAS, NAS, SSUF (Paul Malong), SSOA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN, White Army, Shilluk Agwelek), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Sudán, Uganda, UNMISS	3
	Gobierno, Recursos, Identidad		↑
AMÉRICA			
Colombia -1964-	Interno internacionalizado	Gobierno, ELN, FARC (disidentes), EPL, grupos paramilitares	1
	Sistema		↑
ASIA			
Afganistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, coalición internacional (liderada por EEUU), OTAN, milicias talibán, señores de la guerra, ISIS (EI-KP)	3
	Sistema		↓
Filipinas (NPA) -1969-	Interno	Gobierno, NPA	1
	Sistema		=
Filipinas (Mindanao) -1991-	Interno internacionalizado	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/Grupo Maute, Ansarul Khilafah Mindanao, Grupo Toraiife, facciones del MILF y el MNLF	1
	Autogobierno, Identidad, Sistema		↓

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
ASIA			
India (Jammu y Cachemira) -1989-	Interno internacionalizado	Gobiernos, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, Jaish-e-Muhammad, United Jihad Council, JKLF	2
	Autogobierno, Identidad		=
India (CPI-M) -1967-	Interno	Gobierno, CPI-M (naxalitas)	1
	Sistema		↓
Myanmar -1948-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados (Firmantes del alto el fuego: ABSDF, ALP, CNF, DKBA, KNU, KNU/KNLA-PC, PNLO, RCSS, NMSP, LDU; No firmantes del alto el fuego: KIA, NDAA, MNDAA, SSPP/SSA, TNLA, AA, UWSA, ARSA, KNPP)	2
	Autogobierno, Identidad		↑
Pakistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, milicias talibán, insurgentes extranjeros, EEUU	2
	Sistema		↓
Pakistán (Baluchistán) -2005-	Interno internacionalizado	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, BLA, BRP, BRA, BLF y BLT, Baloch Raji Ajoji Sangar, LeJ, TTP, talibanes afganos (shura de Quetta), ISIS	1
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↓
Tailandia (sur) -2004-	Interno	Gobierno, BRN y otros grupos armados de oposición secesionistas	1
	Autogobierno, Identidad		↓
EUROPA			
Armenia - Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj) -2020-	Internacional	Azerbaiyán, Armenia, autoproclamada República de Nagorno-Karabaj	3
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↑
Turquía (sudeste) -1984-	Interno internacionalizado	Gobierno, PKK, TAK, ISIS	2
	Autogobierno, Identidad		↓
Ucrania (este) -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, actores armados en provincias del este, Rusia	1
	Gobierno, Identidad, Autogobierno		↓
ORIENTE MEDIO			
Egipto (Sinaí) -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (PS, filial de ISIS), otros grupos armados (Ajnad Misr, Majlis Shura al-Mujahideen fi Aknaf Bayt al-Maqdis y Katibat al-Rabat al-Jihadiya, Popular Resistance Movement, Liwaa al-Thawra y Hasm)	2
	Sistema		↓
Iraq -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes (Unidades de Movilización Popular), milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, EEUU, Irán, Turquía, Israel	3
	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos		=
Israel-Palestina -2000-	Internacional	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↓
Siria -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición que incluye a las milicias YPG/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Turquía, Hezbollah, Irán, Rusia	3
	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad		=
Yemen (al-houthistas) -2004-	Interno internacionalizado	Fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), fuerzas leales al ex presidente Alí Abdullah Saleh, milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas, sectores armados vinculados al partido islamista Islah, sectores separatistas agrupados en el Southern Transitional Council (STC), coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Irán	3
	Sistema, Gobierno, Identidad		↑
Yemen (AQPA) - 2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA/Ansar Sharia), ISIS, EEUU, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), milicias tribales, milicias al-houthistas/Ansar Allah	1
	Sistema		=

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta;

↑: escalada de la violencia; ↓: reducción de la violencia ; = : sin cambios; Fin: deja de considerarse conflicto armado

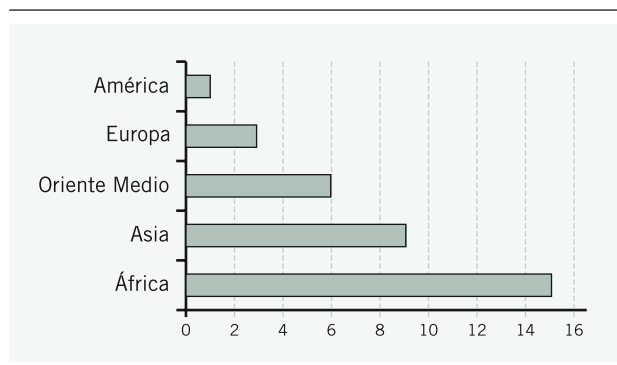
1.2. Conflictos armados: análisis de tendencias en 2020

En este apartado se analizan las tendencias globales y regionales de los conflictos armados a lo largo de 2020, incluyendo el balance respecto a años anteriores, la distribución geográfica de los conflictos y las principales tendencias por regiones, la relación entre los actores implicados y el escenario de la disputa, las principales causas de los conflictos armados actuales, la evolución general de los contextos y la intensidad de los conflictos en función de sus niveles de violencia y su impacto. Asimismo, en este apartado se analizan algunas de las principales consecuencias de los conflictos armados en la población civil, entre ellas el desplazamiento forzado causado por situaciones de conflicto y violencia.

1.2.1 Tendencias globales y regionales

El año 2020 no ofreció novedades respecto al número total de conflictos armados a nivel global. Siguiendo la tendencia de los períodos previos, en 2020 se identificaron 34 casos, el mismo número que el año anterior. En el lustro precedente las cifras han sido similares: 34 en 2019 y 2018, 33 en 2017 y 2016 y 35 en 2015. Al finalizar 2020 todos los casos permanecían activos, a diferencia de otros años en los que la reducción de los niveles de violencia en algunos contextos motivó que estos escenarios dejaran de ser considerados como conflictos armados – por ejemplo Argelia (AQMI) o RDC (Kasai) en 2019. A la lista de conflictos armados sí se añadieron dos nuevos casos. En África, las tensiones entre el Gobierno federal etíope y el gobierno de la región de Tigray desembocaron en una confrontación bélica con graves consecuencias. En Europa, la histórica disputa en torno al enclave de Nagorno-Karabaj –de mayoría armenia y formalmente parte de Azerbaiyán, aunque independiente de facto– escaló hasta una situación de conflicto armado abierto entre Armenia y Azerbaiyán, con severos impactos en términos de letalidad y desplazamientos forzados de población.

Gráfico 1.1. Distribución regional del número de conflictos armados en 2020



Respecto a la distribución geográfica de los conflictos armados, como en años previos la mayoría de los casos se concentraron en África (15) y Asia (9), seguidos de Oriente Medio (6), Europa (3) y América (1). En términos porcentuales, por tanto, el continente africano concentraba el 44% del total de conflictos a nivel global.

El panorama general de conflictos armados en 2020 también se vio influido por la pandemia de la COVID-19.

En un clima de alarma en todo el mundo por la expansión de la enfermedad, el 23 de marzo el secretario general de la ONU hizo un llamamiento a un alto el fuego global con el fin de crear las condiciones para dar respuesta al coronavirus y garantizar el acceso a la asistencia humanitaria y de salud a las poblaciones más vulnerables y expuestas a la violencia. Después de tres meses de debate, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en julio una resolución (2532) en la que formalizó su respaldo al llamamiento del secretario general, exigiendo un cese general e inmediato de las hostilidades en todos

los contextos bélicos e instando a todas las partes implicadas en conflictos armados a poner en marcha pausas humanitarias de al menos 90 días consecutivos. En su alocución ante la Asamblea General de la ONU por el 75º aniversario de la organización, en septiembre, Guterres subrayó que el contexto de pandemia ofrecía una oportunidad para dar un nuevo empuje a los esfuerzos por la paz y la reconciliación y reiteró su llamado a un cese de hostilidades global, respaldado desde marzo por 180

Estados, organizaciones regionales, grupos de la sociedad civil y activistas por la paz.

En la práctica, sin embargo, la apelación a una tregua global por parte de António Guterres recibió una respuesta limitada y desigual por parte de los actores armados involucrados en conflictos. Algunos se acogieron al llamamiento y decretaron ceses de hostilidades de manera unilateral –entre ellos, los grupos armados ELN en Colombia y BRN en Tailandia (sur) o el NDF y el Gobierno en Filipinas–, pero en otros contextos las partes contendientes desoyeron el llamamiento e intensificaron o persistieron en sus acciones armadas pese al contexto de pandemia –en Libia, por ejemplo, actores armados incrementaron sus ofensivas tras el llamamiento de Guterres, con acciones que incluyeron ataques a hospitales y cortes de suministro de agua potable a millones de personas pese a las urgentes necesidades sanitarias en el contexto de pandemia. En términos generales, los ceses el fuego fueron breves y/o no se consolidaron y la mayor parte de los actores implicados en conflictos armados continuaron privilegiando su apuesta por la vía militar.⁶ Adicionalmente, la COVID-19 generó dificultades en los

6. Véase Escola de Cultura de Pau, “Altos el fuego en conflictos armados durante la pandemia del coronavirus” y “Cesces de hostilidades en tiempos de COVID-19”, *Apuntes ECP de Conflictos y Paz*, no.4 (abril de 2020) y no.7 (julio de 2020).

procesos de paz, por su impacto en las dinámicas de las negociaciones –obstáculos para el desplazamiento de negociadores, mediadores y facilitadores; retraso de rondas, dificultades tecnológicas para la comunicación en algunos contextos– y en la implementación de acuerdos.⁷ Así, por ejemplo, la misión de la UE en RCA para apoyar la reforma del sector de seguridad, en el marco del acuerdo de paz de 2019, retrasó su despliegue en el país a causa de la pandemia.

Muchos gobiernos también aprovecharon el contexto de la COVID-19 para endurecer la restricción de libertades, coartar las acciones de la oposición y/o limitar ciertas garantías democráticas. Así quedó de manifiesto en casos como Burundi –donde se limitó el trabajo de observadores electorales apelando a la COVID-19– o en Camerún (Ambazonia North West/South West) –organizaciones de derechos humanos denunciaron abusos en la aplicación de la ley antiterrorista y en las limitaciones vinculadas a la pandemia para coartar el derecho a reunión. En algunos contextos también se denunció que la pandemia había contribuido a agravar vulneraciones de derechos humanos, como en el caso de Colombia, donde aumentaron los ataques y asesinatos de defensoras de los derechos humanos. Por lo que respecta a la población civil, en tanto, a los habituales impactos de la violencia y las hostilidades se superpusieron los efectos de la pandemia.⁸

En lo referente a la relación entre los actores involucrados en el conflicto y el escenario de la disputa, se identificaron conflictos internos, internacionales y, mayoritariamente, internos internacionalizados. En líneas similares a años anteriores, en 2020 un 9% de los contextos fueron de carácter interno, es decir, conflictos en que los actores armados involucrados en la contienda operaban exclusivamente dentro de las fronteras de un mismo Estado. Los tres conflictos armados internos se concentraron en Asia: Filipinas (NPA), India (CPI-M) y Tailandia (sur). Otros tres casos, equivalentes también al 9% de los conflictos armados, fueron internacionales y se registraron en tres continentes: el conflicto en la Región Sahel Occidental, en África; la disputa palestino-israelí, en Oriente Medio, y el de Armenia y Azerbaiyán por Nagorno Karabaj, en Europa. La inmensa mayoría de los conflictos armados eran internos internacionalizados –28 contextos, equivalentes al 82%. Estos casos se caracterizan porque alguna de las partes contendientes es foránea, los actores armados del conflicto tienen bases o lanzan ataques desde el extranjero y/o la disputa se extiende a países vecinos. En numerosos conflictos este factor de internacionalización se concretó en la implicación de terceros actores como partes contendientes, incluyendo misiones internacionales, coaliciones militares regionales e internacionales ad-hoc, Estados y grupos armados de acción transfronteriza, entre otros.

Siguiendo la tendencia de años previos, la mayoría de los conflictos armados en 2020 fueron internos internacionalizados

En cuanto al papel de las misiones internacionales, en 2020 continuó la presencia destacada de iniciativas de la ONU, en particular en contextos africanos. Así, durante el año se mantuvo el despliegue de fuerzas de paz de Naciones Unidas en escenarios como RCA (MINUSCA), RDC (MONUSCO), Malí (MINUSMA), Sudán –Darfur– (UNAMID, misión híbrida de la ONU y la UA) o Sudán del Sur (UNMISS). La OTAN mantuvo su misión Resolute Support en Afganistán. Organizaciones regionales también continuaron involucradas en numerosos conflictos armados en forma de misiones u operaciones militares como en el caso de la Unión Africana (UA) –con la misión AMISOM en Somalia– o la Unión Europea (UE) –EUFOR en RCA, EUNAVFOR en Somalia. También continuaron operativas misiones híbridas, que involucran a organizaciones regionales y Estados, como la operación militar marítima en el Cuerno de África y el Océano Índico, Ocean Shield, liderada por EEUU, pero en la que también participan la UE, la OTAN y países como Japón, India y Rusia. En esta misma línea se inscribe la coalición internacional contra el grupo armado ISIS, formada en septiembre de 2014 bajo el liderazgo de EEUU, que desde entonces ha desplegado sus acciones en Iraq y Siria. Esta coalición cuenta con 83 integrantes, entre Estados y organizaciones, entre ellas la Liga Árabe y la UE. Durante 2020 siguió constatándose la participación de Estados en conflictos armados a través de coaliciones internacionales en las que uno o dos países mantuvieron un papel protagónico de liderazgo. Fue el caso, por ejemplo, de la coalición liderada por EEUU en Afganistán o la coalición de países de mayoría árabe liderada por Arabia Saudita –también con un rol destacado de Emiratos Árabes Unidos (EAU)– para intervenir en Yemen.

La dimensión de internacionalización y en particular el papel protagónico de actores foráneos en las dinámicas del conflicto y en la evolución de las hostilidades fue especialmente evidente en otros contextos, como Siria o Libia. En el contexto sirio, los acontecimientos continuaron estando muy determinados por las posiciones, intereses y acciones de países como Rusia y Turquía –valedores del régimen y la oposición, respectivamente– y condicionaron de manera especial la marcha del conflicto en los frentes de batalla del norte de Siria. En el caso libio, durante 2020 se acentuó la implicación de actores externos en apoyo a los bandos en conflicto, una tendencia que se materializó en reiteradas vulneraciones al embargo de armas; flujos continuos de combatientes, mercenarios y asesores militares y en amenazas explícitas sobre una intervención más directa de terceros países si se sobrepasaban determinadas “líneas rojas”. Así, para el gobierno internacionalmente reconocido con base en Trípoli fue crucial el apoyo de Turquía y para las fuerzas del general Khalifa Haftar, los

7. Véase Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2021.

8. Véase el apartado 1.2.2 sobre impactos de los conflictos armados en la población civil en este capítulo.

apoyos de países como Egipto o Rusia. Los intereses de estos actores se proyectaron en la contienda y en ellos pesaron también consideraciones económicas y geopolíticas, vinculadas por ejemplo a disputas por el control de áreas ricas en recursos energéticos en el Mediterráneo Oriental.⁹ Contextos como Yemen o Iraq también fueron escenarios en los que se proyectaron disputas regionales e internacionales. Así, el caso yemení se vio directamente influido por el pulso entre Arabia Saudita e Irán y también por la creciente tensión entre Washington y Teherán. Iraq fue otro territorio en el que se escenificó la creciente confrontación entre EEUU e Irán, y en el que también intervino Turquía, en el marco de su disputa con el PKK.

La Región Sahel Occidental fue un caso emblemático de conflicto armado internacional, ya que en este escenario confluyeron varias coaliciones militares de países de la región y aliados externos para enfrentar la creciente actividad de grupos armados yihadistas de acción transfronteriza –organizaciones que, a su vez, han formado conglomerados de entidades vinculadas a al-Qaeda o a Estado Islámico. Así, en la zona operaban la Fuerza Conjunta Sahel G5 –compuesta por Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso–, la Fuerza Conjunta para la Región Liptako-Gourma –integrada por Malí, Níger y Burkina Faso– y la Takouba Task Force –misión militar europea creada en 2020, liderada por Francia e integrada por fuerzas especiales de Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Alemania, Holanda, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido, además de Malí y Níger. Además, en la región continuaron desplegadas tropas francesas en el marco de la Operación Barkhane y las fuerzas de la ONU de la ya citada MINUSMA, y se esperaba que la Misión de Formación y Asistencia Militar de la UE en Malí (EUTM) también ampliará sus actividades a otros países de región involucrados en este conflicto.

Respecto a las causas de los conflictos armados, la gran mayoría tuvo entre sus motivaciones principales la oposición a las políticas domésticas o internacionales de los respectivos gobiernos o al sistema político, económico, social o ideológico de un determinado Estado, que derivaron en luchas por acceder al poder o erosionarlo. Uno u otro elemento, o ambos, estuvieron presentes en el 71% de los casos en 2020 (24 de los 34 casos), en línea con los años anteriores (73% en 2019, 71% en 2018, 73% en 2017). Entre estos 24 casos, en 18 contextos había actores armados que aspiraban a un cambio de sistema, mayoritariamente organizaciones que se atribuyen una agenda yihadista y que tratan de imponer su

La Región de Sahel Occidental fue un caso emblemático del conflicto armado internacional, ya que en este escenario confluyeron varias coaliciones militares de países de la región y aliados externos y numerosos grupos armados yihadistas de acción transfronteriza

Más de un tercio (35%) de los conflictos armados en 2020 registraron un deterioro en los niveles de violencia e inestabilidad respecto al año anterior

particular interpretación de los preceptos islámicos. Entre estos grupos cabe mencionar organizaciones como el autodenominado Estado Islámico (ISIS) y sus filiales o entidades afines en distintos continentes –el grupo estuvo presente en países como Argelia, Libia, Región Lago Chad, Región Sahel Occidental, Somalia, Afganistán, Pakistán, Filipinas, Turquía, Egipto, Iraq, Siria, Yemen, entre otros–; las diversas ramas de al-Qaeda –entre ellas AQMI (Argelia, Sahel y Libia) y AQPA (Yemen)–; los talibán que operan en Afganistán y Pakistán o el grupo al-Shabaab en Somalia, entre otros.

Otro factor destacado entre las causas principales de los conflictos armados fueron las disputas en torno a demandas identitarias y de autogobierno, presentes en el 59% de los conflictos (20 casos), mismo porcentaje que en los dos años previos. A este respecto, cabe destacar que los dos conflictos armados que se activaron en 2020 estaban relacionados con este tipo de reivindicaciones. Por un lado, en el trasfondo de la escalada de violencia en la región de Tigray, en Etiopía, estuvieron los agravios y la percepción de la comunidad tigray de una pérdida de poder

y privilegios ante las políticas de reforma del sistema federal etíope impulsadas por el primer ministro Abiy Ahmed. La decisión de la región de Tigray de mantener una convocatoria a elecciones en la región a pesar de lo dispuesto por el Gobierno federal –que había resuelto aplazar los comicios federales y regionales por la pandemia y extender el mandato de las autoridades vigentes–, junto a otras cuestiones que se encuentran en la génesis de este conflicto, propició una disputa de legitimidades que acabó en confrontación armada al finalizar el año. Por otro lado está la disputa entre fuerzas de Armenia y Azerbaiyán en torno a Nagorno Karabaj, enclave de mayoría armenia formalmente parte de Azerbaiyán, pero independiente de facto. Tras

diversas escaladas de violencia desde la guerra de los años noventa, una de las más graves en 2016, las hostilidades se reabrieron en 2020. Los enfrentamientos remitieron al finalizar el año tras un acuerdo mediado por Rusia, que dibujó un cambio significativo en los límites del territorio y ratificó la partición de Nagorno Karabaj, pero dejó sin resolver el estatus del enclave. La disputa en torno al control de territorio –como también ilustra el caso de Armenia – Azerbaiyán (Nagorno Karabaj)– y de recursos fue una de las causas principales en un 35% de los conflictos (12 casos) en 2020, siguiendo la tendencia de años previos. La cuestión de los recursos fue una motivación que estuvo presente mayoritariamente en contextos africanos – en más de la mitad de los conflictos armados de la

9. Véase el resumen sobre Turquía – Grecia, Chipre en el capítulo 2 (Tensiones).

región (ocho de 15 casos)–, si bien es un factor que de manera indirecta estuvo presente en numerosos contextos de otras regiones, perpetuando la violencia a través de las economías de guerra.

Adicionalmente, cabe destacar que **20 de los 34 conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo de 2020 se dieron en países donde existían graves desigualdades de género**, con niveles medios, altos o muy altos de discriminación.¹⁰ Las desigualdades de género se manifestaron en aspectos como los impactos específicos de género de la violencia, la utilización de la violencia sexual por las partes contendientes en diferentes conflictos armados, en un contexto internacional de pandemia por la COVID-19 que puso en evidencia las graves desigualdades de género a nivel internacional.

En cuanto a la **evolución de los conflictos armados** a lo largo de 2020, poco más de un tercio de los casos –12 de los 34, equivalentes a un 35%– registraron un deterioro de la situación, con mayores niveles de violencia e inestabilidad que el año anterior: Etiopía (Tigray), Malí, Mozambique, Región Sahel Occidental, RCA, RDC (este-ADF), Sudán (Darfur), Sudán del Sur, Myanmar, Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), Yemen (al-houthistas). El resto de los casos se repartieron en partes iguales entre los que exhibieron niveles de violencia y hostilidades similares a las registradas en 2019 y los que presentaron una reducción en los enfrentamientos –11 casos en cada categoría. Asia fue la región en la que se observó una mayor disminución en las hostilidades. Dos tercios de los conflictos armados en esta zona evolucionaron hacia menores niveles de violencia: Afganistán, Filipinas (Mindanao), India (CPI-M), Pakistán, Pakistán (Baluchistán) y Tailandia (sur).

Respecto a la intensidad de la violencia en los diferentes conflictos armados, es posible identificar y destacar un rasgo particular en 2020: una prevalencia significativa de casos de intensidad elevada, es decir, contextos caracterizados por niveles de letalidad por encima del millar de víctimas anuales, además de graves impactos en la población, masivos desplazamientos forzados y severas consecuencias en el territorio. A diferencia de años previos en los que los casos de alta intensidad representaban en torno a un tercio de los casos –32% en 2019 (11 casos), 27% en 2018 (nueve casos)–, **en 2020 los conflictos armados graves se incrementaron y representaban casi la mitad de los casos, un 47% del total** (ver gráfico 1.2). Hasta ahora, la cifra más elevada de la década se había registrado en los años 2016 y 2017, pero con un porcentaje menor: 40% (ver gráfico 1.3). La mayor prevalencia de casos graves en 2020 se observó en África, donde 11 de los 15 (73%) conflictos armados en el continente fueron de alta intensidad. Este dato es muy superior a lo observado el año anterior,

cuando menos de la mitad de los casos –siete de 16 casos, equivalentes a 44%– fueron de intensidad elevada. Respecto a otras regiones, en Oriente Medio la mitad de los conflictos –tres de seis– fueron considerados como contextos graves en 2020, mientras que Asia y Europa registraron un caso de este tipo, respectivamente. América, en cambio, no presentó conflictos armados de alta intensidad (ver gráfico 1.4). Los 16 casos de conflictos armados graves en 2020 fueron: Camerún (Ambazonia/North West y South West), Etiopía (Tigray), Libia, Malí,

En 2020 se observó un incremento significativo de los conflictos armados de alta intensidad, que representaban casi la mitad de los casos, un 47% del total

Gráfico 1.2. Intensidad de los conflictos armados en 2020

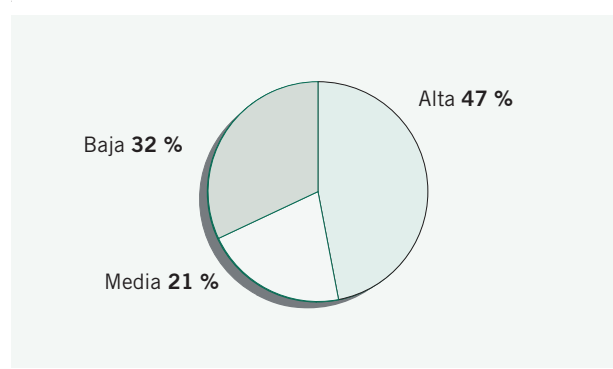
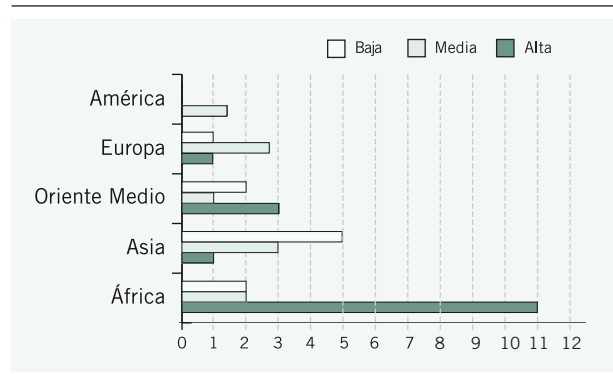


Gráfico 1.3. Proporción de conflictos armados graves en la última década



Gráfico 1.4. Intensidad de los conflictos por regiones



10. Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).

Cuadro 1.1. Tendencias regionales en materia de conflictividad armada

<p>ÁFRICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Como en años previos, el continente registró el mayor número de conflictos armados con 15 casos, que representan un 44% del total mundial. Este porcentaje es ligeramente inferior al del año anterior, en el que los casos africanos representaban un 47%. Si en 2019 dos casos de la región dejaron de ser considerados conflictos armados activos –Argelia (AQMI) y RDC (Kasai)–, en 2020 se añadió un nuevo caso, tras la escalada de violencia en la región de Tigray, en Etiopía. • La tendencia más relevante en el continente en 2020 fue el significativo incremento de los conflictos armados de alta intensidad en el último lustro. Si en 2019 estos casos representaban un 44% (siete de los 16 casos), en 2020 el porcentaje se elevó hasta el 73% (11 de los 15 casos). • La mitad de los casos –ocho de 15, equivalentes a 53%– presentaron un deterioro durante 2020, con mayores niveles de violencia respecto al año anterior. Solo en un caso se identificó una disminución en las hostilidades –Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)–, mientras que en otros seis contextos la evolución fue similar a la del período previo. • Los conflictos armados en África se caracterizaron por la internacionalización. En la práctica totalidad de casos –14 de los 15 (93%)– se observó la implicación de actores externos contendientes o la expansión de las dinámicas de violencia a países vecinos. El caso restante fue de carácter internacional –Región Sahel Occidental– y no se contabilizaron conflictos armados eminentemente internos. • Los conflictos armados en África respondieron a causas múltiples, entre las que destacan las aspiraciones a un cambio de gobierno o sistema (80%) –una de estas categorías o ambas estaban presentes en 12 de los 15 de los casos– y las demandas de autogobierno o identitarias, identificadas en 60% de los casos. En la mitad de los casos –ocho, equivalentes a 53%– se identificaron motivaciones relativas al control de recursos.
<p>AMÉRICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El continente albergó un único conflicto armado, el de Colombia, uno de los más longevos del mundo. • Siguiendo la tendencia observada el año anterior, el conflicto armado colombiano evolucionó negativamente en 2020 y registró mayores niveles de violencia, principalmente enfrentamientos protagonizados por las fuerzas de seguridad, el ELN y grupos disidentes de la desmovilizada guerrilla de las FARC. • Aunque solo registró un conflicto armado, la región fue escenario de otras dinámicas de violencia y tensión y fue la más afectada por homicidios.
<p>ASIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Como en períodos anteriores, el continente se situó en segundo lugar en número de conflictos armados después de África, albergando nueve casos (26%). • La mayoría de los conflictos armados en Asia fueron de intensidad baja (cinco casos) o media (tres contextos). Solo uno de los conflictos de la región, el de Afganistán, fue de alta intensidad y un año más se erigió como el más cruento del mundo, con niveles de letalidad por encima de las 20.000 víctimas mortales. • La mayor parte de los casos en Asia registraron una disminución en las hostilidades –seis de nueve casos o 67%–, y un porcentaje menor presentó una evolución similar a la del año anterior –dos contextos, equivalentes a 22%. Solo un conflicto armado, el de Myanmar, evolucionó hacia un deterioro de la situación en 2020. • Asia fue la única región del mundo en la que se identificaron conflictos armados de carácter interno. Los tres conflictos armados de este tipo –Filipinas (NPA), India (CPI-M) y Tailandia (sur)– representaron un tercio de los casos de la región. • En lo que respecta a las causas de los conflictos armados en Asia, prevalecieron los casos en los que se pretendía un cambio de sistema –motivación presente en cinco de los nueve conflictos (56%)– o en los que estaban en juego demandas de autogobierno o identidad –también en un 56% de contextos.
<p>EUROPA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El continente fue escenario de un conflicto armado más que el año anterior. A los casos de Turquía (sudeste) y Ucrania (este) se sumó el de Armenia-Azerbaiyán por la cuestión de Nagorno Karabaj. Los tres contextos europeos representaron un 9% del total de conflictos a nivel global. • Los tres conflictos de la región presentaron diferentes escalas de intensidad: Ucrania (este), baja; Turquía (sudeste), media; y Armenia-Azerbaiyán (Nagorno Karabaj), elevada. Mientras en los dos primeros casos se observó una reducción en la intensidad de la violencia respecto al año anterior, el tercero se caracterizó por una significativa escalada que llevó a su consideración como conflicto armado en 2020. • Europa siguió siendo una región caracterizada por albergar conflictos con causas vinculadas a cuestiones de autogobierno e identidad –motivaciones presentes en la totalidad de casos de la región–, y en menor medida causas vinculadas a disputas por el poder político o a control de territorios. • Dos tercios de los casos en Europa fueron de carácter interno internacionalizado y uno, un conflicto internacional.
<p>ORIENTE MEDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La región concentró seis conflictos armados, que representaron un 18% del total de casos a nivel mundial. Después de África, Oriente Medio fue la zona en la que se produjeron más conflictos armados de alta intensidad. La mitad de los casos de la región –tres de seis– fueron de intensidad elevada y dos de ellos, Siria y Yemen, estuvieron entre los casos más graves de 2020, con los mayores niveles de letalidad tras Afganistán. • La mitad de los casos de la región evolucionaron de manera similar al año anterior, en dos casos se observó una reducción relativa en los niveles de violencia –Egipto (Sinaí) e Israel-Palestina–, mientras que en uno se produjo una escalada de la violencia: Yemen. En este caso, aunque los niveles de letalidad fueron similares a los del año anterior, se incrementaron los frentes de batalla y se agravó la severa crisis humanitaria provocada por el conflicto. • Los conflictos de la región fueron multicausales, con una presencia destacada de casos donde las motivaciones estaban vinculadas a la búsqueda de un cambio de gobierno o sistema –una de estas categorías o ambas estuvieron presentes en cinco de los seis casos (83%)– o con demandas identitarias o de autogobierno –en cuatro de los seis contextos (67%). En otros dos casos (33%) había motivaciones vinculadas al control de recursos y territorios.

Mozambique (norte), Región Lago Chad (Boko Haram), Región Sahel Occidental, RDC (este), RDC (este-ADF), Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas).

En algunos de estos contextos, **los enfrentamientos y otras dinámicas de violencia provocaron unos niveles de letalidad que estuvieron muy por encima del umbral de**

mil víctimas mortales anuales. Así, por ejemplo, en la Región Sahel Occidental se contabilizaron más de 4.250 muertes y 2020 fue señalado como el año más mortífero desde el inicio de la violencia en 2012, a causa de las acciones de diversos grupos yihadistas que operan en la zona. En Somalia, los hechos de violencia, en su mayoría atentados perpetrados por al-Shabaab, provocaron la muerte de más de 3.000 personas. El conflicto armado

entre Armenia y Azerbaiyán en torno a Nagorno Karabaj provocó más de 5.000 personas fallecidas. En el caso de Siria, las estimaciones apuntan a que las hostilidades habrían causado al menos 8.000 víctimas mortales en 2020, un descenso relativo respecto a los niveles de letalidad registrados en años previos (15.000 personas fallecidas en 2019, 30.000 en 2018). Los dos conflictos armados más cruentos de 2020 fueron, con diferencia, Yemen y Afganistán. En el caso yemení se estimaba que unas 20.000 personas habían perdido la vida como resultado directo de enfrentamientos y ataques explosivos. En el caso de Afganistán el conflicto armado habría causado la muerte a más de 21.000 personas. Pese a lo elevado de la cifra, esta es significativamente menor a la del año anterior, en el que se contabilizaron 40.000 víctimas mortales.

Los dos conflictos armados en los que se contabilizaron más víctimas mortales en 2020 fueron Yemen y Afganistán

1.2.2. Impactos de los conflictos en la población civil

Como en años previos, y tal y como viene denunciando periódicamente Naciones Unidas, organizaciones internacionales y entidades locales, la población civil continuó padeciendo gravísimas consecuencias derivadas de los conflictos armados. En 2020 los impactos de los enfrentamientos entre actores armados y del uso indiscriminado y deliberado de la violencia contra la población civil se vieron amplificados a causa de la pandemia de la COVID-19, que agravó aún más la precariedad y desprotección de numerosas poblaciones afectadas por conflictos armados. El informe del secretario general de la ONU sobre la protección de civiles en conflictos armados publicado en mayo, a pocos meses del inicio de la pandemia, ya advertía sobre las implicaciones del coronavirus y la exacerbación de las vulnerabilidades en los colectivos más frágiles. Cabe recordar que los civiles han sido identificados por la ONU como las principales víctimas mortales de los conflictos armados.

En 2020, los impactos de la violencia de los conflictos armados en la población civil se vieron amplificados a causa de la pandemia de la COVID-19

Los diferentes conflictos armados analizados en 2020 permiten constatar la persistencia del patrón de abusos contra civiles, materializado en ataques letales contra poblaciones, ofensivas contra objetivos o infraestructuras de carácter civil, ejecuciones, secuestros, desapariciones y torturas, entre otras prácticas. En el último año, diversos contextos ilustraron esta realidad. En RDC, por ejemplo, el grupo armado ADF intensificó sus operaciones contra la población civil, expandiendo sus ataques más allá de sus áreas de acción tradicionales y aplicando tácticas especialmente lesivas –ataques con artillería pesada, fusiles y machetes, incendios de localidades enteras, secuestros masivos, entre otras– que causaron cientos de víctimas. En la región de Lago Chad, Boko Haram continuó perpetrando masacres,

mutilaciones y secuestros de civiles. En Somalia, al-Shabaab persistió en sus ataques contra objetivos civiles, incluyendo restaurantes, cafés y hoteles, causando un elevado número de bajas. En Malí, solo en el primer semestre de 2020 la intensificación de la violencia había causado la muerte a más de 600 civiles. En Afganistán, aunque se identificó una disminución relativa en el número de víctimas civiles del conflicto, durante el año se produjeron ofensivas que causaron especial consternación internacional, como

el ataque contra un hospital materno-infantil en el que murieron más de una veintena de personas. El conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno Karabaj, en tanto, causó en torno a 500 víctimas civiles, incluyendo un centenar de personas fallecidas y 400 heridas. En Iraq, si bien el número de víctimas mortales civiles también se redujo en comparación a años previos, la cifra siguió siendo elevada, en torno al millar de bajas. En Siria se contabilizó un número similar y la ONU continuó denunciando que las partes involucradas en el conflicto seguían incumpliendo los principios básicos del derecho internacional humanitario, entre ellos, la necesaria distinción entre civiles y combatientes.

Los actores armados estatales también se vieron involucrados de manera destacada en muertes y abusos contra la población civil. Así, por ejemplo, en Camerún, el Ejército estuvo implicado en la matanza de una veintena de civiles, aunque organizaciones de derechos humanos advirtieron que la cifra de víctimas podía ser muy superior. En el marco del conflicto en la región de Sahel Occidental, organizaciones de derechos humanos denunciaron que en sus operaciones contra grupos insurgentes las Fuerzas Armadas de Malí, Níger y Burkina Faso habían cometido crímenes de guerra con un especial impacto en civiles, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. Según entidades locales,

solo el Ejército de Burkina Faso sería responsable de la muerte de casi 600 civiles. En Mozambique también se registraron denuncias similares de vulneración de derechos humanos y posibles crímenes de guerra contra las fuerzas de seguridad mozambiqueñas en sus acciones contrainsurgentes en la provincia de Cabo Delgado. La presencia de armas explosivas en territorios en conflicto también siguió afectando a la población civil, como ilustraron los casos de Ucrania, donde se detectó un incremento en el número de civiles fallecidos a causa de minas, o el de Egipto (Sinaí), donde se produjeron varias muertes por explosivos tras el retorno de población desplazada a una zona previamente controlada por ISIS. El despliegue de bombas trampa por parte de esta filial de ISIS en Egipto siguió un patrón observado también en acciones del grupo en Siria e Iraq. Además de las muertes de civiles como resultado directo de hostilidades, operaciones armadas y armas

explosivas, cabe tener en cuenta también el impacto en términos de muertes indirectas, como resultado de la falta de acceso a alimentos o a servicios de salud. Así, por ejemplo, en casos como Yemen, agencias de Naciones Unidas estimaron que del total de personas fallecidas que ha provocado el conflicto armado en los últimos cinco años (unas 233.000 personas, según estimaciones), más de la mitad (131.000) habrían fallecido a causa de la falta de acceso a atención médica o alimentos, entre otros factores.

En esta línea, cabe destacar que **los conflictos armados continuaron provocando y/o agravando situaciones de crisis humanitaria**. Según las previsiones de OCHA, un total de 235 millones de personas necesitarían asistencia humanitaria en 2021, un incremento del 40% respecto a las estimaciones para el año anterior y atribuible mayoritariamente a la COVID-19.¹¹ La anterior previsión –168 millones– ya había destacado por ser la cifra más elevada en décadas. Las repercusiones socioeconómicas de la pandemia agravaron la vulnerabilidad de poblaciones ya seriamente afectadas por conflictos y violencia, como bien ilustran los casos de RCA, Ucrania (este), Siria o Yemen. En Ucrania (este), por ejemplo, organizaciones humanitarias alertaron que ocho de cada diez familias en las regiones de Donetsk y Lugansk estaban padeciendo graves impactos en términos de seguridad alimentaria y medios de vida y Naciones Unidas alertó que nueve millones de personas corrían el riesgo de pasar a una situación de pobreza. Tanto en Siria como en Yemen, los indicadores socioeconómicos continuaron precipitándose durante 2020. En el caso sirio, la canasta básica de alimentos multiplicó su precio en más de un 200%. Además, se estimaba que 9,3 millones de personas padecían inseguridad alimentaria y las dinámicas del conflicto obstaculizaron el acceso de ayuda humanitaria por el cierre de varios pasos fronterizos. Yemen continuó siendo la mayor crisis humanitaria a nivel mundial: 24,3 millones de yemeníes requerían algún tipo de asistencia humanitaria o protección, 14 millones se encontraban en una situación de extrema necesidad y se multiplicaron las alarmas por la hambruna en el país, la peor en décadas en el mundo, según la ONU. Siria y Yemen también evidenciaron la carga añadida de la pandemia en sistemas de salud extremadamente deteriorados por años de violencia, por la saturación en la atención de las víctimas del conflicto, pero también porque hospitales y centros médicos han sido atacados por actores armados como parte de las estrategias de guerra, en abierta vulneración al derecho internacional humanitario. Pese a las dificultades para recopilar datos fiables sobre el impacto real de la COVID-19 en contextos de conflicto armado, informaciones apuntaban a que, por ejemplo, en Yemen la tasa de letalidad por coronavirus

Casos como Siria y Yemen evidenciaron la carga añadida de la pandemia en sistemas de salud extremadamente deteriorados por años de violencia y ataques deliberados contra hospitales y centros de salud

estaba cinco veces por encima de la media mundial.

Adicionalmente, **los conflictos armados continuaron teniendo impactos específicos en grupos de población determinados, como los niños y las niñas**. El informe anual del secretario general de la ONU sobre menores y conflictos armados publicado en junio de 2020, y que analiza la situación entre enero y diciembre de 2019, volvió a ofrecer un panorama de tendencias altamente preocupante. Naciones Unidas verificó más de 25.000 violaciones graves de derechos humanos contra menores en 19 contextos, más de la mitad de ellas perpetradas por agentes no estatales y un tercio por parte de fuerzas gubernamentales o internacionales. El fuego cruzado, el uso de armas ligeras, la utilización de armas explosivas en zonas pobladas y el uso excesivo de la fuerza de agentes estatales habría causado más de 10.000 víctimas entre niños y niñas, incluyendo 4.019 muertes y 6.154 menores afectados por mutilaciones. El conflicto armado más letal para los y las menores continuó siendo Afganistán, donde se observó un incremento de 67% en los ataques suicidas y similares que afectaron a menores. También destacó el caso de Malí que en 2019 registró un número de víctimas infantiles sin precedentes –185 menores muertos y otros 111 mutilados–, en su inmensa mayoría (91%) concentradas en la región de Mopti. Otro contexto que despertó especial preocupación fue Myanmar, ya que la intensificación de la violencia en el estado de Rakhine provocó que las víctimas entre menores de edad se triplicaran en el período analizado. Asimismo, el informe constató el reclutamiento forzado de casi 8.000 menores, algunos de tan solo seis años, en su inmensa mayoría (90%) por actores armados no estatales. La ONU también alertó sobre el secuestro de 1.683 menores en contextos de conflicto –en un 95% por agentes no estatales y en especial en contextos africanos (Somalia, RDC y Nigeria)–, reiteró su denuncia sobre los continuos ataques contra escuelas y llamó la atención sobre los problemas derivados de la denegación de acceso humanitario a niños y niñas –mayoritariamente por restricciones impuestas por actores no estatales, sobre todo en casos como Malí, RCA, Siria o Yemen.

Más allá de las conclusiones del informe del secretario general de la ONU, el análisis de los conflictos armados activos en 2020 confirma el patrón de vulneraciones contra menores, agravados por el contexto de la COVID-19. **La pandemia limitó aún más el acceso a determinados derechos como el de la educación**. Así, por ejemplo, en el caso de Jammu y Cachemira, en Pakistán, el cierre de las escuelas con motivo de la pandemia se sumó a meses de clausura previa de los centros educativos a causa del conflicto. En el marco de la escalada bélica entre Armenia y Azerbaiyán por

11. OCHA, *Global Humanitarian Overview 2021*, 1 de diciembre de 2020.

Nagorno Karabaj, en tan solo un mes de hostilidades resultaron dañadas 76 escuelas y guarderías, según UNICEF. En Siria, continuaron produciéndose ataques armados a escuelas y según datos divulgados a finales de año solo el 50% de los centros educativos del país estaban operativos. Se estimaba que había 2.1 millones de niñas y niños sirios sin escolarizar. Al finalizar el año, UNICEF advertía sobre las repercusiones de la pandemia en el incremento de los riesgos de que menores en contextos de conflicto padezcan malnutrición y de cara a 2021 manifestaba su especial preocupación por la situación de millones de niños y niñas en RDC, Nigeria y la zona central del Sahel, Sudán del Sur y Yemen.¹²

Actores armados estatales y no estatales continuaron perpetrando violencia sexual y de género contra población civil, en especial contra mujeres y niñas, en contextos de conflicto armado. El informe anual del secretario general de la ONU sobre la materia publicado en 2020, que analiza los hechos ocurridos en 2019, confirmó que la violencia sexual continuaba siendo utilizada como una táctica de guerra, de tortura y represión política, así como un instrumento de deshumanización y para forzar desplazamientos de población.¹³

El informe aporta información verificada sobre el uso de la violencia sexual y de género en 19 contextos y señaló la responsabilidad de 54 actores armados, en su mayoría de carácter no estatal, aunque también denunció la implicación de cuerpos de seguridad estatales de varios países, incluyendo RDC, Myanmar, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Siria. La valoración del secretario general de la ONU constata que la violencia sexual continúa siendo un fenómeno infra-denunciado y que las mujeres y niñas –que constituyen el mayor número de víctimas de este flagelo– siguen enfrentando numerosos obstáculos de género para acceder a la justicia y reparación. Adicionalmente, el informe subraya las vulnerabilidades específicas que en este ámbito afectan a las poblaciones desplazadas, tanto en el momento del tránsito como en destino, y su vinculación con el incremento de los matrimonios forzados de menores y el repliegue de mujeres y niñas de actividades laborales y educativas en países como Iraq, Siria, Yemen o Myanmar.

El análisis de los conflictos armados en 2020 corrobora las tendencias identificadas en el informe del secretario general. A lo largo del año informaciones relativas al uso de la violencia sexual y de género se identificaron en numerosos contextos, entre ellos Burundi, Libia, Región Lago Chad (Boko Haram), Somalia, Sudán (Darfur), Myanmar, Pakistán, Siria y Yemen. Personas

LGTBI también fueron víctimas de violencia sexual y de otras violencias en contextos de conflicto armado, como ilustraron los casos de Pakistán o Siria.¹⁴ Durante 2020, los impactos de la COVID-19 también se identificaron en este ámbito, ya que la pandemia incrementó los niveles de violencia de género a nivel global y también en contextos de conflicto armado. Así, por ejemplo, en campos de desplazamiento forzado en Sudán del Sur se detectó un aumento de la violencia sexual tras la aplicación de medidas de restricción de la movilidad para frenar la expansión del coronavirus.¹⁵

Los desplazamientos forzados de población continuaron siendo uno de los efectos más visibles y dramáticos de los conflictos armados.

El informe anual de ACNUR publicado en junio de 2020 confirmó la tendencia de crecimiento exponencial de este fenómeno en la última década: al finalizar 2019 había 79,5 millones de personas desplazadas forzosamente, frente a las 70,8 millones contabilizadas a finales del año anterior. Del total de personas desplazadas, 26 millones eran refugiadas –20,4 millones bajo el mandato de ACNUR y 5,6 millones de palestinos y palestinas bajo el

mandato de la UNRWA– y 45,7 millones se encontraban en una situación de desplazamiento forzado interno. Otras 4,2 millones eran solicitantes de asilo, mientras que 3,6 millones eran personas venezolanas a las que ACNUR reconoció un estatus de desplazamiento especial. Las casi 80 millones de personas desplazadas equivalen a un 1% de la población mundial y el 40% de ellas eran menores de edad. Con la excepción de Venezuela, los principales emisores de población refugiada eran todos países afectados por conflictos armados de intensidad elevada –Siria (6,6 millones de personas), Afganistán (2,7), Sudán del Sur (2,2)– o media –Myanmar (1,1). Respecto a los casos con mayor número de población desplazada internamente, dentro de las

fronteras de los respectivos países, la mayor parte de los casos eran conflictos armados de alta intensidad. Según los datos de International Displacement Monitoring Centre (IDMC) referentes al año 2019 –últimos datos anuales disponibles– sobre los desplazamientos a causa de conflictos y violencia, los países con mayor número de personas en esta situación eran Siria (6,5 millones de personas), Colombia (5,6), RDC (5,5), Yemen (3,6), Afganistán (3), Somalia (2,6), Nigeria (2,6), Sudán (2,1), Iraq (1,6) y Etiopía (1,4).

En 2020 las dinámicas de movilidad humana se vieron severamente afectadas por la COVID-19.

Al finalizar el año tanto ACNUR como IDMC publicaron informes parciales sobre la situación en el primer semestre en los

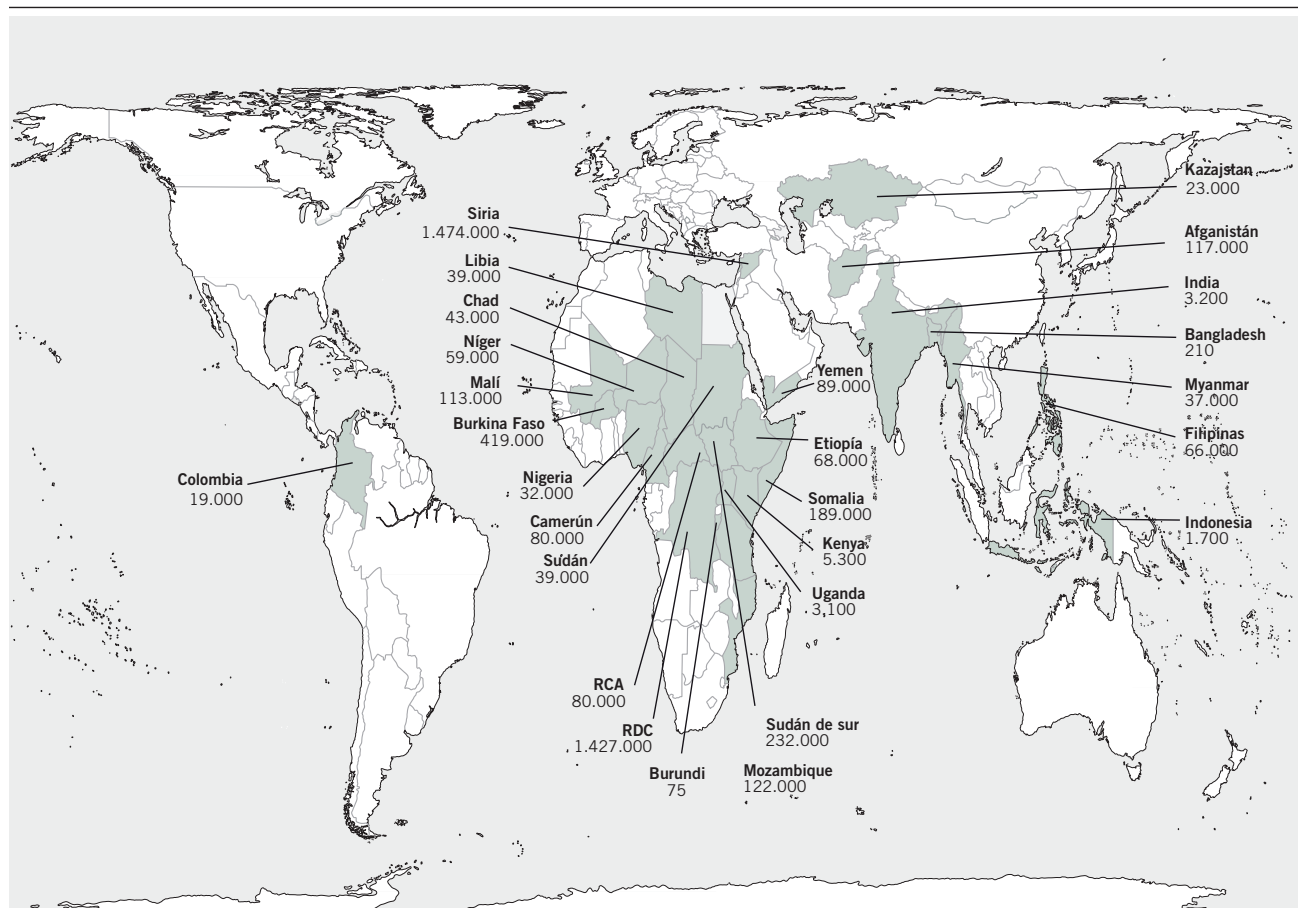
12. UNICEF, *COVID-19 and conflict: A deadly combination*, 30 de diciembre de 2020.

13. UN Secretary General, *Report of the Secretary General on Conflict-related Sexual Violence*, 3 de junio de 2020.

14. Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).

15. Véase “La pandemia de la COVID-19 y el agravamiento de la violencia contra las mujeres” en el capítulo 5 (Escenarios de riesgo para 2021).

Mapa 1.2. Nuevos desplazamientos internos por conflictos y violencia - primer semestre de 2020



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Internal Displacement Monitoring Centre, *Internal displacement 2020: Mid-year update*, IDMC, 2020.

que alertaron sobre las consecuencias de la pandemia en las poblaciones desplazadas, agravando sus situaciones de vulnerabilidad y restringiendo el acceso a mecanismos de protección internacional y a servicios básicos.¹⁶ Según los datos de ACNUR, **168 países cerraron total o parcialmente sus fronteras durante la primera oleada de la pandemia, 90 de los cuales denegaron el acceso a sus territorios sin excepciones para las personas solicitantes de asilo.** Así, durante el primer semestre de 2020 se redujeron en un 33% las solicitudes de asilo en comparación con el mismo período de 2019. Las restricciones de movilidad aumentaron el riesgo de que las personas forzadas a abandonar sus hogares recurrieran a mafias o a rutas más peligrosas en busca de garantías para su seguridad y la de sus familias. Paralelamente, la COVID-19 llevó a un deterioro de las condiciones socioeconómicas de las poblaciones desplazadas, muchas de ellas dependientes de la economía informal. Asimismo, se identificó un incremento del

Pese a las restricciones de movilidad de la pandemia, los desplazamientos forzados a causa de conflictos y violencia continuaron en 2020 y ACNUR anticipaba que a mediados de año ya se había sobrepasado la cifra de 80 millones

trabajo infantil y de los matrimonios forzados de menores, así como un mayor riesgo en la incidencia de violencia de género contra mujeres y niñas desplazadas. Las condiciones de vida habitualmente precarias de las poblaciones desplazadas también dificultaron la puesta en práctica de las medidas más básicas para contener la expansión del virus, como la distancia física o el lavado frecuente de manos. A los problemas de viviendas o campos con condiciones de hacinamiento y dificultades por falta de información se sumaron los obstáculos de acceso a atención de salud. Según ACNUR, el 85% de las personas refugiadas vivía en países con sistemas de salud colapsados y con capacidades limitadas para responder a las complicaciones derivadas del coronavirus. IDMC destacó que las medidas para contener la expansión de la COVID-19 también limitaron las posibilidades de obtener información sobre la situación de las poblaciones desplazadas, en especial las personas forzadas a huir dentro de las fronteras de sus países.

16. UNHCR, *Mid-year trends 2020*, 30 de noviembre de 2020; IDMC, UNHCR, *Report on UNHCR's Response to COVID-19*, septiembre de 2020; IDMC, *Internal Displacement 2020: Mid-year Update*, septiembre de 2020.

Pese a las restricciones de movilidad añadidas a causa de la pandemia, los desplazamientos forzados a causa de conflictos y violencia continuaron en 2020 y ACNUR anticipaba que a mediados de año ya se había sobrepasado la cifra de 80 millones. Nuevos y masivos desplazamientos de población se produjeron en el marco de conflictos armados como los de Burkina Faso, Camerún, RDC, Mozambique, Somalia, Siria y Yemen. IDMC contabilizó 4,8 millones de nuevos desplazamientos a causa de conflictos y violencia en los primeros seis meses de 2020. Solo en Siria y RDC los desplazamientos forzados internos en el primer semestre de 2020 afectaron a tres millones de personas –1.474.000 y 1.427.000, respectivamente. Durante el segundo semestre del año, la escalada de violencia en otros contextos como la región de Tigray en Etiopía o el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno Karabaj motivaron nuevos desplazamientos forzados de población. Así, en noviembre se estimaba que en menos de un mes de hostilidades más de 40.000 personas procedentes de Tigray habían buscado refugio en Sudán. El conflicto en torno a Nagorno Karabaj, en tanto, habría provocado el desplazamiento de entre 100.000 y 130.000 personas, según diversas estimaciones.

1.3. Conflictos armados: evolución anual

1.3.1. África

África Austral

Mozambique (norte)	
Inicio:	2019
Tipología:	Sistema, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Islamic State Central Africa Province (ISCAP) -anteriormente autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ)-, al-Qaeda, empresa de seguridad privada sudafricana DAG (Dyck Advisory Group)
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

La provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, padece desde finales de 2017 un conflicto armado protagonizado por el autodenominado Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ). La organización armada de carácter yihadista hizo su primera aparición en octubre de 2017 atacando tres puestos policiales en el distrito de Mocimboa de Praia, provincia de Cabo Delgado. Desde ese momento, Cabo Delgado ha sido el epicentro de un aumento en la actividad violenta en el país. Si bien algunos informes aseguran que combatientes de ASWJ han recibido capacitación en Tanzania y Somalia, lo cual ha dado lugar a que se les apode localmente como al-Shabaab, en alusión al grupo yihadista somalí, no se han acreditado vínculos significativos con las redes yihadistas

internacionales. Las causas de la eclosión de la violencia remiten más bien a factores vinculados con los agravios y la marginación de la minoría musulmana de Mozambique (22 % de la población), así como a la extrema pobreza de la que es la provincia más subdesarrollada del país. Los índices de pobreza en Cabo Delgado contrastan con su enorme potencial económico debido a sus importantes reservas de gas natural, lo cual ha generado importantes inversiones en la zona que no han contribuido a reducir la desigualdad y la pobreza de su población. Desde finales de 2017, las fuerzas de seguridad mozambiqueñas han desarrollado una política de seguridad que ha incrementado la represión y represalias en la zona, incidiendo en nuevos factores detonantes de la violencia. En 2018, el grupo intensificó su uso de la violencia contra civiles y amplió el alcance de sus operaciones.

Durante el año la violencia armada en la provincia norteña de Cabo Delgado padeció una importante escalada debido a las acciones de grupos con agendas yihadistas y a la respuesta de las fuerzas de seguridad.

Los datos facilitados por ACLED dan muestra del deterioro de la situación de seguridad, registrando la tasa de homicidios más alta de los últimos 10 años en el país, lo cual, según analistas, tiene una relación directa con el conflicto armado en Cabo Delgado. Durante el 2020 ACLED registró **1.639 muertes violentas en Cabo Delgado**, afectando a 10 de sus 17 distritos, lo que significa más del doble de muertes en relación al año anterior, cuando se registraron 689, y muy superior a las 126 que se contabilizaron en 2018 o las 119 en 2017, año de inicio de las acciones insurgentes. Estimaciones de Naciones Unidas a finales de año, apuntaron que la violencia en la región había desplazado, al menos, a 424.000 personas desde 2017. Solo en los seis primeros meses de 2020 ACNUR registró 125.300 personas desplazadas internamente en el país.¹⁷

Si bien en junio del 2019 se produjo la primera **reivindicación de los ataques en Cabo Delgado por parte del grupo armado Estado Islámico (ISIS)**, su presencia en el país fue negada por las autoridades mozambiqueñas hasta abril de 2020. Después de una masacre de 52 personas que se habían negado a ser reclutadas por la insurgencia, el Gobierno presidido por Filipe Nyusi reconoció por primera vez la presencia de militantes de ISIS. La propia insurgencia norteña, conocida localmente como “al-Shabaad”, pasó a denominarse Islamic State Central Africa Province (ISCAP), proclamando su objetivo de establecer un califato en la región. A su vez, el 22 de mayo, al-Qaeda también realizó por primera vez reivindicaciones de ataques en el país con una acción armada en el distrito de Mocimboa da Praia. La violencia no sólo se concentró en el norte de Mozambique, sino que también se registraron a lo largo del año diversos incidentes armados en el sur de Tanzania, frontera con Cabo Delgado. Durante octubre, ISIS reivindicó su primer ataque en suelo tanzano¹⁸.

17. UNHCR, *Mid-year trends 2020*, 30 de noviembre de 2020.

18. Véase el resumen sobre Tanzania en el capítulo 2 (Tensiones).

Entre los acontecimientos violentos registrados durante el año destacó el inicio de acciones armadas dirigidas contra centros urbanos a partir del mes de marzo. Un ejemplo de ello lo representó **la toma de la ciudad de Mocímboa da Praia en tres ocasiones en marzo, junio y agosto**. Por otro lado, se registraron múltiples ataques con una alta tasa de mortalidad, entre los que destacaron dos masacres perpetradas por la insurgencia en el distrito de Miudumbe. En la primera, el 7 de abril, al menos 52 personas fueron decapitadas en un ataque en la comunidad de Xitaxi; en la segunda, en octubre, otras 50 personas fueron decapitadas en el campo de fútbol de la comunidad de Muatide, siendo otras muchas secuestradas. Según diversos analistas, una de las razones que ayuda a explicar la violencia contra la población de Miudumbe se relaciona con la formación de milicias comunitarias para combatir del lado del Gobierno. El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó las masacres e instó a las autoridades del país a realizar una investigación sobre los incidentes. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que la población se encuentra en una situación desesperada, realizando un llamamiento al Gobierno mozambiqueño para que garantice el acceso sin trabas a las agencias humanitarias.

Aumentó la inestabilidad y la crisis humanitaria en la región de Cabo Delgado, norte de Mozambique

En medio del empeoramiento de la situación humanitaria, medios de prensa se hicieron eco del surgimiento de milicias comunitarias compuestas por veteranos del Ejército que se están enfrentando a la insurgencia yihadista. A su vez, miembros de las fuerzas de seguridad mozambiqueñas fueron acusados en varias ocasiones por su supuesta implicación en **violaciones de los derechos humanos, torturas, asesinatos indiscriminados y extrajudiciales**, lo cual contribuyó a exacerbar el discurso antigubernamental de la rebelión. Varios organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitaron al Gobierno una investigación independiente e imparcial sobre las torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado en Cabo Delgado.¹⁹ Incluso el Parlamento Europeo condenó el 18 de septiembre el uso desproporcionado de la fuerza, después de que se viralizase un vídeo que muestra el asesinato de una mujer por parte de supuestos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Intervención Rápida de Mozambique, hechos que el Gobierno negó, denunciando una campaña de “desinformación” de los insurgentes.

El incremento de la violencia e inestabilidad en la región generó la reacción del **organismo regional** Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC). A mediados de mayo, los Gobiernos de Botswana, Zambia y Zimbabwe instaron a los países miembros de la SADC a dar su apoyo al Gobierno de Mozambique frente

a la insurgencia. Posteriormente, el 17 de agosto, la SADC declaró en su cumbre anual su “compromiso de apoyar a Mozambique en la lucha contra el terrorismo y los atentados violentos”. El partido gobernante de Zimbabwe, el ZANU-PF, manifestó su intención de ofrecer asistencia a Mozambique en Cabo Delgado a cambio de que el Gobierno de EEUU alivie las sanciones sobre el país. A finales de noviembre, la SADC celebró una cumbre extraordinaria en Botswana, centrada en temas de seguridad, en donde acordó una “respuesta regional integral” para hacer frente a la inseguridad en el norte de Mozambique, sin dar detalles sobre el tipo de respuesta. De forma paralela, una semana antes de la cumbre, Tanzania y Mozambique firmaron un acuerdo para unir fuerzas para luchar contra la insurgencia. Paralelamente, en septiembre, el Ejecutivo mozambiqueño solicitó asistencia a la UE para hacer frente a la insurgencia. La UE anunció en octubre, un programa de capacitación, apoyo logístico y servicios médicos para las fuerzas de Mozambique. A su vez, cabe señalar que durante el año la empresa de seguridad privada sudafricana DAG (Dyck Advisory Group) sustituyó a la compañía de seguridad rusa Wagner y comenzó a operar en la guerra contra la insurgencia en Cabo Delgado, principalmente mediante la formación de tropas, el despliegue de operaciones aéreas y el suministro de mercenarios en terreno.

África Occidental

Camerún (Ambazonia/North West y South West)	
Inicio:	2018
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Camerún, movimiento secesionista político-militar en el que destacan la coalición opositora Ambazonia Coalition Team (ACT, incluyendo IG Sako, del que forman parte los grupos armados Lebialem Red Dragons y SOCADEF) y Ambazonia Governing Council (AGovC, incluyendo el IG Sisiku, cuyo brazo armado es el Ambazonia Defence Forces, ADF)
Intensidad:	3
Evolución:	=
Síntesis:	Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Camerún quedó bajo el mandato de la Sociedad de Naciones y se dividió entre el Camerún francés y el Camerún británico. En 1961 los dos territorios que componían el Camerún británico celebraron un plebiscito en el que se limitaba su autodeterminación a la unión con la ya independiente República de Camerún (antiguo Camerún francés) o a la unión con Nigeria. La parte sur del Camerún británico

19. Amnistía Internacional, “Mozambique: Torture by security forces in gruesome videos must be investigated”, 9 de septiembre de 2020.

(territorio que actualmente corresponde a las provincias de North West y South West) decidió unirse a la República del Camerún, mientras que el norte prefirió adherirse a Nigeria. Una re-unificación mal conducida en los años sesenta, basada en la centralización y la asimilación, ha llevado a la minoría anglófona del antiguo sur del Camerún británico (20% de la población del país) a sentirse marginada política y económicamente por parte de las instituciones del Estado, controlado por la mayoría francófona. Sus frustraciones se incrementaron a finales de 2016 cuando una serie de agravios sectoriales se transformaron en demandas políticas, lo que provocó huelgas, disturbios y una escalada creciente de la tensión y de la represión gubernamental. Este clima ha contribuido a que una mayoría de la población de la región exija un nuevo estatus político de carácter federal sin excluir la secesión de la región. Esta movilización ha comportado el resurgir de los movimientos identitarios que datan de los años setenta. Estos movimientos exigen un retorno al modelo federal que existió entre 1961 y 1972. El Gobierno arrestó a las principales figuras del movimiento federalista en 2017, lo que dio alas a sectores favorables a la lucha armada para alcanzar la independencia. Desde entonces, las dos regiones anglófonas han vivido huelgas generales, boicots escolares y violencia esporádica. A partir de la declaración de independencia el 1 de octubre de 2017 y la subsiguiente represión gubernamental para sofocar el movimiento secesionista, se produjo una escalada de las actividades insurgentes.

Las dos regiones anglófonas del oeste de Camerún continuaron afectadas por el grave clima de violencia como consecuencia de las acciones de los actores armados secesionistas, así como del excesivo uso de la fuerza y las operaciones de contrainsurgencia llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas y las milicias locales, e incluso los grupos armados cometieron algunos ataques fuera de ambas provincias. El conflicto ha causado más de 3.000 víctimas mortales y el desplazamiento de más de 900.000 personas en menos de tres años, y ha provocado que alrededor de 800.000 menores no puedan asistir a la escuela. Centenares de insurgentes, miembros de los cuerpos de seguridad y milicias de autodefensa murieron en enfrentamientos y emboscadas, decenas de localidades y casas fueron incendiadas por los cuerpos de seguridad y diversos líderes insurgentes fueron ejecutados en diferentes momentos del año, como el general Aladji (mayo), el general Okoro (julio), el general Mad Dog (septiembre) y el general Mendo Ze (octubre). En lo concerniente al clima de violencia, los cuerpos de seguridad y, en menor medida, los actores armados separatistas, han sido acusados de graves abusos a los derechos humanos. En abril, por primera vez el Gobierno reconoció que el Ejército se había visto involucrado en una matanza de civiles (tres mujeres y 10 menores según el Gobierno, 23 civiles, incluyendo 15 menores, de acuerdo con los datos de la ONU) cometida a mediados de febrero en un ataque contra la localidad de

A pesar de la persistencia del grave clima de violencia en las dos regiones anglófonas de Camerún, se celebraron contactos entre representantes del Gobierno y del movimiento secesionista

Ngarbuh. El Gobierno acabó llevando ante un tribunal militar a los responsables. En un primer momento el Gobierno desmintió los hechos pero las evidencias y las presiones de la comunidad internacional (ONU, EEUU y UE) cambiaron la posición gubernamental. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y Human Rights Watch (HRW) señalaron que el reconocimiento era un paso positivo pero insuficiente, mientras que una coalición de 26 ONG locales afirmaron que la verdad sobre los hechos y las cifras todavía no habían salido a la luz, al haber descubierto 31 cuerpos, incluyendo 14 menores, y que al menos habían participado entre 10 y 15 soldados y otros 30 milicianos durante el ataque, cifra muy superior a la ofrecida por el Gobierno. El líder Ayaba Cho Lucas, del grupo secesionista AGovC, exigió una comisión independiente para depurar responsabilidades. A pesar de esto, durante el año persistieron los ataques y abusos contra la población civil y muertes bajo custodia (como el periodista Samuel Wazizi) por parte de los cuerpos de seguridad, así como los secuestros de estudiantes y profesores, y ejecuciones de supuestos espías por parte de los grupos secesionistas. HRW denunció el 27 de julio que al menos 285 civiles habían muerto en ambas provincias desde enero de 2020. El 24 de octubre un grupo armado no identificado atacó y ejecutó a seis estudiantes en un colegio de la localidad de Kumba, hecho condenado por el Gobierno y por la ACNUDH, aunque los grupos secesionistas se desvincularon de los hechos.

Por otro lado, el 9 de febrero se celebraron las elecciones municipales y legislativas después de siete años y tras haber sido postpuestas dos veces. A pesar de los retrasos, la campaña electoral se vio afectada por múltiples actos de violencia y enfrentamientos, según organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional. Los grupos armados separatistas habían realizado un llamamiento a boicotear las elecciones, e incluso amenazaron a la ciudadanía para que no ejerciera el voto en las dos regiones. Los principales partidos opositores no tuvieron una posición común de cara a la participación en las elecciones, y mientras que tanto el MRC como el SDF criticaron la ley electoral y el control que ejerce el Gobierno de los instrumentos electorales, el MRC anunció el boicot electoral y el SDF lo rechazó. No obstante, la jornada electoral transcurrió prácticamente sin incidentes y con una baja participación, lo que favoreció al partido en el poder, según diversos analistas. Según diversos análisis, el presidente Paul Biya siguió utilizando la maquinaria del Estado para garantizar su gobierno de partido único.²⁰ Las elecciones legislativas parciales en las regiones anglófonas volvieron a celebrarse a finales de marzo por decisión del tribunal constitucional, y el partido en el poder, el RDPC de Biya, obtuvo los 13 escaños en juego en las 11 circunscripciones en liza en las elecciones. La

20. Paul-Simon Handy y Fonteh Akum; "Cameroon holds elections in a time of crisis", ISS, 5 de febrero de 2020.

victoria fortaleció todavía más la mayoría parlamentaria que ostenta el RDPC con 152 de los 180 escaños. El partido opositor SDF, dominado por la comunidad anglófona, cuestionó los resultados de las elecciones parciales, pero el tribunal constitucional rechazó su demanda para una repetición de los comicios.

Cabe destacar que el 2 de julio se celebró una ronda de contactos entre representantes del Gobierno y del movimiento secesionista encabezados por el líder encarcelado Sisiku Julius Ayuk Tabe.²¹ Este anuncio fue celebrado por numerosos actores sociales y políticos del país, así como por parte de la comunidad internacional, aunque el silencio del Gobierno y los desmentidos posteriores pusieron de manifiesto una lucha interna entre sectores favorables a la búsqueda de una solución negociada al conflicto y sectores que pretenden una solución militar. Esta lucha está vinculada a la sucesión de Paul Biya al frente del país después de 37 años en el poder, según diferentes fuentes.²² En un intento de unificar a los grupos armados secesionistas, Ayuk Tabe hizo un llamamiento el 15 de octubre a los diferentes líderes insurgentes a colaborar con el AGovC.

Decisiones adoptadas en septiembre por el Gobierno pusieron de manifiesto la prevalencia de la línea militarista. Se prohibieron todas las manifestaciones, justificando la decisión como consecuencia de la pandemia del coronavirus y en aplicación de la ley de 2014 contra actos de terrorismo, a lo que HRW anunció que el Gobierno utilizaba la pandemia y la ley antiterrorista como pretexto para prohibir el derecho de reunión. En respuesta al asesinato de un oficial de policía en Bamenda, la capital de la región de North West, el Ejército prohibió el uso de motocicletas y lanzó el 8 de septiembre una operación militar sin precedentes en la ciudad de cara a capturar a posibles miembros de los grupos armados. El operativo incluyó arrestos indiscriminados, tiroteos y muerte de civiles, acción justificada por el Ejército como respuesta a diversos ataques, saqueos y robos de bancos y tiendas, cometidos por los grupos armados. Además, el 17 de septiembre, un tribunal de apelaciones de Yaoundé confirmó la cadena perpetua de Sisiku por cargos de terrorismo y secesión. Al día siguiente de esta decisión, Maurice Kamto, líder del MRC, hizo un llamamiento a la movilización social para exigir un alto el fuego con la insurgencia secesionista y reformas electorales como consecuencia de la decisión gubernamental de celebrar las elecciones regionales en diciembre. El MRC anunció que centenares de personas habían sido arrestadas en Douala y Yaoundé en las movilizaciones y en los días previos a las mismas, entre las cuales se encuentran miembros del partido, o activistas del grupo Stand Up for Cameroon. Tras las protestas, el domicilio de Kamto fue custodiado por las fuerzas de seguridad, sometiéndole a un arresto domiciliario de facto, según denunció Kamto

el 29 de septiembre al medio RFI, arresto que seguía activo a finales de año.

A esta situación se añade el creciente clima de tensión política entre los partidarios del actual presidente, ratificado en las elecciones de 2018 y los partidarios del opositor Maurice Kamto, tal y como señaló el centro International Crisis Group (ICG) en diciembre. Kamto continuó cuestionando los resultados de las elecciones presidenciales de 2018 y los partidarios de ambos bandos alimentaron el clima de odio y violencia a través de las redes sociales, clima que adquiere un componente étnico, lo que supone una nueva amenaza para la frágil estabilidad del país, ya afectado por la grave violencia que sacude las provincias anglófonas, así como por la persistencia de los ataques por parte de Boko Haram en la provincia de Far North. El ICG planteó que el Gobierno debería corregir las deficiencias en el sistema electoral que socavaron la credibilidad de las elecciones de 2018 y combatir la persecución por motivos étnicos en las redes sociales. En este sentido, los partidos MRC y SDF anunciaron el boicot de las elecciones regionales celebradas el 6 de diciembre, en las que el RDPC de Paul Biya arrasó venciendo en nueve de los 10 consejos regionales.

Malí	
Inicio:	2012
Tipología:	Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA), Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción), MSA, Ansar Dine, MUYAO, AQMI, MRRA, al-Mourabitoun, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP) –también conocido como Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS)–, Katiba Macina, MINUSMA, Francia (operación Barkhane), Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), EEUU, Takouba Task Force (Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Malí, Holanda, Níger, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido)
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Síntesis:	La comunidad tuareg que puebla el norte de Malí vive en una situación de marginación y subdesarrollo que desde tiempos coloniales ha alimentado diversas revueltas y la organización de frentes armados contra el poder central. En los noventa, tras un breve conflicto armado, se logró un acuerdo de paz

21. Véase el resumen sobre Camerún en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) de Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2021.

22. R. Maxwell Bone, "Political Infighting Could Obstruct a Nascent Peace Process in Cameroon", *WPR*, 22 de septiembre de 2020.

que prometía inversiones y desarrollo para el norte. La falta de implementación impidió que el acuerdo sirviera de freno a la configuración de nuevos grupos armados que exigían una mayor autonomía para la zona. La caída del régimen de Muammar Gaddafi en Libia en 2011, que durante años había dado cobijo a la insurgencia tuareg maliense e incorporado a parte de sus miembros dentro de sus cuerpos de seguridad, favoreció el resurgimiento de los grupos rebeldes tuareg en el norte del país que claman por la independencia de Azawad (nombre con el que los tuareg designan la región norte de Malí). Tras avanzar en el control de la zona aprovechando la situación de inestabilidad política en Malí a principios de 2012, el grupo armado tuareg Movimiento por la Liberación de Azawad (MNL) se vio crecientemente desplazado por grupos radicales islamistas que operan en la región y que avanzaron posiciones en el norte de Malí. La internacionalización del conflicto se acentuó en 2013, tras la intervención militar de Francia y el despliegue de una misión de mantenimiento de la paz (MINUSMA) en el país. Si bien en 2015 se logró la firma de un acuerdo de paz en el norte del país entre los grupos árabe-tuareg (CMA y Plataforma), la exclusión de las negociaciones de paz de los grupos con agendas yihadistas ha mantenido la guerra y extendida las dinámicas de la misma a la región central del país (Mopti).

Un año más se produjo un incremento de la violencia en gran parte del territorio maliense debido a las acciones armadas perpetradas por grupos de corte yihadista en el norte y centro del país, a enfrentamientos entre milicias de las comunidades fulani, dogon y bambara en la región central de Mopti y algunas partes de la región sur del país, a enfrentamientos armados entre las dos coaliciones de grupos yihadistas en la región, así como a las respuestas de las fuerzas de seguridad.

Según datos del centro de investigación ACLED, el 2020 fue el año con más muertes en el país desde que estalló la última ola de violencia, con alrededor de un millar de eventos violentos concentrados en las regiones norte, centro y sur, que han dejado un balance de al menos 2.731 víctimas mortales. Estos datos comportan un incremento significativo en relación a las 1.702 muertes registradas en 2019. Las razones se deben al incremento de la violencia en la región central del país, así como a la lucha por la expansión de las coaliciones yihadistas vinculadas con al-Qaeda –Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM o GSIM)– y con el grupo armado Estado Islámico –Estado Islámico en el Gran Sahara (ISGS) o Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP). Asimismo, en materia de desplazamiento forzoso, según datos de ACNUR, al finalizar el año 138.659 personas se encontraban refugiadas en países vecinos, mientras que otras 201.429 se hallaban en situación de desplazamiento interno.

En el centro del país, principal foco de la violencia, durante todo el año se registraron múltiples enfrenta-

mientos y ataques entre milicias comunitarias formadas por miembros de las comunidades fulani, dogon (dozos) y bambara en la región de Mopti. La violencia también se intensificó debido a la nueva estrategia ofensiva adoptada por el Gobierno maliense de ampliar las operaciones militares contra las organizaciones yihadistas en Mopti. Dicha estrategia también fue acompañada por el aumento de las acciones de contrainsurgencia por parte de la operación francesa Barkhane, que pasó a ampliar su presencia militar en el territorio saheliano y a aumentar el número de tropas desplegadas de los 4.500 soldados a 5.100. Si bien a principios de año en Bamako se registraron protestas contra la presencia militar francesa en el país, el presidente de Malí, Ibrahim Boubacar Keita, en una reunión mantenida en Francia entre los jefes de Estado que componen la operación antiterrorista Sahel G-5 y el presidente francés, Emmanuel Macron, acordaron intensificar la cooperación militar con Francia para contrarrestar la amenaza yihadista en el Sahel. A su vez, el 29 de enero, el primer ministro maliense, Boubou Cissé, se comprometió a aumentar el tamaño de las Fuerzas Armadas del país en un 50% en el año 2020.²³ El aumento de la militarización y de la estrategia antiterrorista en la zona también generó diversas denuncias de violación de los derechos humanos dirigidas contra las fuerzas de seguridad. En una de ellas, el 30 de abril, la misión de la ONU en el país (MINUSMA) hizo público un informe en el que sostiene que las fuerzas de seguridad de Malí y Níger llevaron a cabo 135 ejecuciones extrajudiciales entre el 1 de enero y el 31 de marzo en Mopti. La MINUSMA sostuvo que los datos están documentados y que las autoridades malienses han abierto una investigación.

La intensificación de la violencia generó entre enero y junio, según datos de Naciones Unidas, alrededor de 600 civiles asesinados. En junio, el Consejo de Seguridad de la ONU amplió el mandato de la MINUSMA por otros 12 meses, manteniendo el número de tropas desplegadas, que ascienden a 13.289 soldados y 1.920 policías.

De forma paralela, a principios de año el Gobierno maliense anunció la intención de abrir vías de diálogo con los líderes yihadistas Amadou Kouffa (Frente de Liberación de Macina) e Iyad ag Ghaly (JNIM). Iyad ag Ghaly anunció que se abría a explorar negociaciones siempre que las fuerzas francesas de la operación Barkhane y la MINUSMA se retiraran del país. La postura del JNIM generó divisiones internas en la organización y deserciones de algunos miembros que se unieron a las filas del ISWAP. Este escenario también dio paso a una **guerra abierta entre las coaliciones armadas que conforman el JNIM y el ISWAP** que se mantuvo durante todo el año en el norte y centro de Malí, así como en el triángulo fronterizo conformado por Malí, Burkina Faso y Níger. Según datos de ACLED, estos

El inicio de la guerra abierta entre las coaliciones armadas yihadistas que conforman el JNIM y el ISWAP provocó un aumento de la violencia en Malí

23. Véase el resumen sobre Región Sahel Occidental en este capítulo.

enfrentamientos dejaron durante el año un estimado de 415 muertes. A su vez, las fuerzas francesas de la operación Barkhane anunciaron a lo largo del año múltiples acciones antiterrorista dirigidas contra las organizaciones yihadistas, que entre otros resultados, costaron la vida al veterano líder de AQMI, Abdelmalek Droukdel, en una operación realizada el 3 de junio en Talhandak, Kidal;²⁴ así como al alto comandante del JNIM, Bah ag Moussa, en otra operación realizada el 13 de noviembre en Ménaka.

Finalmente, el deterioro de la situación de seguridad en el país se vio acrecentado debido a la **crisis política en la que estuvo inmerso durante el 2020**. Tras meses de manifestaciones y protestas, en agosto se produjo un golpe de Estado que condujo a la caída del Gobierno, dando inicio a un nuevo Ejecutivo liderado por la Junta Militar denominada National Committee for the Salvation of the People (CNSP). Desde un primer momento el CNSP afirmó que se respetarán todos los acuerdos de seguridad del pasado, que incluían el apoyo a la MINUSMA, a la Operación Barkhane, a la fuerza del Sahel G-5, así como a las fuerzas especiales europeas de la iniciativa Takuba.²⁵ Si bien el golpe militar generó que múltiples países inmersos en las acciones militares en Malí paralizasen sus apoyos hasta la vuelta al orden constitucional, en octubre, tras la conformación del Gobierno de transición con participación de civiles, la UE anunció la reanudación de sus actividades de formación y desarrollo de capacidades militares en Malí a través de la EUTUM. El nuevo Gobierno interino anunció el 8 de octubre la liberación de 200 personas presas, incluidas figuras destacadas del JNIM, a cambio de la liberación por parte del JNIM de cuatro rehenes, incluido el líder de la oposición, Soumaïla Cissé.

Región Lago Chad (Boko Haram)	
Inicio:	2011
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Nigeria, milicia progubernamental Civilian Joint Task Force, facciones de Boko Haram (ISWAP, JAS-Abubakar Shekau, Ansaru, Bakura), milicias civiles, fuerza conjunta MNJTF (Benín, Nigeria, Camerún, Chad, Níger)
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

La secta islamista Boko Haram reclama el establecimiento de un Estado islámico en Nigeria y considera a las instituciones públicas nigerianas como corruptas y decadentes. El grupo –cuyo nombre significa “la educación occidental es un pecado”– se inscribe dentro de la rama integrista que otras formaciones iniciaron en Nigeria desde la independencia en

1960 y que, periódicamente, produjeron brotes de violencia de mayor o menor envergadura. Pese a la fuerte represión a la que han sido sometidos sus miembros, el grupo armado continúa en activo y el alcance de sus ataques se ha ampliado, agravando la situación de inseguridad en el país con un elevado impacto en la población civil. Una filial del grupo, Ansaru, también ha protagonizado ataques en el país. Organizaciones internacionales de derechos humanos han alertado sobre los crímenes cometidos por Boko Haram, pero también sobre los abusos del Gobierno en su campaña contra el grupo. En el año 2015 el conflicto se regionalizó, afectando también a los países fronterizos con el Lago Chad: Chad, Níger y Camerún. Desde mediados de 2016 Nigeria, Níger, Chad y Camerún han desarrollado una estrategia regional de presión militar sobre BH a través de la implementación de una fuerza militar conjunta regional (MNJTF), lo que ha puesto de manifiesto la resiliencia del grupo y también la falta de voluntad de las autoridades políticas y militares nigerianas para hacer frente a la situación, además de las deficiencias de las Fuerzas Armadas nigerianas, con graves problemas de corrupción internos. BH se ha dividido en cuatro facciones: Jama’atu Ahlus-Sunna Lidda’Awati Wal Jihad (JAS) facción liderada por Abubakar Shekau, líder de BH desde 2009; Ansaru, alineada con al-Qaeda en 2012 y que desde 2013 no había cometido acciones militares hasta principios de 2020; Islamic State West Africa Province (ISWAP) escindida de JAS en 2016; y finalmente Bakura, escisión de ISWAP en 2018 que posteriormente se aproximó a Shekau en oposición a ISWAP.

La situación de seguridad se caracterizó por la persistencia de las actividades de Boko Haram (BH), a pesar de las operaciones contrainsurgentes, provocando nuevos desplazamientos de población y agravando la crisis humanitaria existente. Las operaciones militares permanentes de los cuerpos de seguridad de Nigeria, las milicias progubernamentales y la Fuerza Conjunta Multinacional (MNJTF) principalmente contra las dos facciones de BH –Islamic State West Africa Province (ISWAP) y Jama’atu Ahlus-Sunna Lidda’Awati Wal Jihad (JAS) liderada por Abubakar Shekau– no afectaron en la evolución de las actividades de ambos grupos. Estos siguieron planteando una grave amenaza, que dio lugar a una prolongada crisis humanitaria y violaciones generalizadas de los derechos humanos, entre ellas masacres de civiles, la mutilación y el secuestro de menores y la violencia sexual contra ellos. BH también continuó su campaña de secuestros y ejecución sumaria de trabajadores humanitarios, así como de ataques suicidas contra la población. **Cabe destacar el resurgimiento del grupo armado Ansaru, que reivindicó en enero su primera acción desde 2013.** Fuentes militares señalaron evidencias del reinicio de las actividades del grupo, que incrementó sus acciones principalmente en el estado de Kaduna. Las regiones de los países que limitan con el noreste de Nigeria, a saber, Extrême Nord en Camerún, Diffa en Níger y la provincia de Lac del Chad, también se vieron afectadas por los persistentes ataques armados de las diferentes facciones del grupo. El balance de las acciones de BH y de los enfrentamientos entre las facciones de BH y

24. Véase el resumen sobre Argelia (AQMI) en el capítulo 2 (Tensiones).

25. Véase el resumen sobre Malí en el capítulo 2 (Tensiones).

las fuerzas de seguridad desde el inicio del conflicto en 2011 es de 39.708 víctimas mortales, según la base de datos de Nigeria Security Tracker (NST). El número de víctimas mortales en los estados nigerianos de Borno, Yobe y Adamawa fue muy similar al del año anterior (2.603 en 2020 frente a 2.607 en 2019), en comparación a los 2.243 en 2018 y 1.907 en 2017, estabilizando la tendencia creciente de años anteriores. Si a esta cifra le sumamos las víctimas mortales del conflicto en las zonas colindantes de la región del Lago Chad, el total se eleva a 3.770. Borno y Lac, con 2.335 y 1.088 víctimas mortales respectivamente, fueron las regiones más afectadas.

Por otra parte, desde su creación en 2016, la facción de BH conocida como ISWAP ha lanzado más ataques y ha causado más víctimas mortales en los cuerpos de seguridad que la facción de JAS de BH, ambas aliadas al grupo armado Estado Islámico (ISIS), según señaló ICG en octubre.²⁶ En este sentido, y tal y como remarcó el think tank a partir de entrevistas con desertores de BH, la relación con ISIS ha sido beneficiosa para ambas partes, ya que por un lado ha ayudado a mantener activa la marca del grupo armado, a pesar de las pérdidas en Siria e Iraq, y las facciones de BH han recibido formación ideológica, tecnológica, militar, logística, así como recursos que han servido para fortalecer la disciplina y la efectividad del grupo. Además, ISIS estaría intentando ejercer un mayor control sobre ISWAP, lo que ha generado tensiones internas e incluso la purga y ejecución de algunas figuras de ISWAP, como Mamman Nur en 2018, e Idris al-Barnawi (Ba Idrissa, quien había sustituido a Abu Musab al-Barnawi en marzo de 2019) y dos de sus comandantes –Abu Maryam y Abu Zainab– en febrero de 2020, lo que supondría ejercer la autoridad de ISIS más directamente sobre el grupo. Según fuentes locales, estas últimas ejecuciones también se deberían a que sus combatientes habrían cuestionado a sus líderes por decisiones relativas a la no ejecución de soldados en retirada o capturados.²⁷ En paralelo, cabe destacar la muerte por parte de la MNJTF del líder de la facción Bakura de BH, Malam Bakura, escindido de ISWAP en 2018, cuyo grupo era activo en el sur de Níger y en algunas islas del Lago Chad. La emergencia provocada por el conflicto está afectando a 17 millones de personas en los cuatro países, y ha provocado el desplazamiento forzado de 2,87 millones de personas, según OCHA. En la región del Lago Chad, una de cada tres familias padece inseguridad alimentaria y una de cada dos personas necesita asistencia humanitaria urgente.

En diciembre la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, presentó las conclusiones tras diez años de la apertura del examen preliminar de la situación de violaciones de derechos humanos en Nigeria y los posibles crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en el Delta del Níger, en los estados del cinturón central (Middle Belt) y en

el contexto del conflicto entre BH y los cuerpos de seguridad nigerianos. En ellas se afirma que existe una base razonable para creer que tanto miembros de la insurgencia de BH y sus grupos escindidos, así como miembros de cuerpos de seguridad cometieron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Si bien la fiscalía sostuvo que la gran mayoría de los crímenes son atribuibles a actores no estatales, la incorporación de investigaciones por la CPI contra el actuar de las fuerzas de seguridad representa una buena noticia en la búsqueda de la justicia y el fin de la impunidad. La fiscalía investigará a ambas partes por crímenes que incluyen el asesinato, violación, tortura y tratos crueles; ultrajes a la dignidad personal; ataques intencionados contra la población civil como tal y contra civiles individuales que no participan directamente en las hostilidades; encarcelamiento ilegal; reclutamiento y alistamiento de niños menores de quince años en las Fuerzas Armadas y utilizarlos para participar activamente en las hostilidades; persecución por motivos políticos y de género; y otros actos inhumanos. Además, en el caso de la insurgencias también se añade esclavitud sexual, incluidos embarazos y matrimonios forzados; esclavitud; toma de rehenes; ataques intencionados contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos involucrados en tareas de asistencia humanitaria; ofensivas deliberadas contra edificios dedicados a la educación y lugares de culto e instituciones similares. Y en el caso de las investigaciones contra las fuerzas de seguridad, también se incluyen acusaciones de desaparición forzada y traslado forzoso de población.

Región Sahel Occidental	
Inicio:	2018
Tipología:	Sistema, Identidad, Recursos Internacional
Actores:	Burkina Faso, Malí, Níger, Costa de Marfil, Fuerza Conjunta Sahel G5 (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), Joint Task Force para la región Liptako-Gourma (Malí, Níger y Burkina Faso), MINUSMA, Francia (operación Barkhane), EEUU, Takouba Task Force (Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Malí, Holanda, Níger, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido), Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM o GSIM), Islamic State West Africa Province (ISWAP) –también conocido como Islamic State in the Greater Sahara (ISGS)–, Macina Liberation Front (FML), Ansaroul Islam, otros grupos yihadistas y milicias comunitarias
Intensidad:	3
Evolución:	↑

26. Vicent Foucher, "The Islamic State Franchises in Africa: Lessons from Lake Chad", *International Crisis Group, Commentary / Africa*, 29 de octubre de 2020.

27. Timileyin Omilana, "ISWAP kill own leaders as Borno fasts, prays", *Guardian* (Nigeria), 24 de febrero de 2020.

Síntesis:

La región occidental del Sahel (norte de Malí, norte de Burkina Faso y noroeste de Níger) se ve afectada por una situación de inestabilidad creciente que tiene un origen multicausal. Se combina la existencia de redes de criminalidad transfronteriza en el Sahel y la marginación y subdesarrollo de las comunidades nómadas tuareg en la región, entre otros factores. Esta marginación se manifestó en las rebeliones tuareg que tuvieron lugar en los años sesenta, en los años noventa y, más recientemente, entre 2007 y 2009, cuando se configuraron sendas rebeliones contra los respectivos Gobiernos de Níger y Malí que pretendían alcanzar un mayor grado de autonomía en ambos países y revertir la pobreza y el subdesarrollo de la región. En el caso de Malí se produjo un resurgimiento de estas demandas en 2012, espoleadas por la caída del régimen de Gaddafi en Libia en 2011²⁸. A todo esto se une la expansión de las actividades de los grupos armados de Malí a la región fronteriza con Níger y Burkina Faso conocida como Liptako-Gourma, relacionada con la situación de inestabilidad derivada de la presencia y expansión de la insurgencia yihadista de origen argelino AQMI, su fragmentación y configuración en otros grupos armados de corte similar, algunos alineados a al-Qaeda y otros a ISIS, que en la actualidad operan y se han expandido por la región. Esta expansión ha contribuido a una mayor desestabilización de la zona y a la configuración de diferentes iniciativas militares transfronterizas regionales e internacionales para intentar controlar esta situación, que también han contribuido a internacionalizarla. A todo este panorama se suman las vinculaciones del conflicto que afecta a la región del Lago Chad como consecuencia de la expansión de las actividades del grupo Boko Haram a raíz de la intervención militar transfronteriza.

La situación de seguridad en el Sahel Occidental padeció un nuevo deterioro debido al incremento de las acciones armadas de diferentes grupos con agendas yihadistas, a las milicias comunitarias y a las respuestas militares de las fuerzas de seguridad de los países de la región y los aliados externos.

Según el Centro de Estudios Estratégicos de África (ACSS), 2020 ha sido el año más mortífero de los grupos yihadistas en el Sahel, que habrían provocado unas 4.250 muertes, lo que significa un aumento del 60% en relación a 2019. Detrás de este incremento se encuentra principalmente el Islamic State West Africa Province (ISWAP) –también conocido como Islamic State in the Greater Sahara (ISGS)–, y en menor medida, la coalición del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes –Jama'atNusrat al Islam walMuslimin– (JNIM o GSIM).²⁹ **Si bien la violencia continuó afectando a todas las zonas fronterizas de la región de Liptako-Gourma –este de Malí, norte de Burkina Faso y suroeste de Níger–, sus impactos fueron diferentes en cada país.** Según datos facilitados por ACLED, entre enero y mediados de diciembre, en Burkina Faso se registraron 620 episodios de violencia que

dejaron un balance total de 2.263 víctimas mortales; en Malí se produjeron alrededor de 900 eventos violentos concentrados en la región de acción de los grupos yihadistas (Gao, Mopti, Segou, Sakasoo y sureste de Tombuctú) que han costado la vida a 2.669 personas; mientras que en Níger, en la zona suroeste del país, en las regiones de Tillaberi –principal zona afectada por la violencia– Dosso y Tahoua, se habrían registrado 176 eventos violentos, ocasionando al menos 685 muertes.

A su vez, la violencia siguió agravando la crisis humanitaria y el **desplazamiento forzoso de personas**. ACNUR, en su informe sobre desplazamiento forzado que recoge los datos hasta mediados de año, resaltó la región del Sahel Occidental como la zona más afectada a nivel global.³⁰ A mediados de 2020 alrededor de dos millones de personas se encontraban desplazadas de manera forzada en toda la región, lo que significa un aumento del 43% desde finales de 2019. De estas, 574.600 eran personas desplazadas internamente solo en el primer semestre del año. Casi dos tercios de los nuevos desplazados internos se registraron en **Burkina Faso** (361.400), convirtiendo al país en la **crisis de desplazamiento de más rápido crecimiento del mundo, con más de un millón de personas desplazadas dentro del país**. De acuerdo con la agencia de Naciones Unidas, el número de personas que se enfrentaba a niveles de hambre aguda, solo en Burkina Faso, se triplicó en el último año, alcanzando los 7,4 millones. La dimensión de la crisis durante el año provocó que los países afectados buscaran fórmulas para fortalecer las capacidades regionales de respuesta. Entre ellas, los Gobiernos de Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger en octubre de 2020 pusieron en marcha el denominado Proceso de Bamako, una plataforma intergubernamental para impulsar acciones rápidas, fortalecer la coordinación entre los actores humanitarios y de seguridad y garantizar el acceso, la protección y la asistencia humanitaria a las poblaciones afectadas. A su vez, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, solicitó a la comunidad internacional una acción urgente y sostenida para satisfacer las crecientes necesidades humanitarias en la región, señalando la necesidad de más fondos y cooperación internacional, y reclamando un enfoque más estratégico y la necesidad de un “Plan Marshall”, instando a la UE a liderarlo.

En lo que respecta a los episodios de violencia más significativos registrados durante el año, cabe destacar el inicio de enfrentamientos armados en la región del Sahel, entre las coaliciones yihadistas representadas por el JNIM y el ISGS. Estos enfrentamientos se habrían registrado principalmente en Malí y en Burkina Faso. En **Níger**, a principios de enero, supuestos militantes del ISGS atacaron una base militar en Chinégodar, región

28. Véase el resumen sobre Malí en este capítulo.

29. Africa Center for Strategic Studies, *Islamic State in the Greater Sahara Expanding Its Threat and Reach in the Sahel*, 18 de diciembre de 2020.

30. UNHCR, *Mid-year trends 2020*, 30 de noviembre de 2020.

de Tillabéri, matando al menos a 89 soldados, siendo el ataque más mortífero contra las fuerzas de seguridad en la historia del país, y produciéndose tan solo cuatro semanas después del ataque que costó la vida a otros 71 soldados nigerinos en la misma región. Por otro lado, durante el año también destacó la realización del primer ataque yihadista en suelo **marfileño** desde marzo de 2016. El ataque, atribuido a JNIM, se produjo el 10 de junio contra un puesto fronterizo en Kafolo, Costa de Marfil, en la frontera con Burkina Faso, matando a 14 personas. Como respuesta, el Gobierno de Costa de Marfil anunció el 13 de julio la creación de una zona militar especial en el norte del país.

Por otro lado, en lo referente a las **medidas de seguridad** generadas en la región, el año inició con la reunión el 13 de enero entre los Gobiernos de la Fuerza Conjunta Sahel G5 (Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger) y el presidente francés, Emmanuel Macron, en Francia. En ella se decidió concentrar todas las fuerzas en la región de las tres fronteras bajo una estructura de mando único para las tropas regionales y francesas, priorizando el combate frente al ISGS. El Gobierno de Francia se comprometió a aumentar su presencia militar en el Sahel de 4.500 soldados a 5.100 dentro de la operación Barkhane. A su vez, en febrero, la Unión Africana (UA) anunció el despliegue temporal de 3.000 efectivos adicionales para mejorar la seguridad en el Sahel, mientras que el Consejo de Seguridad de la ONU amplió en junio el mandato de la MINUSMA por otros 12 meses, manteniendo el número de tropas desplegadas, que ascienden a 13.289 soldados y 1.920 policías. Asimismo, la UE también amplió su protagonismo en la zona y se incorporó a las acciones antiterroristas en la región de Liptako-Gourma una nueva misión militar denominada Takouba Task Force –“sable” en lengua tuareg– compuesta por fuerzas especiales de Malí y Níger y 11 países europeos (Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Holanda, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido). Por otro lado, la Misión de Formación y Asistencia Militar de la UE en Malí (EUTM Malí) informó que extenderá su trabajo a los países vecinos; mientras que la denominada Alianza para el Sahel, liderada por España, seguirá trabajando en la mejora de aspectos sociales y económicos en la zona.

De forma paralela, se publicaron **diferentes informes que señalan a las fuerzas de seguridad de los tres países por cometer violaciones a los derechos humanos en el marco de la guerra antiterrorista**. En enero el Parlamento de Burkina Faso aprobó una controvertida legislación, la “Ley de Voluntarios para la Defensa de la Patria”, que permite al Ejército utilizar voluntarios civiles en la lucha contra los grupos armados. La

Durante el año las fuerzas de seguridad de Burkina Faso, Malí y Níger fueron acusadas en varias ocasiones por diversos organismos de cometer violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra

medida fue cuestionada por un gran número de organizaciones de la sociedad civil burkinesa, así como por organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW), debido a las diferentes denuncias que pesan sobre el Ejército burkinés en materia de abusos y violación a los derechos humanos en el marco de la guerra frente a los grupos yihadistas. Tras la aprobación de la ley se registraron diferentes episodios de violencia perpetrados por los “vigilantes” –conocidos localmente como “koglweegos”, “guardianes de la selva” en el idioma moore– que fueron denunciados por organizaciones de defensa de derechos humanos por supuestos asesinatos y ajusticiamientos. También las fuerzas de seguridad burkinesas fueron denunciadas por HRW por una supuesta ejecución de 31 detenidos en la ciudad norteña de Djibo el 20 de abril. También fueron acusados en junio de ejecutar extrajudicialmente a 180 personas aparecidas en una fosa común en el norte de Burkina Faso.³¹ **El Observatorio para la Democracia y los Derechos Humanos (ODDH) de Burkina Faso señaló en junio que las Fuerzas Armadas eran**

responsables de la muerte de 588 civiles. Por otro lado, la MINUSMA afirmó que tenía pruebas de que las fuerzas de seguridad de Malí y Níger habrían llevado a cabo 135 ejecuciones extrajudiciales en Mopti, centro de Malí, entre el 1 de enero y el 31 de marzo. A su vez, el organismo independiente nigerino, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), acusó el 4 de septiembre a elementos del Ejército de Níger “no controlados” de la desaparición forzada de más de 100 personas en las áreas de Inates y Ayorou de la región de Tillabéri entre marzo y abril. En junio Amnistía Internacional publicó un informe acusando a los ejércitos de Malí, Níger y Burkina Faso de cometer crímenes de guerra en sus operaciones, en particular contra civiles. En el informe consta que las violaciones incluyeron por lo menos 57 casos de ejecuciones extrajudiciales y 142 casos de desapariciones forzadas.³²

Cuerno de África

Etiopía (Tigray)	
Inicio:	2020
Tipología:	Gobierno, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Etiopía, Gobierno de Eritrea, Gobierno regional del estado de Tigray, cuerpos de seguridad y milicias del Tigray People's Liberation Front (TPLF)
Intensidad:	3
Evolución:	↑

31. Human Rights Watch, *Burkina Faso: Security Forces Allegedly Execute 31 Detainees*, 20 de abril de 2020; Human Rights Watch, *Burkina Faso: Residents' Accounts Point to Mass Executions*, 8 de junio de 2020.

32. Amnesty International, *They Executed Some and Brought the Rest with Them: Civilian Lives at risk in the Sahel*, 10 de junio de 2020.

Síntesis:

El nombramiento de Abiy Ahmed como nuevo primer ministro de Etiopía a principios de 2018 propició importantes y positivos cambios a nivel interno y a nivel regional en Etiopía. Sin embargo, las acciones de Abiy para reformar el Estado etíope desembocaron en su debilitamiento. Dieron un nuevo impulso a los movimientos nacionalistas de base étnica resurgidos durante las movilizaciones masivas iniciadas en 2015 por parte de la comunidad oromo que finalmente llevaron al poder a Abiy Ahmed, así como fuertes resistencias de actores clave como el partido Tigray People's Liberation Front (TPLF), otrora principal partido de la coalición que ha gobernado en Etiopía desde 1991, la Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (EPRDF) que estableció el sistema de federalismo étnico tras su llegada al poder. El liderazgo de la comunidad tigray percibió una pérdida de poder y privilegios en los cambios promulgados por Abiy Ahmed. El TPLF se resiste a la pérdida de poder derivada de su no participación en el nuevo partido forjado de las cenizas de la coalición EPRDF, el Partido de la Prosperidad (PP), lo que implicaría diluirse en un nuevo partido. Estas tensiones se intensificaron bajo las reformas liberalizadoras de Abiy Ahmed. A medida que el EPRDF redujo su estricto control, surgieron nuevas oportunidades, agravios y discursos de la mano de líderes regionales y actores de la sociedad civil. Esta situación desencadenó una escalada de la violencia política por todo el país y un incremento de la tensión entre el Gobierno federal y el TPLF que culminó con el estallido de un conflicto armado entre los cuerpos de seguridad etíopes y los cuerpos de seguridad de la región de Tigray.

La región etíope de Tigray se vio afectada por una escalada de la tensión con el Gobierno federal que derivó en una confrontación bélica de graves consecuencias. El 4 de noviembre el primer ministro etíope ordenó el inicio de una operación militar contra las autoridades de la región septentrional de Tigray, fronteriza con Eritrea, gobernadas por el Tigray People's Liberation Front (TPLF) en respuesta a un ataque cometido por las fuerzas de la región de Tigray contra dos bases militares de las Fuerzas Armadas federales etíopes (Fuerzas de Defensa Etíope, EDF por sus siglas en inglés) y a raíz de esta situación el Gobierno federal decretó el estado de emergencia por seis meses en la región. Tras la ofensiva se desencadenaron duros enfrentamientos y una escalada del conflicto, provocando el desplazamiento de miles de civiles que huían de los enfrentamientos y la violencia desatada. La ONU alertó que se estaba desarrollando una crisis humanitaria a gran escala. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, señaló el 24 de noviembre que la población refugiada en Sudán procedente de Tigray ascendía a 40.000 personas desde el 7 de noviembre.³³ Investigaciones revelaron la comisión de ejecuciones en

Un informe de la ONU señaló que el Ejército etíope estaba encontrando una fuerte resistencia en Tigray y enfrentaba a una prolongada “guerra de desgaste” en la región que podría tener consecuencias regionales

masa de población civil en Mai-Kadra (suroeste de la región de Tigray) que podrían ser responsabilidad del TPLF, según testimonios recogidos por Amnistía Internacional.³⁴ La Alta Comisionada alertó que los hechos podrían ser considerados crímenes de guerra si eran confirmados y también de informaciones relativas a arrestos y detenciones arbitrarias, ejecuciones y discriminación y estigmatización de miembros de la comunidad tigray. El primer ministro Abiy Ahmed responsabilizó de las masacres a las fuerzas leales a las autoridades de Tigray. Numerosas voces regionales e internacionales realizaron un llamamiento para frenar la espiral de violencia y promover un diálogo que a finales de año había sido rechazado por el primer ministro etíope. A su vez, Abiy Ahmed el 22 de noviembre lanzó un ultimátum a las autoridades de Tigray y el TPLF para deponer las armas incondicionalmente antes de llevar a cabo la ofensiva sobre la capital, Mekelle, lo que podía suponer una escalada de la violencia con graves consecuencias para la población civil. Sin embargo, el presidente de Tigray, Debretsion Gebremichael, rechazó la rendición. Tras el ultimátum, las EDF llevaron a cabo la ofensiva sobre Mekelle, que provocó numerosas víctimas mortales y cientos de heridos, aunque las consecuencias en términos humanitarios fueron menores debido a la retirada de las tropas del TPLF de la ciudad para evitar la confrontación en el núcleo urbano. La organización ACLED estimó en más de 1.400 las víctimas mortales como consecuencia del conflicto. En medio de la ofensiva etíope, el TPLF bombardeó el aeropuerto de Asmara, la capital de la vecina Eritrea, el 15 de noviembre. El TPLF acusó a Eritrea de colaborar con las EDF, cediendo su aeropuerto para llevar a cabo ofensivas aéreas sobre Tigray. A su vez, el TPLF llevó a cabo bombardeos simultáneos el 13 de noviembre en Bahir Dar y Gondar, en la vecina región de Amhara (región con la que Tigray mantiene disputas abiertas). Posteriormente, organizaciones humanitarias, la ONU y la UE evidenciaron la presencia de tropas eritreas en Mekelle y participando activamente en las hostilidades en apoyo del Gobierno federal. Aunque el Gobierno federal declaró la victoria en noviembre, los enfrentamientos continuaron entre las fuerzas federales y las de Tigray.

Numerosas voces remarcaron el poderío y la experiencia militar de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Tigray, contrastada en la guerra contra Eritrea y en la guerra para derrocar al régimen del Derg en 1991, y fuertemente pertrechadas durante los años en los que el TPLF ha ostentado el poder en la coalición de gobierno en Etiopía. Además, un informe confidencial de la ONU señaló que las EDF estaban encontrando con una fuerte resistencia en Tigray y enfrentaban a una prolongada “guerra de desgaste” en la región que podría tener consecuencias regionales.³⁵

33. OHCHR, *Ethiopia: Threat of major hostilities in Mekelle seriously imperils civilian lives – Bachelet*, OHCHR, 24 de noviembre de 2020.

34. Amnesty International, *Ethiopia: Investigation reveals evidence that scores of civilians were killed in massacre in Tigray state*, 12 de noviembre de 2020.

35. Burke, Jason, “Secret UN report reveals fears of long and bitter war in Ethiopia”, *The Guardian*, 21 de noviembre de 2020.

El punto de inflexión decisivo en el deterioro de las relaciones entre ambas entidades que dio origen al estallido de la violencia se produjo en junio tras el anuncio del Gobierno federal de aplazar las elecciones regionales y federales que debían celebrarse en agosto debido a la pandemia. A partir de ese momento, se registró una cascada de hechos y la construcción de un relato para justificar la evolución de los acontecimientos y el choque de legitimidades. En junio el Parlamento federal extendió el mandato del Gobierno federal y el mandato de los gobiernos regionales que expiraban en octubre, mientras que el Parlamento regional de Tigray anunció la celebración de elecciones en septiembre, consideradas inconstitucionales por las autoridades federales. Tigray celebró las elecciones el 9 de septiembre, en claro desafío al Gobierno federal, acompañadas de las amenazas del TPLF, afirmando que cualquier intento del Gobierno federal de boicotear las elecciones sería considerado una “declaración de guerra”. El gobierno de Tigray también señaló que la perpetuación del Gobierno federal en el poder más allá del 5 de octubre (fecha en la que debía expirar el mandato gubernamental pero que fue pospuesta en junio) era inconstitucional y a partir de esa fecha Tigray podría no aceptar ninguna de las leyes federales. A partir de ese momento se inició el relato que defendía la supuesta legalidad de la actuación propia y la ilegalidad del adversario. El 5 de octubre el TPLF retiró a sus parlamentarios del Gobierno federal, considerando su mandato expirado. El 6 y 7 de octubre el Parlamento federal planteó al Gobierno la ruptura de relaciones con las autoridades de Tigray y aprobó la interrupción de los fondos federales destinados al Ejecutivo de Tigray. A pesar del llamamiento el 9 de octubre a ambas partes de la ministra etíope de Paz, Muferiat Kamil,³⁶ a comprometerse a iniciar un diálogo y desescalar las tensiones realizado, el TPLF el 24 de octubre afirmó que el Gobierno federal estaba expulsando a Tigray de la federación y que el desvío de fondos federales que debía entrar en vigor el 4 de noviembre sería considerado como un equivalente a una declaración de guerra.

Somalia	
Inicio:	1988
Tipología:	Gobierno, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna al Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, AMISOM, EUNAVFOR Somalia, Operation Ocean Shield, al-Shabaab, ISIS
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

El conflicto armado y la ausencia de autoridad central efectiva en el país tienen sus orígenes en 1988, cuando una coalición de grupos opositores se rebeló contra el poder dictatorial de Siad Barre y tres años después consiguieron derrocarlo. Esta situación dio paso a una nueva lucha dentro de esta coalición para ocupar el vacío de poder, que ha provocado la destrucción del país y la muerte de más de 300.000 personas desde 1991, a pesar de la fracasada intervención internacional de principios de los noventa. Los diversos procesos de paz para intentar instaurar una autoridad central han tropezado con numerosas dificultades, entre las que destacan los agravios entre los diferentes clanes y subclanes que configuran la estructura social somalí, la injerencia de Etiopía, Eritrea y EEUU y el poder de los diversos señores de la guerra. La última iniciativa de paz conformó en 2004 el Gobierno Federal de Transición (GFT), que se apoyó en Etiopía para intentar recuperar el control del país, parcialmente en manos de la Unión de los Tribunales Islámicos (UTI). La facción moderada de la UTI se unió al GFT, así como Ahlu Sunna Wal Jama'a, y juntos se enfrentan a las milicias de la facción radical de la UTI, agrupadas en el grupo armado islamista al-Shabaab que controla parte de la zona sur del país. En el año 2012 culminó la fase de transición iniciada en 2004 y se formó un nuevo Parlamento que eligió a su primer presidente desde 1967. La misión de la UA, AMISOM (en la que se integraron las tropas etíopes y keniatas presentes en el país), las tropas gubernamentales y EEUU (principalmente a través de operaciones aéreas) se enfrentan a al-Shabaab, grupo que ha sufrido divisiones internas.

Durante el año persistieron las acciones del grupo armado al-Shabaab así como las operaciones de AMISOM y de EEUU contra el grupo armado, causando centenares de víctimas mortales. Por otra parte, a pesar del acuerdo electoral alcanzado en septiembre, las tensiones entre el Gobierno Federal y los estados federados de cara a la celebración de las elecciones parlamentarias y presidenciales entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 fueron en aumento, en paralelo al retraso en los preparativos para su celebración y su posible aplazamiento. Al-Shabaab siguió siendo la principal amenaza para la seguridad y la estabilidad en un país al que se le sumó una triple crisis: la pandemia de la COVID-19, las langostas del desierto y las inundaciones. A partir de 2017 se ha observado un aumento de la actividad de al-Shabaab que se mantuvo durante 2020, según destacó la ONU. El grupo siguió ejerciendo un control efectivo sobre grandes partes de las zonas rurales del centro y sur de Somalia, pero en ninguno de los principales centros urbanos. Al-Shabaab siguió cometiendo ataques suicidas, con artefactos explosivos improvisados y con mortero, principalmente contra la AMISOM y el Ejército Nacional Somalí, instalaciones militares o edificios gubernamentales fuertemente protegidos, pero también instalaciones civiles como hoteles, restaurantes y cafés, lo que provocó muchas bajas civiles. Durante el año, se produjeron un promedio de 270 incidentes por mes, según la ONU, la mayoría

36. News: Minister of Peace Muferiat Kamil cautions federal, Tigray region governments to deescalate tension, engage in peaceful dialogue, EthioExplorer, 10 de octubre de 2020.

atentados perpetrados por al-Shabaab. ACLED señaló que se produjeron 3.117 víctimas mortales en el año 2020. Según la Oficina de la ONU en el país (UNSOM), entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020 se produjeron más de 600 víctimas mortales civiles y otras 700 personas resultaron heridas, de las cuales aproximadamente entre un tercio y la mitad fueron responsabilidad de al-Shabaab, y el resto fueron responsabilidad de las milicias de los clanes y de las fuerzas de seguridad del Estado. También continuaron las operaciones a gran escala de la AMISOM y el Ejército Nacional Somalí contra al-Shabaab. A partir de finales de 2017 se registró un aumento de los ataques aéreos de las fuerzas internacionales, principalmente de EEUU, en respuesta al incremento de la actividad de al-Shabaab. En paralelo, a pesar de las operaciones militares internacionales contra ISIS, la rivalidad entre al-Shabaab e ISIS y las pérdidas sufridas, el grupo afiliado de Estado Islámico en Somalia incrementó el número de atentados con bomba y asesinatos de personalidades prominentes. Estos se produjeron principalmente en Mogadiscio, Puntlandia y el sur de Somalia, donde ISIS mantiene una red de efectivos, simpatizantes y bases de entrenamiento. A pesar de los avances militares en la Operación Badbaabo (Supervivencia), al-Shabaab no ha dejado de atacar a las fuerzas del Ejército Nacional Somalí y de la AMISOM en las zonas recuperadas por estos. El número total de ataques aéreos en 2020 hasta noviembre ascendía a 55. Por otra parte, durante el año no se produjeron incidentes de piratería frente a las costas de Somalia, reducción vinculada a las operaciones marítimas de la comunidad internacional, pero sobre todo a la reducción de la demanda mundial de mercancías como consecuencia de la pandemia, lo que redujo el volumen de cargamentos transportados a través del océano Índico Occidental.

En lo referente a la AMISOM, en 2018 se elaboró un plan para orientar el proceso de transición de la misión, que entrañaba un traspaso gradual de sus funciones a los cuerpos de seguridad somalíes, con el objetivo de que estos asumieran la plena responsabilidad de la seguridad de Somalia para 2021 en paralelo al anuncio de la retirada de la misión africana a finales de 2021. Sin embargo, expertos y analistas han afirmado que el Gobierno de Somalia tendría graves dificultades para desempeñar su cometido sin el apoyo de AMISOM, y el Gobierno hizo un llamamiento a EEUU a que se replantea la decisión anunciada por el presidente Donald Trump de iniciar la retirada de sus entre 650

Diversos analistas destacaron que la estrategia antiterrorista estadounidense y de la comunidad internacional, con el beneplácito del Gobierno somalí, centrada en la securitización de las respuestas ante las amenazas a la paz y la seguridad, se ha revelado como un fracaso y no ha reducido el impacto de las actividades de al-Shabaab

y 800 efectivos del país.³⁷ No obstante, el relevo de Trump al frente de la Casa Blanca en 2021 podría hacer cambiar esta decisión. Numerosas voces señalaron que esta decisión, junto a la retirada de tropas por parte de Kenia y de Etiopía, podría provocar un vacío de seguridad aprovechado por al-Shabaab. Ante la grave situación interna, Etiopía llevó a cabo la retirada de 3.000 de sus soldados estacionados en Somalia, aunque estos no formaban parte de los 5.000 que se encuentran bajo mandato de la AMISOM.³⁸ Kenia anunció que haría depender la futura retirada de sus tropas a la mejora de la estabilidad de Somalia. En este sentido, cargos de las Fuerzas Armadas de Kenia que han participado en AMISOM señalaron que era necesario un cambio de estrategia en la guerra en Somalia, ya que las acciones militares se estaban demostrando como inefectivas ante un grupo que basa su fuerza en la fe en el Islam. Un informe del Grupo de Expertos de la ONU en Somalia señaló que al-Shabaab, a pesar de las sanciones que pesan sobre el grupo, había generado alrededor de 13 millones de dólares entre diciembre de 2019 y agosto de 2020 vía extorsión y tributación en zonas bajo su control e inversiones realizadas por el grupo.³⁹ Diversos analistas han destacado que la estrategia antiterrorista estadounidense y de la comunidad internacional en su conjunto, con el beneplácito del Gobierno somalí, centrada en la securitización de las respuestas ante las amenazas a la paz y la seguridad internacional, se ha revelado como un fracaso porque no ha reducido el impacto de las actividades de al-Shabaab y ha causado numerosas víctimas civiles. En este sentido, han surgido diversas voces reclamando una aproximación a al-Shabaab para promover un proceso de negociación similar al que se ha celebrado en Afganistán con los talibanes.

Finalmente, en lo referente al impacto de la crisis en las poblaciones civiles, el número de personas desplazadas internas aumentó de 1,1 millones de personas en agosto de 2016 a 2,6 millones de personas para diciembre de 2019, de las cuales casi dos tercios eran menores, amenazados por el reclutamiento forzoso por parte de al-Shabaab y por la violencia sexual de todos los actores implicados en el conflicto. Los principales factores de desplazamiento interno fueron el conflicto y la inseguridad, así como las sequías y las inundaciones. Muchos desplazados internos se trasladaron de las zonas rurales a las urbanas. Mogadiscio y Baidoa, la capital del Estado Sudoccidental, donde grandes extensiones de territorio

37. La mayoría de estos cuerpos especiales, dedicados a la formación del Ejército de Somalia así como a operaciones clandestinas contrainsurgentes, se establecieron en Somalia durante el mandato de Trump. Este anuncio podría estar condicionado por la celebración de elecciones en el país en noviembre, según analistas. Véase Wadhams, Nick, y Jacobs, Jennifer, "Trump Demands a Plan to Withdraw U.S. Troops From Somalia", *Bloomberg*, 13 de octubre de 2020.

38. Simon Marks, "Ethiopia Withdraws Thousands of Troops From Neighboring Somalia", *Bloomberg*, 13 de noviembre de 2020.

39. Carta dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de la resolución 751 (1992) relativa a Somalia, S/2020/949, 28 de octubre de 2020.

están en poder de al-Shabaab, acogieron el mayor número de personas desplazadas internas en el país. Por otra parte, activistas y periodistas siguieron viendo amenazada su labor. En este sentido, a finales de 2019, la activista por los derechos de la mujer y trabajadora humanitaria, Almaas Elman, fue asesinada a tiros en Mogadiscio, unas horas después de haber publicado en los medios sociales el discurso pronunciado por su hermana en Naciones Unidas acerca de la importancia de la reconciliación.

Grandes Lagos y África Central

Burundi	
Inicio:	2015
Tipología:	Gobierno Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Juventudes Imbonerakure, partido político CNDD-FDD, partido político CNL, grupos armados RED-TABARA, FPB (anteriormente FOREBU), FNL
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

El proceso de transición política e institucional iniciado con la firma del Acuerdo de Paz de Arusha en el 2000 culminó formalmente en el año 2005. La aprobación de una nueva Constitución que formalizó el reparto de poder político y militar entre las dos principales comunidades, hutus y tutsis, y la celebración del proceso electoral que condujo a la formación de un nuevo Gobierno, intentaron sentar las bases de futuro para superar el conflicto iniciado en 1993 y supusieron la principal oportunidad para poner fin a la violencia de carácter etnopolítico que había afectado al país desde su independencia en 1962. Sin embargo, la evolución autoritaria del Gobierno tras las elecciones de 2010, tachadas de fraudulentas por la oposición, ha ensombrecido el proceso de reconciliación y provocado la movilización de la oposición política. El deterioro institucional y la reducción del espacio político para la oposición, la controvertida candidatura de Nkurunziza a un tercer mandato y su victoria en unas elecciones presidenciales fraudulentas, la escalada de la violencia política, el intento frustrado de golpe de Estado en mayo de 2015, las violaciones de los derechos humanos y el surgimiento de nuevos grupos armados, son diferentes elementos que revelan el deterioro de la situación en el país.

Durante el año persistieron la violencia y la inseguridad, los ataques esporádicos por parte de actores armados y las acciones de contrainsurgencia gubernamentales, así como actos de represión contra la oposición política por parte de los cuerpos de seguridad y los Imbonerakure, el ala juvenil del partido en el poder, el Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD). También se celebraron elecciones bajo acusaciones de fraude y represión contra la oposición, y el 8 de junio murió el presidente Pierre Nkurunziza, generando un breve vacío de poder.

En lo concerniente al conflicto armado que padece el país, durante el año persistió el clima de violencia e inseguridad como consecuencia de las acciones de los cuerpos de seguridad y, en especial, de los Imbonerakure, que actuaron con total impunidad, cometiendo ejecuciones extrajudiciales, ataques contra la población civil, arrestos arbitrarios, abusos y acciones de violencia indiscriminada contra la oposición política que causaron 317 víctimas mortales durante el año, según ACLED. El principal objetivo fueron los partidarios del partido Congrès National pour la Liberté (CNL, antiguo grupo armado y posteriormente partido FNL y actualmente principal partido de la oposición), acciones que fueron en aumento conforme se aproximó la cita electoral. En este sentido, el 17 de septiembre se hizo público un informe de la Comisión de Investigación de la ONU en el que condenó la existencia de ejecuciones sumarias, arrestos y detenciones arbitrarias, violencia sexual, torturas y malos tratos y numerosos casos de violaciones de las libertades civiles durante los últimos meses, tanto antes como después de las elecciones, lo que fue rechazado por Ndayishimiye, reiterando su exigencia de finalización de las investigaciones de la situación de derechos humanos del país. El informe destacó la reducción del espacio político en el país, la persistencia de la impunidad y que la tendencia no era halagüeña. Además, remarcó que Ndayishimiye había promovido a altos cargos militares involucrados en graves abusos de derechos humanos en puestos de responsabilidad civiles en la administración local. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU extendió el mandato de la Comisión de Investigación sobre Burundi por un año en octubre.

Tras la renovación de las sanciones por parte de la UE sobre Burundi en septiembre, el ministro de Exteriores Albert Shingiro, el 9 de octubre, convocó a todos los diplomáticos extranjeros y exigió a sus respectivos países suspender las sanciones. El 17 de noviembre el Gobierno ordenó el cierre de la oficina del enviado especial de la ONU en el país, a pesar de que el secretario general de la ONU había recomendado el 3 de noviembre la extensión de su mandato hasta finales de 2021. El Gobierno argumentó que la presencia de la oficina mantenía un clima de psicosis y crisis artificial orquestado por actores extranjeros. Por otro lado, las Fuerzas Armadas burundesas llevaron a cabo operaciones militares en el país en persecución de grupos insurgentes, la oposición política del CNL y civiles tutsis, y realizaron incursiones en Uvira, en la provincia congoleesa de Kivu Sur, en persecución de miembros del grupo armado RED-Tabara, en diferentes momentos del año, causando decenas de víctimas mortales supuestamente miembros de la insurgencia. RED-Tabara en septiembre reivindicó los diferentes ataques cometidos en diversas provincias del país entre agosto y septiembre. El balance de víctimas mortales según el grupo se elevaría al menos a 15 partidarios del CNDD-FDD y a 28 miembros de los cuerpos de seguridad, acciones en las que al menos 40 otros

miembros de las Imbonerakure y cuerpos de seguridad habrían resultado heridos, y tres miembros de la insurgencia habrían resultado muertos y otro capturado en el transcurso de las operaciones.⁴⁰ Además, se produjeron diversos ataques no reivindicados que acrecentaron los rumores de la posible emergencia de nuevos grupos armados en el país, según señaló a principios de septiembre uno de los pocos medios de comunicación independientes del país, IWACU. Otros analistas afirmaron que estas acciones responden a la voluntad de la insurgencia de hacerse visible ante el nuevo presidente para forzar algún tipo de respuesta. Si bien se destacó que no tendría capacidad para representar una amenaza real para el nuevo Gobierno, sí que pondría de manifiesto una mayor capacidad de cometer acciones bélicas que en los últimos años. Fuentes del Ejército ratificaron la existencia de estos pequeños grupos armados en diversas provincias y la continuación de las operaciones militares para neutralizarlos. Radio Publique Africaine el 3 de septiembre señaló que los cuerpos de seguridad habrían incorporado a miembros de las Imbonerakure para combatir a la insurgencia y perseguir la oposición política. En diciembre, en un informe conjunto sobre violaciones de derechos humanos, 15 organizaciones de la sociedad civil registraron 821 detenciones arbitrarias, 368 ejecuciones extrajudiciales, 182 casos de tortura y 59 desapariciones forzadas en 2020. El informe identificó a miembros de la CNL y miembros de la comunidad tutsi como las principales víctimas, y a las fuerzas de seguridad y al ala juvenil Imbonerakure del partido gobernante CNDD-FDD como los principales perpetradores. A pesar de esto, el Gobierno consiguió el éxito diplomático de salir de la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU en diciembre.

El vicepresidente Gaston Simdimwo el 7 de abril confirmó la celebración de las elecciones el 20 de mayo a pesar de la pandemia de la COVID-19, y el 15 de abril canceló la participación de la diáspora en las elecciones, argumentando que la comisión electoral no disponía de suficiente capacidad para organizar las votaciones en el extranjero como consecuencia de la crisis. El 20 de mayo se celebraron elecciones presidenciales y legislativas en Burundi, después de un período de campaña marcado por las denuncias de violencia y acoso hechas por la oposición y actores de la sociedad civil así como por la detención de candidatos y centenares de partidarios del CNL. La oposición también denunció que sus representantes quedaron excluidos de varias mesas de votación. El 25 de mayo, la Comisión Electoral Nacional Independiente anunció que el general retirado, Evariste Ndayishimiye, candidato del partido gobernante, el CNDD-FDD, había ganado las elecciones presidenciales con el 68 % de los votos. En las elecciones legislativas, el CNDD-FDD ganó

Se celebraron elecciones en Burundi bajo acusaciones de fraude y represión contra la oposición y el 8 de junio murió el presidente Pierre Nkurunziza, generando un breve vacío de poder

72 de los 100 escaños de la Asamblea Nacional. El candidato presidencial y líder del CNL, Agathon Rwasa, rechazó los resultados provisionales alegando fraude e irregularidades generalizadas, e interpuso un recurso ante el tribunal constitucional el 28 de mayo. El recurso fue desestimado el 4 de junio. El CNL anunció el 28 de mayo que las autoridades habían arrestado a 600 de sus partidarios durante la campaña y en la jornada electoral, limitando su presencia como apoderados y observadores durante la jornada. Las autoridades aplicaron una cuarentena de 14 días vinculada a la pandemia de la COVID-19 a los observadores electorales de la organización regional EAC, obstaculizando así sus funciones.

Por otro lado, el 8 de junio murió Pierre Nkurunziza, supuestamente por un ataque al corazón, aunque diversos analistas señalan la posibilidad de que hubiera muerto como consecuencia de haber contraído la COVID-19. La muerte del histórico dirigente del CNDD-FDD y presidente de Burundi desde 2005, generó un vacío de poder que el Tribunal Constitucional resolvió acelerando la toma de posesión del presidente electo Ndayishimiye, que juró su cargo el 18 de junio. En su discurso inaugural, destacó aspectos tales como la necesidad de entablar un diálogo con la oposición en el país, de poner fin a los abusos cometidos por el Gobierno precedente, y garantizar el regreso de la población refugiada y de otros burundeses en el exilio. Sin embargo, sus acciones en este sentido fueron continuistas con las del anterior Gobierno. El 30 de junio prestó juramento un nuevo gabinete encabezado por Alain Guillaume Bunyoni como primer ministro, compuesto por 15 ministros y dominado por representantes del ala dura del régimen. Cabe destacar que pesan sanciones internacionales contra Bunyoni y el ministro de Interior, Gervais Ndirakobuca, por su implicación en actos de represión y violencia contra civiles desde 2015. Una coalición opositora en el exilio condenó la falta de representación de la minoría tutsi en el nuevo Gobierno y entre los gobernadores regionales -un ministro y tres gobernadores.

RCA	
Inicio:	2006
Tipología:	Gobierno, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados de la ex coalición rebelde Séléka (FPRC, RPRC, MPC, UPC, MLCJ), milicias anti balaka, milicia 3R, grupo armado ugandés LRA, otros grupos armados locales y extranjeros, Francia, MINUSCA
Intensidad:	2
Evolución:	↑

40. AFP, Burundi rebel group claims attacks in new offensive, AFP, 18 de septiembre de 2020.

Síntesis:

Desde su independencia en 1960, la situación en la RCA se ha caracterizado por una continua inestabilidad política, que ha desembocado en diversos golpes de Estado y dictaduras militares. Las claves de la situación son de índole interna y externa. Interna, porque existe una confrontación entre élites políticas de etnias del norte y el sur que compiten por el poder y minorías que se han visto excluidas de él. Los diferentes líderes han intentado establecer un sistema de clientelismo y patronazgo para asegurar su supervivencia política. Y externa, por el papel que han jugado sus vecinos Chad y Libia; por sus recursos naturales (diamantes, uranio, oro, maderas nobles) y la concesión de contratos mineros por los que compiten estos países, China y la antigua metrópolis, Francia, que controla el uranio. Los conflictos de la región han contribuido a acumular restos de armamento y combatientes que han convertido al país en santuario regional. A esta situación se ha sumado una dimensión religiosa debido a que la coalición Séléka, formada por diversos grupos del norte, de confesión musulmana, y marginados históricamente, en la que participan combatientes extranjeros, tomó el poder en marzo de 2013 tras derrocar al anterior líder, François Bozizé, quien durante los últimos 10 años había combatido a estas insurgencias del norte. La incapacidad del líder de Séléka, Michel Dlotodia, para controlar a esta coalición rebelde, que cometió graves violaciones de los derechos humanos, saqueos, ejecuciones extrajudiciales, provocó el surgimiento de milicias de confesión cristiana ("anti balaka"). Estas milicias y sectores del Ejército y partidarios del anterior presidente Bozizé se rebelaron contra el Gobierno y Séléka, creando un clima de caos e impunidad generalizado. Francia, la UA y la ONU intervinieron militarmente para reducir los enfrentamientos y facilitar un proceso de diálogo que condujera a una transición negociada, forzando un gobierno de transición que condujo a las elecciones de 2015-2016. Tras un breve periodo de reducción de la inestabilidad y de diferentes acuerdos de paz, los grupos armados siguieron controlando la mayor parte del país. Ni los reducidos cuerpos de seguridad centroafricanos (que apenas controlaban Bangui) ni la MINUSCA, fueron capaces de revertir la situación, por lo que se promovieron nuevos contactos de la mano de la UA y de la CEEAC, que contribuyeron a alcanzar el acuerdo de paz de febrero de 2019.

Durante el año se incrementaron las actividades de algunos grupos armados en el conjunto del país, que abandonaron la implementación del acuerdo de paz de 2019, causando centenares de víctimas mortales, muchas de las cuales población civil. Por otra parte, se produjo un aumento de la violencia arraíz de la celebración de las elecciones generales del 27 de diciembre. Según ACLED, el balance de víctimas mortales a finales de 2020 fue de 420, cifra inferior a 2019, que fue de 594, siguiendo la tendencia descendente de años anteriores (1.187 registradas en 2018 y 2.011 de 2017).

El clima político estuvo dominado por la preparación de las elecciones generales, cuya primera ronda estaba prevista para el 27 de diciembre, con elecciones legislativas y locales y una posible segunda ronda de elecciones presidenciales a principios de 2021, y se caracterizó por la tensión y la desconfianza en un contexto de retrasos con respecto al calendario electoral, según señaló el informe del secretario general de la ONU en octubre. En junio, el Tribunal Constitucional rechazó la enmienda de la Constitución propuesta por el Gobierno para prorrogar

los mandatos del presidente y el legislativo en ejercicio, en caso de un suceso de fuerza mayor que retrasara la celebración de las elecciones, señalando que cualquier demora con respecto a los plazos constitucionales debería derivarse de amplios consensos y consultas de carácter nacional. Desde entonces, algunos partidos políticos y la sociedad civil pidieron al Gobierno que convocara un diálogo nacional sobre el calendario electoral. En septiembre, el presidente, Faustin-Archange Touadéra, organizó una serie de reuniones sobre el proceso electoral con partidos de la oposición, ex jefes de Estado y otros partidos políticos, la sociedad civil y líderes religiosos, entre otros. La Coalition de l'Opposition Démocratique 2020 (creada en febrero y compuesta por 16 partidos políticos de la oposición) se negó a asistir a la reunión celebrada el 17 de septiembre y acusó al presidente Touadéra de imponer unas elecciones precipitadas y mal preparadas, por lo que exigieron su aplazamiento. El 23 de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó una ley que modificó el código electoral y extendió un mes el plazo de registro de votantes, debido a los retrasos existentes como consecuencia de la inseguridad y la obstrucción por parte de varios grupos armados, entre ellos el grupo 3R (Retour, Réclamation et Réhabilitation) y diversos grupos anti balaka. Si bien esta extensión del plazo no afectaba la fecha de las elecciones del 27 de diciembre, varios miembros del Consejo de Seguridad de la ONU expresaron su preocupación de que el proceso podría estar en peligro si había más demoras. Las enmiendas al código electoral de la Asamblea Nacional del 23 de septiembre no incluyeron una disposición que hubiera permitido que aproximadamente 250.000 personas refugiadas centroafricanas fuera del país votaran en las elecciones, a pesar de las recomendaciones de la comunidad internacional. El presidente Touadéra afirmó que permitir su participación presentaba obstáculos insuperables, sin dar detalles.

La comisión electoral registró a principios de noviembre 22 candidaturas a la presidencia, entre ellas tres mujeres, entre las que destacaban el presidente Touadéra, del Mouvement des Coeurs Unis; el ex-presidente François Bozizé, de Kwa Na Kwa; la ex presidenta Catherine Samba-Panza, como independiente; y el ex primer Ministro Anicet Georges Dologuélé. En relación a la candidatura de Bozizé, hubo controversia debido a su elegibilidad debido a que había dudas sobre si su retorno del exilio se había producido cumpliendo la ley electoral que establece un mínimo de un año de residencia en RCA. Finalmente, después de meses de incertidumbre sobre la candidatura del ex presidente Bozizé, el 3 de diciembre el Tribunal Constitucional rechazó su solicitud, citando una orden de arresto internacional y sanciones de la ONU en su contra. Una coalición de seis grupos armados, todos signatarios del acuerdo de paz de febrero de 2019 y algunos aliados de Bozizé, anunció una movilización contra el Gobierno y el proceso electoral y a mediados de diciembre se apoderó de partes de las prefecturas de Lobaye, Ouham, Ouham-Pendé, Nana Gribizi y Ombella M'Poko en el

oeste, centro y sur, bloqueando las principales rutas de suministro a Bangui y llevando a cabo intensos combates con el Ejército y la MINUSCA. El Gobierno acusó a esta coalición de intentar perpetrar un golpe de Estado a favor de Bozizé.

Por otro lado, la implementación del Acuerdo Político por la Paz y la Reconciliación de RCA de 2019 sufrió dificultades y retrasos, ya que varios grupos armados continuaron violando el acuerdo y obstruyendo la restauración de la autoridad gubernamental en el conjunto del país.⁴¹ Además, se produjo un resurgimiento de la violencia en el norte y noroeste de RCA y persistió en otras partes del país, aunque la situación en el noreste se estabilizó después de un repunte de la violencia a principios del año. Los ataques entre grupos armados, las acciones de represalia y ejecuciones de civiles, las operaciones por parte de la MINUSCA y las Fuerzas Armadas centroafricanas fueron constantes y en aumento. Las razones que explican el reinicio de los combates son diversas. Según la organización ICG remiten a la decepción por parte de algunos grupos armados con las consecuencias del acuerdo de paz, así como a la incapacidad de los garantes del acuerdo y la MINUSCA de hacer respetar el pacto.⁴² A su vez, también remiten, según la organización, a enfrentamientos por el control de las vías de tráfico y comercio transfronterizo y la trashumancia, territorios y explotaciones mineras, que adquirieron una dimensión étnica por la movilización de las respectivas comunidades.

El 25 de abril siete grupos armados firmantes del acuerdo de paz de febrero de 2019 anunciaron la suspensión de su participación en el Gobierno y en los mecanismos de implementación del acuerdo de paz, acusando al presidente Touadéra de incumplir sus compromisos. Días antes, el presidente Touadéra y el primer ministro, Firmin Ngrébada, se habían reunido, respectivamente, con los líderes de los grupos armados UPC y FPRC, sin éxito. El 3R acusó al Gobierno de incumplir sus compromisos con relación a los preparativos electorales y amenazó con interferir en las elecciones, y el 5 de junio suspendió su participación en los mecanismos de seguimiento del Acuerdo Político incrementando las acciones contra los cuerpos de seguridad, la MINUSCA y la población civil. El 15 de julio se produjo la explosión de una mina antitanque al paso de un vehículo de la MINUSCA, hiriendo a dos cascos azules. La MINUSCA señaló al grupo armado 3R como responsable, grupo que habría recibido el suministro y la formación para instalarlas de la compañía rusa Wagner, según fuentes militares centroafricanas. Fuentes militares confirmaron que era la primera vez que se constataba la presencia de

minas antipersona en el país. El UPC, en un comunicado el 1 de agosto, también anunció que abandonaba sus compromisos con el acuerdo, tras una reunión con el primer ministro en Bangui. El 20 de abril el Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones (prohibición de viajar y congelación de bienes) al líder del FDPC, Abdoulaye Miskine, acusado de reclutar combatientes, y el 5 de agosto impuso sanciones al líder del 3R, Sidiki Abbas, acusándolo de estar involucrado en tráfico de armas y ejecuciones de civiles. El Consejo de Seguridad de la ONU extendió el mandato de la MINUSCA hasta el 15 de noviembre de 2021 y también de las sanciones, incluyendo el embargo de armas, hasta julio de 2021. La UE estableció, en diciembre de 2019, la EU Advisory Mission in CAR (EUAM RCA), misión civil para apoyar la reforma del sector de la seguridad, misión que retrasó su inicio como consecuencia de la COVID-19 y entró en vigor en agosto de 2020, y que se suma a la otra misión de la UE existente en el país, la EUTM RCA, de carácter militar.⁴³

Durante el año se incrementaron las actividades de algunos grupos armados en el conjunto de la RCA y se produjo un aumento de la tensión política a raíz de la celebración de las elecciones generales del 27 de diciembre

Paralelamente, se incrementó la preocupación por el papel de Rusia en el país. Según la agencia The Africa Report,⁴⁴ en 2018 la RCA alcanzó acuerdos de extracción de minerales con la empresa rusa Lobaye Invest Sarlu, que a mediados de 2020 ya estaba presente en al menos cuatro ciudades. Rusia empezó a operar un aeropuerto y a entrenar a los cuerpos de seguridad centroafricanos. En marzo, 170 miembros de la compañía privada de seguridad Wagner Group llegaron al país para contribuir a la formación de los cuerpos de seguridad, y otros 500 aparecieron en la frontera sudanesa en julio.⁴⁵ Se sospecha que el grupo Wagner estaría financiado por el hombre de negocios ruso Yevgeny Prigozhin, aliado del presidente Vladimir Putin. Esta organización estaría actuando con total opacidad en el continente. En julio de 2018, el grupo fue acusado de ejecutar a tres periodistas rusos que investigaban las actividades de la organización en el país. Según diversas fuentes, Rusia planea establecer bases militares en seis países africanos, entre ellos la RCA y Sudán. Entre 2015 y 2020, Rusia ha completado acuerdos de cooperación militar con 21 países africanos.

En lo alusivo a la situación humanitaria, según OCHA, esta siguió siendo preocupante. Aproximadamente 2,6 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria y 2,36 millones de personas se encontraban en una situación de inseguridad alimentaria. Las tensiones entre comunidades, los ataques contra civiles y una serie de ataques contra los trabajadores humanitarios dificultaron el acceso. Además, la pandemia de la COVID-19 agravó la situación socioeconómica del país.

41. Véase el resumen sobre RCA en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2021.

42. International Crisis Group, *Réduire les tensions électorales en République Centrafricaine*, International Crisis Group, núm.296, 10 de diciembre de 2020.

43. ZIF kompakt, New EU advisory mission operational in the Central African Republic (CAR), 27 de agosto de 2020.

44. Olivier, Mathieu, "Russia's murky business dealings in the Central African Republic", *The Africa Report*, 23 de agosto de 2019.

45. ADF, Mine Attack Stokes Fear Of Russia Destabilizing CAR, 23 de septiembre de 2020.

Si bien el número total de personas infectadas con el coronavirus es bajo (a 10 de octubre, había oficialmente 4.850 casos), RCA tiene una capacidad limitada para detectar positivos, lo que enmascara potencialmente las cifras reales. Según la OMS, la RCA es uno de los países menos preparados a nivel mundial para enfrentar el brote de la COVID-19.

RDC (este)	
Inicio:	1998
Tipología:	Gobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, FDLR, escisiones de las FDLR (CNRD-Ubwiyunge, RUD-Urunana), milicias Mai-Mai, Nyatura, APCLS, NDC-R, LRA, grupos armados de Ituri, milicias comunitarias de Kivu Sur, grupos armados burundeses, Burundi, Rwanda, MONUSCO
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

El actual conflicto tiene sus orígenes en el golpe de Estado que llevó a cabo Laurent Desiré Kabila en 1996 contra Mobutu Sese Seko, que culminó con la cesión del poder por parte de éste en 1997. Posteriormente, en 1998, Burundi, Rwanda y Uganda, junto a diversos grupos armados, intentaron derrocar a Kabila, que recibió el apoyo de Angola, Chad, Namibia, Sudán y Zimbabwe, en una guerra que causó alrededor de cinco millones de víctimas mortales. El control y el expolio de los recursos naturales han contribuido a la perpetuación del conflicto y a la presencia de Fuerzas Armadas extranjeras. La firma de un alto el fuego en 1999, y de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003, comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración de un Gobierno de transición y posteriormente, en 2006, un Gobierno electo. Sin embargo, este proceso no supuso el fin de la violencia en el este del país debido al papel de Rwanda y a la presencia de facciones de grupos no desmovilizados y de las FDLR, responsables del genocidio rwandés en 1994. El incumplimiento de los acuerdos de paz de 2009 propició en 2012 la desertión de los militares del antiguo grupo armado CNDP integrados en el Ejército congolés, que organizaron una nueva rebelión, llamada M23, apoyada por Rwanda. En diciembre de 2013 dicha rebelión fue derrotada. A pesar de ello persiste el clima de inestabilidad y violencia.

La RDC siguió afectada por un clima de violencia e inestabilidad política derivada de las tensiones en el seno de la coalición gobernante, que se rompió en diciembre.⁴⁶ A esto se le sumó la persistencia de la violencia debido a la presencia de numerosos grupos armados en el este del país. Estos grupos continuaron llevando a cabo acciones armadas entre ellos por el control del territorio, las vías de comunicación y el acceso a los recursos naturales, viéndose implicados en enfrentamientos con las

OCHA afirmó que RDC albergaba a la mayor cifra de población desplazada interna de África, 5,5 millones de personas, de las cuales 3,2 millones eran menores

FARDC, y cometiendo graves abusos contra la población civil. La situación en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur (este) siguió marcada por la presencia y actividades de las diferentes milicias Mai Mai, CODECO, las FDLR y sus escisiones, así como por la extensión del conflicto armado de Burundi al interior de la RDC debido a la presencia de actores armados burundeses. Cabe destacar la escalada del conflicto armado derivado de las actividades del grupo de origen ugandés ADF que opera especialmente en la zona norte de la provincia de Kivu Norte, aunque éste expandió sus ataques a la provincia de Ituri.⁴⁷ Además, esta provincia sufrió una escalada de la violencia como consecuencia de los ataques del grupo CODECO, cuyos combatientes provienen en su mayoría de la etnia lendu y están en conflicto con miembros de la tribu hema por los recursos naturales y la propiedad de la tierra. Esto ocurrió a pesar de la acción concertada de los excombatientes congoleños para promover el desarme, la desmovilización y la reintegración. Algunos combatientes de CODECO han firmado un acuerdo de paz con el Gobierno, pero varias facciones siguen combatiendo.

En octubre, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó el informe sobre la situación de los derechos humanos en la RDC, señalando varios episodios que podrían constituir crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, así como observó que persistieron las amenazas contra defensores de derechos humanos, miembros de la sociedad civil y periodistas, detención arbitraria y acoso. El informe documentó 857 violaciones y abusos de derechos humanos durante el período de 12 meses que comenzó en mayo de 2019. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en el país anunció el 5 de agosto que se había incrementado el número de víctimas mortales por parte de los grupos armados del este del país durante los seis primeros meses de 2020, en comparación con el mismo periodo de 2019. En marzo de 2020, según la OCHA, RDC albergaba a la mayor cifra de población desplazada interna de África, 5,5 millones de personas, de los cuales 3,2 millones eran menores. En las zonas en las que había grupos armados activos y operaciones militares en curso, el acceso humanitario se vio seriamente obstaculizado. Los problemas de acceso, como los incidentes relacionados con la seguridad sufridos por el personal humanitario y el cobro ilegal de impuestos, siguieron afectando a la prestación de asistencia humanitaria. Así mismo siguió activo el debate en torno a la retirada progresiva de la MONUSCO y las funciones encomendadas en su mandato. En la resolución 2502 de 2019 se solicitó esta estrategia como preparación para el eventual retiro gradual de la MONUSCO, que plantea una concentración de las actividades de la misión en las provincias donde persiste el conflicto: Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri.

46. Véase el resumen sobre RDC en el capítulo 2 (Tensiones).

47. Véase el resumen sobre RDC (este-ADF) en este capítulo.

RDC (este - ADF)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

Las Fuerzas Democráticas Aliadas-Ejército Nacional de Liberación de Uganda (ADF-NALU) es un grupo rebelde islamista dirigido por combatientes ugandeses y congolese que opera en el noroeste del macizo de Rwenzori (Kivu Norte, entre RDC y Uganda). En sus orígenes contaba con entre 1.200 y 1.500 milicianos reclutados principalmente en ambos países y en Tanzania, Kenia y Burundi. Es el único grupo en el área considerado una organización islamista, y está incluido en la lista de grupos terroristas de EEUU. Fue creado en 1995 por la fusión de otros grupos armados ugandeses refugiados en RDC (Rwenzururu, ADF) y posteriormente pasó a llamarse ADF. En el grupo prevalece la ideología del antiguo ADF, que tenía sus orígenes en movimientos islamistas marginados en Uganda, vinculados al movimiento islámico conservador Salaf Tabliq. En sus primeros años fue instrumentalizado por el Zaire de Mobutu (y posteriormente también Kabila) para presionar a Uganda, gozaba también del apoyo de Kenia y de Sudán y tenía un fuerte apoyo clandestino en Uganda. En un inicio pretendía instaurar un Estado islámico en Uganda, pero en los años 2000 se afianzó en las comunidades que le acogían en RDC, convirtiéndose en una amenaza de carácter local a la administración congolese, aunque su actividad fue limitada. A principios de 2013 el grupo inició una oleada de reclutamiento y secuestros y una escalada de ataques contra la población civil.

Durante el año se produjeron intensas operaciones militares de las Fuerzas Armadas (FARDC) en el este del país en un esfuerzo por desalojar a los grupos armados de la zona, en particular las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF). Desde el 30 de octubre de 2019, las FARDC han liderado una nueva ofensiva creciente contra las ADF, intensificando los combates que generaron un fuerte impacto en la población civil, especialmente debido a las contraofensivas de las ADF. El movimiento armado se dividió en pequeños grupos, algunos de los cuales se expandieron a otras áreas, en particular a los territorios de Irumu y de Mambasa, en la vecina provincia de Ituri, donde se produjo una escalada de la violencia. En diciembre de 2019 las ADF ejecutaron a 97 civiles como represalia por las operaciones iniciadas en octubre. El año se inició con avances por parte de las FARDC, que consiguieron capturar el feudo del ADF, Madina, el 9 de enero, a costa de la muerte de 40 militantes del grupo y 30 soldados, y el incremento de las represalias del grupo contra la población civil días después con la ejecución de decenas de civiles en el territorio de Beni. Las acciones ofensivas y de represalia de las ADF, así como de las operaciones militares del Ejército, siguieron durante todo el año.

En julio la ONU señaló que las ADF habían intensificado sus ataques contra la población civil en los últimos 18 meses desde enero de 2019, expandiendo sus ataques más allá de sus áreas de acción tradicionales. Estas acciones habrían provocado más de 1.000 víctimas mortales entre enero de 2019 y junio de 2020, y podrían ser calificadas de crímenes de guerra y contra la humanidad, según destacó el informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en RDC.⁴⁸ Los impactos de los abusos cometidos por las ADF fueron sistemáticos y brutales. Los asaltantes utilizaron artillería pesada en sus ataques contra las localidades, como morteros, además de AK47 y machetes; a menudo incendiaron localidades enteras, centros de salud y escuelas, y secuestraron a hombres, mujeres y menores. El modus operandi habitual de sus ataques indicaba que había una clara intención de no dejar supervivientes. Según el informe, además de las víctimas mortales, las ADF habrían dejado otros 176 heridos, habrían secuestrado 717 personas, reclutado a 59 menores, y una escuela, siete centros de salud y decenas de casas habrían sido atacadas y saqueadas, provocando el desplazamiento forzado de miles de personas. Además, las FARDC también serían responsables de haber cometido graves violaciones de los derechos humanos, particularmente desde el inicio de las operaciones en octubre de 2019. En concreto, los cuerpos de seguridad serían responsables de haber ejecutado 14 civiles, de causar heridas a otros 49, así como de arrestos arbitrarios y la detención de 297 civiles. Estas violaciones habrían reforzado la desconfianza de la población hacia los cuerpos de seguridad. Finalmente, cabe destacar que cientos de prisioneros escaparon durante un ataque que la policía atribuyó a las ADF el 21 de octubre en Beni. El grupo armado Estado Islámico (ISIS) se atribuyó la responsabilidad de varios de los ataques cometidos por las ADF, pero la MONUSCO aún no ha encontrado ninguna prueba de una conexión directa entre ISIS y las ADF.

Sudán (Darfur)	
Inicio:	2003
Tipología:	Autogobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias progubernamentales PDF, milicias progubernamentales janjaweed, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), diversas facciones del SLA y otros grupos armados, UNAMID
Intensidad:	2
Evolución:	↑

48. MONUSCO y OHCHR, *Report on violations of human rights and international humanitarian law by the Allied Democratic Forces armed group and by members of the defense and security forces in Beni territory, North Kivu province and Irumu and Mambasa territories, Ituri province, between 1 January 2019 and 31 January 2020*, ONU, julio de 2020.

Síntesis:

El conflicto de Darfur surge en 2003 en torno a demandas de mayor descentralización y desarrollo de la región por parte de diversos grupos insurgentes, principalmente SLA y JEM. El Gobierno respondió al levantamiento utilizando a las Fuerzas Armadas y las milicias árabes janjaweed. La magnitud de la violencia cometida por todas las partes contendientes contra la población civil ha llevado a considerar la posibilidad de la existencia de un genocidio en la región, donde ya han muerto 300.000 personas desde el inicio de las hostilidades, según Naciones Unidas. Después de la firma de un acuerdo de paz (DPA) entre el Gobierno y una facción del SLA en mayo del 2006, la violencia se recrudeció, además de generar la fragmentación de los grupos de oposición y un grave impacto regional por los desplazamientos de población, por la implicación sudanesa en el conflicto chadiano y la participación chadiana en el conflicto sudanés. A esta dimensión se suma la tensión intercomunitaria por el control de los recursos (tierra, agua, ganado, minas), en algunos casos instigada por el propio Gobierno. La misión de observación de la UA AMIS, creada en 2004, fue integrada en el año 2007 en una misión conjunta UA/ONU, la UNAMID. Esta misión ha sido objeto de múltiples ataques e incapaz de cumplir con su mandato de proteger a la población civil y al personal humanitario.

La región de Darfur continuó siendo el epicentro de la violencia armada en Sudán, si bien durante el año también se registraron incidentes armados en la región de Kordofán Sur y en el este del país. El conflicto armado en la región de Darfur vivió un deterioro de su situación de seguridad en relación con el año anterior. Según los datos facilitados por ACLED, durante el año se produjeron en la región 555 muertes producidas por enfrentamientos, ataques contra civiles y violencia remota. Ello significa un incremento de casi el doble de muertes en relación a las registradas en 2019 (268), aunque los datos siguen mostrando una desescalada si se compara con las 859 muertes violentas registradas durante el 2018, las 996 en 2017 o las 2.286 en 2016. La violencia en Darfur sigue siendo muy superior al otro escenario de conflictividad armada presente en el país, situado en Nilo Azul y Kordofán Sur, en donde se registraron a lo largo del año un total de 122 víctimas mortales, según datos facilitados por ACLED. A su vez, según los datos de ACNUR de mediados de 2020, en Sudán 772.000 personas huyeron de sus hogares y se refugiaron fuera de las fronteras nacionales, principalmente debido al conflicto armado en Darfur. El número de personas desplazadas internas a mediados de 2020 se situó en los 1,9 millones. Estas cifras colocan al país en el octavo puesto a nivel global, y el cuarto en África en relación al número de personas desplazadas por la violencia. De forma paralela, Sudán acoge a 1.058.800 personas refugiadas provenientes de las crisis abiertas en los países vecinos –a los que hay que añadir los nuevos refugiados no contabilizados, procedentes de la crisis abierta en Etiopía a finales de año– ubicando al país en el sexto puesto a nivel global de países de acogida, el segundo en África por detrás de Uganda.⁴⁹

Si bien el proceso de negociación de paz que mantuvo durante el año el Gobierno con diferentes grupos armados de la región de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul en Juba, capital de Sudán del Sur, concluyó con un histórico acuerdo de paz firmado en agosto,⁵⁰ este no logró detener los episodios de violencia en Darfur. Ello se debió, en parte, a la **negativa a sumarse a las negociaciones de paz la facción del Movimiento de Liberación de Sudán comandada por Abdel Wahid al Nur (SLM/A-AW)**, así como al mantenimiento de disputas y enfrentamientos intercomunitarios en la zona. En relación a la primera, si bien el SLM/A-AW, tras el llamamiento internacional realizado por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para lograr un alto el fuego que permita la aplicación de las medidas sanitarias y evitar la propagación del COVID-19, comunicó el 30 de marzo el cese de la violencia en Darfur, reiteró su rechazo a unirse al proceso de paz. Los enfrentamientos armados entre la facción liderada por al Nur y las fuerzas de seguridad remitieron durante un periodo, pero se reanudaron entre los meses de octubre y noviembre, principalmente en el área de Jebel Marra.

Por otro lado, en relación a **enfrentamientos y disputas intercomunitarias**, durante el año se siguieron registrando diferentes episodios violentos en varios puntos de Darfur. El año comenzó con la visita de una delegación del Gobierno, que incluía al primer ministro, Abdalla Hamdok, y al vicepresidente del Consejo Soberano de Sudán y líder de la Rapid Support Force, Mohamed Dagalo –conocido como Hemedti– a El-Geneina, capital de Darfur Occidental. La visita se realizaba en el contexto de resolver el conflicto entre miembros de grupos árabes y la tribu masalit que dejó un balance de más de 60 muertos a finales de 2019. La mediación, sin embargo, no detuvo los choques violentos entre diferentes grupos, que se siguieron produciendo a lo largo del año en Darfur Norte, Darfur Occidental y Darfur Sur. Algunos de estos ataques se produjeron con el objeto de detener el regreso de desplazados internos y refugiados a tierras tomadas por la fuerza bajo la presidencia de Omar al-Bashir.

En relación con la **misión híbrida de la ONU y la UA en Darfur (UNAMID)**, el Consejo de Seguridad de la ONU prosiguió con la hoja de ruta de reducción y finalización de la misión en el país, según lo acordado por el organismo en sus resoluciones 2363 (2017) y 2429 (2018). Durante el año, en la resolución 2525 (2020), el Consejo prorrogó el mandato de la UNAMID por dos meses, hasta el 31 de diciembre de 2020, fecha de cierre de la misión. En la misma resolución, el Consejo aprobó una nueva misión de asistencia de la ONU en Sudán, la **Misión Integrada de Asistencia para la Transición de las Naciones Unidas en Sudán (UNITAMS)**, que estará operativa a principios de 2021, y cuyas funciones serán las de apoyar la transición

49. UNHCR, *Mid-year trends 2020*, 30 de noviembre de 2020.

50. Véase el resumen sobre Sudán en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020: análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2021.

en el país, la consolidación de la paz y la protección de los civiles, especialmente en Darfur. El Gobierno de transición de Sudán dejó clara su posición sobre la finalización de la UNAMID el 31 de diciembre, afirmando que asumirá la plena responsabilidad de la protección de los civiles. El anuncio del fin de la UNAMID, desplegada desde el año 2007, generó múltiples protestas contra su conclusión por parte de personas desplazadas por el conflicto de Darfur, quienes solicitaron su permanencia para garantizar su protección hasta que se complete el proceso de paz.

De forma paralela, el Consejo de Seguridad de la ONU continuó durante el año respaldando los esfuerzos para aumentar la participación de las mujeres en las actividades de mediación y prevención de conflictos, en particular mediante la Red de Mujeres Africanas en la Prevención de Conflictos y la Mediación. La agencia ONU-Mujeres siguió prestando apoyo a la Red, que incluyó el despliegue de integrantes de la misma en Etiopía, Sudán y Sudán del Sur. Por otro lado, la organización de mujeres con sede en Kampala, Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa (SIHA), denunció que los casos de violencia sexual en Darfur, principalmente en los campos de desplazados internos del norte, habían aumentado un 50% entre marzo y junio a partir de la aplicación de las medidas decretadas anti COVID-19. La organización realizó un llamamiento al gobierno de transición para establecer mecanismos de prevención, justicia y protección de civiles, especialmente las mujeres.

Finalmente, en otro evento significativo ocurrido durante el año, en el mes de junio la Corte Penal Internacional informó que el ex líder de las Fuerzas de Defensa Popular y milicias Janjaweed, Ali Kushayb, buscado por presuntos crímenes de guerra en Darfur entre 2003-2004, había sido detenido y entregado por la República Centroafricana el 7 de junio, siendo trasladado a La Haya.

Sudán del Sur	
Inicio:	2009
Tipología:	Gobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción ex vicepresidente Riek Machar), facciones disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet y Gathoth Gatkuoth, SPLM-FD, SSLA, SSDM/A, SSDM-CF, SSNLM, REMNASA, NAS, SSUF (Paul Malong), SSOA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN, White Army, Shilluk Agwelek), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Sudán, Uganda, UNMISS.
Intensidad:	3
Evolución:	↑

51. UNHCR, *Mid-year trends 2020*, 30 de noviembre de 2020.

Síntesis:

El acuerdo de paz alcanzado en 2005 que puso fin al conflicto sudanés reconocía el derecho de autodeterminación del sur a través de un referéndum. No obstante, el cese de la guerra con el norte y la posterior consecución de la independencia para Sudán del Sur en 2011 no lograron llevar la estabilidad a la zona meridional. Las disputas por el control de territorio, ganado y poder político se acrecentaron entre las múltiples comunidades que pueblan Sudán del Sur, aumentando el número, la gravedad y la intensidad de los enfrentamientos entre ellas. La situación se había agravado aún más tras las elecciones generales de abril de 2010, cuando diversos militares que habían presentado su candidatura o apoyado a oponentes políticos del partido en la presidencia, SPLM/A, no lograron la victoria. Estos militares se negaron a reconocer los resultados de los comicios y decidieron tomar las armas para reivindicar su acceso a las instituciones, denunciar el predominio de los dinka y la subrepresentación de otras comunidades dentro de las mismas y señalar al Gobierno de Sudán del Sur como corrupto. Las ofertas de amnistía por parte de Juba no han logrado poner fin a la insurgencia, acusada de recibir financiación y apoyo logístico sudanés. En paralelo, se produjo una escalada de la violencia a finales de 2013 entre los partidarios del Gobierno de Salva Kiir y los del ex vicepresidente Riek Machar (SPLA-IO), desatando una nueva fase de violencia que se mantiene hasta el presente. En 2015 se logró la firma de un Acuerdo de Paz entre el Gobierno y el SPLA-IO (ratificándose en 2018), sin embargo, las resistencias de las partes signatarias a implementarlo, así como el surgimiento de otros grupos armados y milicias comunitarias, han mantenido la guerra en el país.

Durante el año el país padeció una dinámica de violencia creciente en relación al año anterior, debido a la dificultad en la implementación de algunas cláusulas del acuerdo de paz de 2018, registrándose múltiples incidentes armados relacionados con disputas intercomunitarias en la región central del país, así como a enfrentamientos entre tropas gubernamentales y grupos no signatarios del Acuerdo de Paz, principalmente en la región sureña de Ecuatoria Central. Según datos de ACLED, durante el 2020 se registraron un total de 748 episodios de violencia armada en el país que costaron la vida a 2.252 personas, lo cual indica un importante incremento del número de víctimas mortales en relación a las 1.499 registradas en el 2019. De forma paralela, la emergencia humanitaria se mantuvo en el país. Según datos facilitados por ACNUR en su informe que cubre hasta mediados de 2020, el país registró 2.278.000 personas que huyeron de la violencia y se refugiaron en países vecinos (principalmente en Uganda y Sudán). Estos datos sitúan a Sudán del Sur como la mayor crisis de personas refugiadas en África y la cuarta más grande del mundo, por detrás de Siria, Venezuela y Afganistán. A su vez, el número de personas desplazadas internas a mediados de 2020 se situaba en los 1,6 millones, de las cuales 125.300 se habían producido entre enero y junio de 2020, periodo en el cual también 107.000 personas desplazadas internas volvieron a sus hogares.⁵¹

Si bien la firma del acuerdo de paz denominado *Revitalised Agreement on the Resolution of the*

Conflict in South Sudan (R-ARCSS) en septiembre de 2018 puso fin a los enfrentamientos armados entre las Fuerzas Armadas y el principal grupo rebelde, el SPLA-IO encabezado por Riek Machar, nuevos frentes y organizaciones armadas siguieron desestabilizando el país, principalmente en las regiones del sur y centro. Durante el 2020 se iniciaron conversaciones de paz entre el Gobierno y los grupos no signatarios del Acuerdo de Paz organizados a través de la Alianza de Movimientos de Oposición de Sudán del Sur (SSOMA) –que incluye a las organizaciones rebeldes NAS, SSUF/A, Real-SPLM, NDM-PF, UDRM/A, NDM-PF, SSNMC. Estas negociaciones que se están desarrollando en Roma (Italia) bajo la mediación de la Comunidad de Sant'Egidio y la IGAD, lograron, el 12 de enero, la firma de la **Declaración de Roma sobre el Proceso de Paz en Sudán del Sur** en donde las partes se comprometieron a un alto el fuego, garantizar el acceso humanitario y a mantener un diálogo.⁵² Sin embargo, el estancamiento de las negociaciones en el mes de abril conllevó la ruptura de la tregua militar, activándose las hostilidades militares entre fuerzas gubernamentales y el NAS comandado por Thomas Cirillo, quien acusó a las fuerzas armadas del SPLA-IO de atacar en la región de Ecuatoria Central. Las hostilidades militares se mantuvieron a lo largo del año, ampliándose a la región de Ecuatoria Occidental, en el sur del país. Como respuesta, el 29 de mayo el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó el embargo de armas a Sudán del Sur y las sanciones selectivas contra personas hasta mayo de 2021. A principios de junio la misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS) y la UE solicitaron sin éxito al Gobierno de Salva Kiir y al NAS el fin de las hostilidades y el respeto a la tregua negociada en enero. Los enfrentamientos armados entre el NAS y las FFAA (rebautizadas como Fuerza de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur – SSPDF) y el SPLA-IO se mantuvieron durante el tercer trimestre del año en el estado de Ecuatoria Central. A principios de septiembre la UNMISS desplegó tropas para establecer una base temporal en el condado de Lobonok tras el aumento de ataques contra civiles y trabajadores humanitarios, denunciando el bloqueo por parte del Gobierno. Posteriormente, el grupo rebelde Frente/ Ejército Unido de Sudán del Sur (SSUF/A) encabezado por Paul Malong, amplió las hostilidades militares al norte del país, en el estado de Unity.

Por otro lado, se mantuvieron los enfrentamientos armados en el centro y este del país motivados

La violencia intercomunitaria en la región central de Sudán del Sur se convirtió en el principal foco de inestabilidad del país y en un serio riesgo para la implementación del Acuerdo de Paz

por diferentes **disputas intercomunitarias en el marco de las dificultades de gobernanza en el país debido a la debilidad y luchas internas en el nuevo Gobierno de Unidad** creado en el mes de febrero. Estos enfrentamientos se registraron principalmente en los estados de Lakes, Warrap, Jonglei y el área administrativa del Gran Pibor. El aumento de la violencia en el estado de Jonglei se interpretó por diversas organizaciones sursudanesas como resultante de la situación de ingobernabilidad en el estado por la falta de acuerdo entre las partes signatarias del acuerdo de paz para establecer el gobernador en dicho estado. A mediados de junio, el Gobierno formó un comité para aliviar las tensiones entre las comunidades dinka, lou nuer y murle, y posteriormente puso en marcha un programa de desarme a nivel nacional, así como iniciativas de diálogo entre comunidades para abordar la creciente violencia intercomunitaria. Sin embargo, el inicio de la campaña de desarme en la región central del país durante el mes de agosto provocó duros enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y miembros de milicias comunitarias que se negaron a desarmarse, dejando al menos 148 muertos en el condado de Tonj East, estado de Jonglei. La UNMISS, como respuesta al incremento de la violencia, envió el 11 de agosto una patrulla de mantenimiento de la paz a la zona y estableció una base temporal en la ciudad de Tonj. La imposibilidad de contener la violencia obligó al Gobierno a decretar el 13 de agosto el estado de emergencia en el estado de Jonglei y el área administrativa del Gran Pibor. Según datos proporcionados por la UNMISS, la violencia intercomunitaria habría dejado un balance de al menos 800 personas muertas solo entre los meses de abril y junio, representando el principal foco de violencia en el país y un serio riesgo para la implementación del acuerdo de paz.

El incremento de la violencia en varios puntos del país no evitó que a principios de septiembre la UNMISS comenzara a retirar sus fuerzas de varias bases de mantenimiento de la paz en el país, manteniendo el servicio de ayuda humanitaria. El inicio del plan de retirada provocó que miles de personas desplazadas internamente se manifestaran en Juba, Jonglei y Unity, solicitando al organismo reconsiderar la retirada debido a la violencia. La UNMISS informó posteriormente del desarrollo de nuevos planes para establecer bases temporales de mantenimiento de la paz y el desarrollo de patrullas para poner fin a los enfrentamientos intercomunitarios en la región de Jonglei.

52. Véase el resumen sobre Sudán del Sur en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020: análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2021.

Magreb - Norte de África

Libia	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Recursos, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) con sede en Trípoli, Gobierno con sede en Tobruk/Bayda, grupos armados de diverso signo, incluyendo el Ejército Nacional de Libia (LNA) -también denominado Fuerzas Armadas Árabes de Libia (ALAF)- , milicias de Misrata, Petroleum Facilities Guard, Brigadas de Defensa de Bengasi (BDB), ISIS, AQMI, mercenarios, EEUU, Francia, Reino Unido, Egipto, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudita, Jordania, Turquía, Qatar, Rusia, entre otros países
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

En el marco de las revueltas en el norte de África, en febrero de 2011 se inició una contestación popular contra el Gobierno de Muammar Gaddafi. En el poder desde 1969, su régimen se había caracterizado por el autoritarismo, la represión a la disidencia, la corrupción y graves carencias a nivel institucional. El conflicto interno motivó una escalada de violencia que derivó en una guerra civil y en una intervención militar internacional liderada por las fuerzas de la OTAN. Tras meses de enfrentamientos, el bando rebelde anunció la “liberación” de Libia a finales de octubre de 2011, después de la captura y ejecución de Gaddafi. No obstante, en el país han persistido elevados niveles de violencia derivados de múltiples factores, entre ellos la incapacidad de las nuevas autoridades de controlar el país y garantizar un clima de seguridad, la elevada presencia de milicias no dispuestas a entregar sus armas y las disputas por recursos y rutas de tráfico. A partir de mediados 2014, la situación en el país se deterioró, con un incremento en los niveles de violencia y una persistente fragmentación política. Los esfuerzos por reconducir la situación se han visto obstaculizados por este panorama y el clima de inestabilidad ha favorecido la expansión de nuevos grupos, como ISIS, en el país norteafricano. Las dinámicas de violencia se han acentuado por la implicación de actores foráneos en apoyo de los diversos bandos en pugna, motivados por intereses geopolíticos y económicos, dada la ubicación estratégica de Libia en la cuenca del Mediterráneo y su gran riqueza en hidrocarburos.

El conflicto armado en Libia presentó una intensidad similar a la del año anterior, aunque al finalizar el año la firma de un alto el fuego general entre las principales partes contendientes alentaba tímidas expectativas sobre una posible disminución de la violencia. Según el think tank ACLED, durante 2020 las hostilidades provocaron la muerte de al menos 1.492 personas, un balance ligeramente menor a las 2.064 personas fallecidas en 2019, pero superior a las 1.188 contabilizadas en 2018. Respecto a las víctimas civiles, durante el

primer semestre del año la misión de la ONU en el país, UNSMIL, había contabilizado un total de 489, de las cuales 170 fallecidas y 319 heridas, principalmente a causa de los combates, la detonación de remanentes explosivos y ataques aéreos. En todo el año anterior, 2019, se registraron 287 civiles muertos y 371 heridos. Según los datos recopilados por la UNSMIL, fuerzas afiliadas al LNA de Khalifa Haftar –grupo que ha pasado a denominarse Fuerzas Armadas Árabes de Libia (ALAF, por sus siglas en inglés) pero que suele ser identificado indistintamente como ALAF o LNA– serían responsables de la mayor parte de los ataques contra civiles (en torno a un 80%), mientras que algunas acciones también fueron atribuidas a las fuerzas del GNA, siglas con las que se denomina al gobierno internacionalmente reconocido basado en Trípoli. Ante estas y otras continuas evidencias sobre vulneraciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió en junio de 2020 poner en marcha una misión de investigación independiente que durante un año indagará en los abusos perpetrados por todas las partes del conflicto armado en Libia desde principios de 2016, con la intención de evitar un empeoramiento de la situación y garantizar la rendición de cuentas.

Respecto a la evolución y dinámicas del conflicto, **durante 2020 se mantuvo e incluso acentuó la tendencia observada el año anterior, respecto a una creciente implicación de actores foráneos en apoyo a los principales bandos en conflicto.** Esta deriva se tradujo en reiteradas vulneraciones al embargo de armas, en la continua llegada al país de combatientes, mercenarios y asesores militares, y en advertencias explícitas sobre una intervención más directa en función de la marcha de los acontecimientos y los intereses comprometidos. Su influencia también permeó la evolución de los frentes de batalla, que en 2020 se concentraron principalmente en Trípoli, Sirte y otras localidades de la zona occidental de Libia. Durante el primer semestre las hostilidades se focalizaron en la capital libia y persistieron pese a algunas iniciativas que pretendieron promover una tregua. A principios de año Turquía –que en enero aprobó el envío de tropas a Libia para apoyar al GNA y facilitó la llegada de milicianos sirios al país norteafricano– y Rusia –que respalda a las fuerzas de Haftar, hombre fuerte del este del país– fracasaron en su intento de promover un cese el fuego, mientras que la Conferencia de Berlín sobre Libia –postergada varias veces en 2019 y celebrada finalmente en enero– tampoco condujo a una reducción de la violencia.⁵³ ALAF mantuvo el asedio a Trípoli y tribus aliadas a Hifter iniciaron también, en enero, un bloqueo a las exportaciones petroleras. La violencia se intensificó a partir de marzo, a pesar de la interpelación a las partes a que pusieran en marcha una tregua humanitaria para concentrar esfuerzos en dar respuesta a la COVID-19, en línea con el llamamiento a un cese el fuego global por parte del secretario

53. Véase el resumen sobre Libia en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020: análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2021.

general de la ONU. En plena pandemia, se informó de ataques a civiles, a hospitales y el corte de suministro de agua potable que afectó a dos millones de personas en Trípoli, atribuidos a ALAF. A partir de abril y con la ayuda de Turquía, fuerzas afiliadas al GNA comenzaron a avanzar posiciones en el oeste de Libia. Tras lo que fue descrito como un “repliegue táctico” de ALAF de Trípoli en mayo, el GNA consolidó su control sobre la capital en junio y denunció el hallazgo de una veintena de fosas comunes en Tarhuna, hasta entonces bastión de milicias leales a Hifter. Al finalizar el año (noviembre) se habían exhumado 112 cuerpos en la localidad, ubicada a unos 100 kilómetros al noreste de Trípoli.

A partir de mediados de año el epicentro de los combates se desplazó hacia el este, a las proximidades de Sirte. Turquía y Rusia volvieron a intentar sin éxito un acuerdo para frenar la escalada en torno a esta ciudad, mientras que Egipto –otro de los países valedores de Hifter– anunció que Sirte constituía una “línea roja” que podría determinar su intervención directa en el conflicto. De hecho, El Cairo lanzó advertencias ante acciones que consideraría como una amenaza a su seguridad nacional y autorizó el envío de tropas. En este contexto, y ante señales de alarma de UNSMIL sobre el potencial desestabilizador de los hechos en Sirte, se pusieron en marcha diversas iniciativas para intentar crear una zona desmilitarizada en torno a la ciudad, retomar negociaciones políticas y reactivar las exportaciones de petróleo para aliviar las condiciones socioeconómicas de la población, severamente afectada por el conflicto, la pandemia y el bloqueo de los ingresos petroleros –situación que motivó protestas contra las autoridades rivales en Trípoli y Sirte a mediados de año. En agosto, el GNA declaró un alto el fuego unilateral e hizo un llamado a reactivar la producción petrolera y a la celebración de elecciones en 2021. Simultáneamente, el portavoz de la Cámara de Representantes con sede en Tobruk, Aghela Saleh –aliado de Haftar, pero no siempre alineado con su agenda– también anunció una tregua. Semanas más tarde Haftar accedió a la reactivación de las exportaciones de petróleo, aunque mantuvo los ataques a posiciones del GNA cerca de Sirte. **No fue hasta finales de octubre que representantes del GNA y de ALAF suscribieron oficialmente en Ginebra un acuerdo de cese el fuego “permanente” de alcance nacional,** favoreciendo que se pusieran en marcha nuevos contactos políticos bajo los auspicios de la ONU.⁵⁴

Hasta finalizar el año el proceso político avanzaba con lentitud, aunque se informó del diseño de una hoja de ruta que incluiría elecciones presidenciales y parlamentarias el 24 de diciembre de 2021, coincidiendo con el 70º aniversario de la independencia de Libia. Paralelamente, persistían las dudas y obstáculos sobre la implementación del acuerdo de cese el fuego, que entre otras medidas incluye el

repliegue de ambos bandos a las líneas de frente, la expulsión de los combatientes extranjeros del país y la suspensión de los programas de entrenamiento militar extranjeros hasta la conformación del nuevo gobierno. Contrariamente a lo dispuesto, en los últimos meses del año se informó de la persistencia en los flujos de armas, el no repliegue de las fuerzas de ambos bandos, de la dispar interpretación de algunas disposiciones debido a ambigüedades en el texto del acuerdo y de incidentes armados que desafiarían el cese el fuego. En diciembre persistían las acusaciones mutuas por vulneraciones a la tregua y la intercepción por parte de ALAF de un barco turco que llevó a Ankara a advertir sobre graves consecuencias a quienes atacaran intereses turcos en Libia. El Parlamento turco también aprobó extender por 18 meses más el apoyo militar al GNA. En este contexto, la líder de la UNSMIL y enviada especial en funciones, Stephanie Williams –en el cargo tras la renuncia de Ghassam Salamé en marzo–, advirtió del riesgo que supone para el país la presencia de 20.000 combatientes extranjeros.

El acuerdo de cese el fuego no supuso un freno a los ataques contra activistas y defensores de derechos humanos. Entre ellos Hannan Elbarassi, abogada, defensora de los derechos de las mujeres y crítica de los grupos armados que operan en el este del país, fue asesinada en noviembre en Bengazi. Paralelamente, cabe resaltar que **el contexto de conflicto armado continuó favoreciendo gravísimos abusos contra población migrante y refugiada** atrapada en Libia y/o retornada al país norteafricano tras intentos fallidos por alcanzar las costas europeas. En línea con otros informes de diversas organizaciones en años precedentes, Amnistía Internacional denunció el abanico de abusos que padece la población migrante y refugiada en Libia en un clima de total impunidad –ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual, detenciones arbitrarias y trabajos forzados y explotación por parte de actores estatales y no estatales.⁵⁵ En este contexto, diversas voces llamaron a la UE a replantearse sus políticas de cooperación con las autoridades libias en materia migratoria, que ignoran los abusos reiteradamente denunciados por la ONU y desde la sociedad civil.

1.3.2. América

Colombia	
Inicio:	1964
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, ELN, FARC (disidentes), EPL, grupos paramilitares
Intensidad:	1
Evolución:	↑

54. Ibid.

55. Amnesty International, *Between life and death: Refugees and migrants trapped in Libya's cycle of abuse*, 24 de septiembre de 2020.

Síntesis:

En 1964, en el marco de un pacto de alternancia del poder entre los partidos Liberal y Conservador (Frente Nacional) que excluía otras opciones políticas, nacieron dos movimientos de oposición armada que se plantean la toma del poder: el ELN (de composición universitaria y obrera e inspiración guevarista) y las FARC-EP (de tendencia comunista y agrarista). En los setenta surgen diversos grupos tales como el M-19 y el EPL que terminan negociando con el Gobierno e impulsando una nueva Constitución (1991) que establece los fundamentos de un Estado Social de Derecho. A finales de los ochenta aparecen varios grupos paramilitares instigados por sectores de las Fuerzas Armadas, terratenientes, narcotraficantes y políticos tradicionales en defensa del statu quo mediante una estrategia de terror. La actividad del narcotráfico influye en la esfera económica, política y social y contribuye al incremento de la violencia. En 2016, la firma de un acuerdo de paz con las FARC llevó a su desmovilización y transformación en partido político.

El conflicto en Colombia continuó activo durante el año, registrándose enfrentamientos armados protagonizados por la guerrilla del ELN, las fuerzas de seguridad del Estado y diferentes grupos paramilitares, así como por los grupos disidentes de la desmovilizada guerrilla de las FARC. La situación de pandemia llevó al ELN a decretar un alto el fuego de un mes en abril, que no se prorrogó ante la negativa del Gobierno a responder positivamente.⁵⁶ Numerosas voces expresaron su preocupación por la intensificación de la violencia en el país. Un análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) constató esta escalada de violencia con algunas características como la descentralización y fragmentación de los grupos armados; la multiplicación de conflictos a escala local al tiempo que se redujo la capacidad de las comunidades para desescalar la violencia.⁵⁷ La FIP destacó que en el cuarto año tras la firma del acuerdo de paz con las FARC, se triplicaron los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados mientras que entre los propios grupos armados se multiplicaron por seis. La mayoría de estos enfrentamientos tuvieron lugar entre el ELN y el Clan del Golfo. De acuerdo con las cifras recopiladas por el centro de investigación CERAC, 46 personas murieron en el país como consecuencia de enfrentamientos armados con participación del ELN, contra las fuerzas de seguridad o contra otros grupos armados.⁵⁸ Además, 173 personas murieron en el país como consecuencia de la violencia política, especialmente dirigida contra dirigentes sociales y personas defensoras de derechos humanos.⁵⁹ El centro de investigación Indepaz, recogió en su informe que 340 personas fueron asesinadas en 79 masacres durante el 2020.⁶⁰ Naciones Unidas también se hizo eco de la violencia registrada en el país y en diciembre la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos señaló que

se había documentado que 255 personas fueron asesinadas en el país en 66 masacres, destacando la gravedad de la situación del pueblo indígena nasa, con 66 personas asesinadas durante 2020. Además, la misión de verificación de la ONU en el país destacó que desde la firma del acuerdo de paz, 244 antiguos combatientes de la FARC murieron asesinados. Esto motivó protestas en noviembre en Bogotá por parte de antiguos combatientes.

Los enfrentamientos armados entre los diferentes grupos armados y con las fuerzas de seguridad provocaron el desplazamiento forzado de miles de personas. Según un informe presentado por congresistas de los partidos Alianza Verde, Polo Democrático, Cambio Radical, Liberal, Colombia Humana y 'la U', durante los seis primeros meses de 2020 más de 16.000 personas tuvieron que desplazarse como consecuencia de la violencia, lo que representó un incremento de cerca del 97%, a pesar de las restricciones a la movilidad impuestas por la situación de pandemia. En el departamento del Cauca, las disputas por el control del territorio entre el ELN y disidencias de las FARC como el Frente Carlos Patiño o "Segunda Marquetalia", provocaron numerosas muertes y forzaron el desplazamiento de miles de personas. Con respecto a los impactos de género del conflicto, la organización Sisma Mujer destacó que la pandemia agravó la situación de las defensoras de derechos humanos, aumentando la violencia contra ellas con más atentados y homicidios.⁶¹

1.3.3. Asia y Pacífico

Asia Meridional

Afganistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, coalición internacional (liderada por EEUU), OTAN, milicias talibán, señores de la guerra, ISIS (EI-KP)
Intensidad:	3
Evolución:	↓

Síntesis:

El país ha vivido en conflicto armado prácticamente de forma ininterrumpida desde la invasión de las tropas soviéticas en 1979, cuando se inició la guerra entre las fuerzas soviéticas y afganas por una parte, y las guerrillas anticomunistas islamistas (muyahidín) por otro. La retirada de las tropas soviéticas en

56. Véase el resumen sobre el proceso de paz con el ELN en Escuela de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2021

57. Fundación Ideas para la Paz, Un nuevo ciclo de violencia organizada a cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz, 24 noviembre 2020.

58. CERAC, *Reporte del conflicto con el ELN*, Reporte mensual número 8, 29 de enero de 2021.

59. CERAC, *Monitor de Violencia Política en Colombia*, Reporte mensual número 18, 11 de diciembre de 2020.

60. Indepaz, *Informe de Masacres en Colombia durante el 2020*, 6 de diciembre de 2020.

61. Sisma Mujer, *Líderesas y defensoras durante la pandemia: entre la violencia sociopolítica de género y el COVID-19*, Boletín N° 24, 29 de noviembre de 2020.

1989 y el ascenso de los muyahidín al poder en un contexto de caos y enfrentamientos internos entre las diferentes facciones, facilitó el ascenso al poder del movimiento talibán desde el sur a la práctica totalidad del territorio afgano en la segunda mitad de la década de 1990. En noviembre de 2001, tras los atentados del 11 de septiembre de al-Qaeda y la negativa del Gobierno talibán de entregar a Osama ben Laden y otros líderes de al-Qaeda (en territorio afgano), EEUU atacó al país ayudado por un contingente de fuerzas británicas. Tras la firma de los acuerdos de Bonn se instauró un Gobierno interino liderado por Hamid Karzai posteriormente refrendado por las urnas. Desde 2006 se ha producido una escalada de la violencia, motivada por la recomposición de las milicias talibán. Tras las elecciones presidenciales y provinciales de 2014, el país se sumió en una crisis provocada por las acusaciones de fraude electoral tras la segunda ronda en la que los dos líderes más votados, Ashraf Ghani y Abdulá Abdulá, mantuvieron los resultados en el aire durante meses. En septiembre, se llegó a un acuerdo para crear un Gobierno bicéfalo con Ghani en la presidencia y Abdulá como jefe ejecutivo. En 2011 las tropas internacionales iniciaron su retirada, que se completó a finales de 2014, aunque en el terreno quedó desplegada la misión “Resolute Support”, con mandato de la OTAN para formar y entrenar a las fuerzas afganas y otra fuerza para llevar a cabo operaciones de formación y contraterrorismo, integrada por soldados norteamericanos, misión “Freedom Sentinel”.

El conflicto armado en Afganistán experimentó un descenso en los niveles de violencia como consecuencia de los avances en el proceso de paz en el país, aunque la violencia siguió siendo de elevada intensidad durante todo el año. Según las cifras recopiladas por la UNAMA, durante 2020 se registró un número de víctimas civiles de 3.035, la cifra más baja desde 2013 y una reducción del 15% respecto a 2019. La base de datos del centro de investigación ACLED recogió una cifra de fallecimientos como consecuencia de la violencia de 21.067, la mitad que el año anterior. A pesar del acuerdo de paz entre el Gobierno de EEUU y la insurgencia talibán, y del inicio del proceso de diálogo intraafgano protagonizado por el Gobierno del país y la insurgencia talibán, durante todo el año se produjeron enfrentamientos armados y atentados de gravedad que provocaron numerosas víctimas mortales y heridos. Estos enfrentamientos y atentados fueron utilizados como forma de presión para condicionar los diferentes procesos de diálogo y definir las posturas en la mesa de negociación. En paralelo, los momentos decisivos en el proceso de paz también vinieron acompañados de reducciones significativas de la violencia, en algunos casos como consecuencia del acuerdo y en otros como muestra de voluntad política y como medidas para generar confianza. Así sucedió durante la semana previa a la firma del acuerdo entre los talibanes y EEUU el 29 de febrero en Doha. El 22 de febrero se inició un periodo de siete días de reducción de la violencia, requisito para la firma del acuerdo. En mayo, durante la festividad de

La reducción de la violencia en el país se debió, según Afghanistan Analysts Network, a una menor implicación de ISIS, al inicio de la retirada de EEUU y la menor actividad ofensiva de las fuerzas afganas, y no tanto una reducción en las acciones armadas talibanes

Eid al-Fitr, se produjo un breve alto el fuego de tres días, anunciado por los talibanes y seguido por el Gobierno. En agosto, coincidiendo con la festividad de Eid al-Adha, se produjo un nuevo anuncio de alto el fuego de tres días, que también recibió una respuesta gubernamental positiva. Además, durante el año se produjo una reducción de la violencia de forma más significativa en las ciudades, mientras que las zonas rurales fueron escenario de enfrentamientos armados de forma más constante. Previamente a la firma del acuerdo de paz entre EEUU y los talibanes, cabe destacar que se produjeron diferentes ataques aéreos estadounidenses que causaron víctimas mortales, algunas de ellas civiles. De acuerdo con la Afghanistan Analysts Network, la principal causa de la reducción en la mortalidad de civiles fue una menor implicación en el conflicto por parte de ISIS, así como el inicio de la retirada de las fuerzas estadounidenses y el menor número en las acciones ofensivas por parte de las fuerzas de seguridad afganas, y no tanto una reducción en las acciones armadas talibanes.⁶² **En mayo se produjo uno de los atentados más graves del año, con el ataque a un hospital maternal atendido por la ONG Médicos sin Fronteras, en el que murieron 24 personas, entre ellas varias madres, algunas a punto de dar a luz.** En noviembre se produjo otro grave atentado en la Universidad de Kabul reivindicado por ISIS, en el que murieron 22 personas, gran parte estudiantes. El atentado se produjo coincidiendo con la visita a la universidad del embajador de Irán en el país y un día antes de las elecciones presidenciales estadounidenses. Días después, al menos 30 miembros de las fuerzas de seguridad murieron como consecuencia de la explosión de un coche bomba en la provincia de Ghazni. Poco después, las fuerzas de seguridad anunciaron que habían llevado a cabo una operación aérea contra los responsables del atentado en la que habían muerto siete personas, incluyendo el líder talibán y supuesto autor intelectual, Hamza Waziristani. El 22 de diciembre un atentado en Kabul causó la muerte de cinco personas, cuatro de las cuales eran doctores.

Deborah Lyons, la representante especial del secretario general de la ONU para Afganistán y jefa de la UNAMA, señaló en diciembre que a pesar de los importantes progresos en el proceso de paz, durante los meses de octubre y noviembre se había producido un importante aumento de la violencia, con un 60% más de víctimas civiles como consecuencia de artefactos explosivos improvisados, así como un incremento de víctimas infantiles de un 25% durante el tercer trimestre de 2020, con un grave aumento de ataques a centros escolares.

En paralelo al conflicto armado, se vivieron meses de crisis política tras las elecciones presidenciales celebradas en septiembre de 2019. La Comisión

62. Kate Clark, “Behind the Statistics: Drop in civilian casualties masks increased Taliban violence”, *Afghanistan Analysts Network*, 27 de octubre de 2020.

Electoral Independiente proclamó vencedor en febrero al presidente Ashraf Ghani con el 50,64% del voto, atribuyendo a Abdullah Abdullah, su principal rival, el 39,52%. El resultado fue rechazado por Abdullah y en marzo se produjeron dos ceremonias paralelas de toma de posesión, aunque Ghani recibió un respaldo internacional mayoritario. La crisis se resolvió finalmente en mayo, cuando Abdullah aceptó liderar las negociaciones de paz con los talibanes y designar la mitad de los ministros, asumiendo la presidencia Ghani.

India (Jammu y Cachemira)	
Inicio:	1989
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobiernos, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, Jaish-e-Muhammad, United Jihad Council, JKLF
Intensidad:	2
Evolución:	=

Síntesis:

El conflicto armado en el estado indio de Jammu y Cachemira tiene su origen en la disputa por la región de Cachemira que desde la independencia y partición de India y Pakistán ha opuesto a ambos Estados. En tres ocasiones (1947-1948; 1965; 1971) estos países se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos la soberanía sobre esta región, dividida entre India, Pakistán y China. El conflicto armado entre India y Pakistán en 1947 da lugar a la actual división y creación de una frontera de facto entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se trasladó al interior del estado de Jammu y Cachemira, donde una multitud de grupos insurgentes, favorables a la independencia total del estado o a la adhesión incondicional a Pakistán, se enfrentan a las fuerzas de seguridad indias. Desde el inicio del proceso de paz entre India y Pakistán en 2004, la violencia ha experimentado una reducción considerable, aunque los grupos armados se mantienen activos.

El conflicto armado en Jammu y Cachemira se mantuvo activo todo el año. De acuerdo con las cifras de fallecimientos vinculados a la violencia armada recopiladas por el South Asia Terrorism Portal, durante 2020 murieron 320 personas, lo que representó un ligero repunte con respecto a 2019, pero no se alcanzaron las cifras de mortalidad de años anteriores. Por otra parte, el centro de investigación ACLED señaló cifras de mortalidad superiores, con 455 muertes durante 2020. Por su parte, la Jammu and Kashmir Coalition of Civil Society señaló que durante los primeros seis meses de 2020 murieron 229 personas como consecuencia del conflicto, y denunciaron la ejecución extrajudicial de 32 civiles. Durante todo el año se registraron enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad indias y los grupos armados insurgentes, en paralelo a los impactos de la tensión con Pakistán en la zona fronteriza entre ambos países. Además, las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil denunciaron graves violaciones a los

derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, mediante la simulación de enfrentamientos armados con supuestos insurgentes, que en realidad eran civiles; detenciones arbitrarias de activistas sociales y políticos; e importantes restricciones al uso de internet en el estado. Con el cierre de centros educativos debido a la pandemia del coronavirus, las restricciones en el acceso a internet tuvieron un grave impacto, impidiendo el derecho a la educación de los menores del estado. Previamente a la pandemia los colegios habían permanecido cerrados durante siete meses tras la retirada de la autonomía. En relación a las detenciones denunciadas, entre ellas cabe destacar la de los antiguos ministros jefes del estado Omar Abdullah y Mehbooba Mufti, bajo la ley de seguridad pública, que permite la detención durante dos años sin cargos ni juicios.

Por otra parte, durante el año se registraron diversos episodios relacionados con el clima de violencia en la zona. En febrero, el grupo armado de oposición JKLF hizo un llamamiento a la huelga, que llevó al cierre total del valle de Cachemira y partes de Jammu. **En abril se aprobó una legislación flexibilizando las exigencias para el establecimiento de la residencia permanente en Jammu y Cachemira, lo que fue calificado por sectores cachemires y por el Gobierno de Pakistán de un intento de alterar la composición demográfica del estado.** En junio las fuerzas de seguridad indias escalaron las operaciones militares contra la insurgencia. Ocho integrantes de los grupos armados murieron en diferentes enfrentamientos armados en el marco de operaciones conjuntas de la Policía y las Fuerzas Armadas en un mismo día en las zonas de Shopian y Pampore. Al tiempo que se intensificó la violencia en el estado y los enfrentamientos armados, se denunció que las fuerzas de seguridad utilizaban a la población civil como escudo humano durante operaciones contra la insurgencia y en enfrentamientos con los grupos armados. Varios integrantes del partido gubernamental BJP murieron tiroteados en ataques perpetrados por grupos armados cachemires. En agosto, coincidiendo con el aniversario de la retirada de la autonomía y la condición de estado a Jammu y Cachemira, el Gobierno indio impuso el toque de queda y nombró como gobernador comandante al líder del BJP Manoj Sinha. Además, ordenó la retirada de 10.000 miembros de las fuerzas de seguridad por la mejora en la situación de seguridad del territorio. Los principales partidos cachemires emitieron una declaración conjunta en la que pedían la restauración del estatus de Jammu y Cachemira garantizado por la Constitución. En diciembre tuvieron lugar las primeras elecciones desde el fin de la autonomía en 2019 y su pérdida de estatus como estado, convirtiéndose en un Territorio de la Unión. Los comicios locales se celebraron en medio de acusaciones de falta de democracia y en ellos habría obtenido la mayoría de votos la coalición People's Alliance for Gupkar Declaration, que agrupaba a varios partidos cachemires bajo la demanda conjunta de restauración de la autonomía y condición de estado a Jammu y Cachemira.

India (CPI-M)	
Inicio:	1967
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, CPI-M (naxalitas)
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto armado que enfrenta al Gobierno indio con el grupo armado maoísta CPI-M (conocido como naxalita, en honor a la ciudad en la que se inició este movimiento) afecta a numerosos estados de la India. El CPI-M surge en Bengala Occidental a finales de los años sesenta con reclamaciones relativas a la erradicación del sistema de propiedad de la tierra, así como fuertes críticas al sistema de democracia parlamentaria, considerada como un legado colonial. Desde entonces, la actividad armada ha sido constante, y ha ido acompañada del establecimiento de sistemas paralelos de gobierno en aquellas zonas bajo su control, fundamentalmente rurales. Las operaciones militares contra este grupo, considerado como terrorista por el Gobierno indio, han sido constantes. En el año 2004 se inició un proceso de negociación que resultó fallido. Desde 2011 ha tenido lugar una reducción considerable de las hostilidades.

El conflicto armado con la insurgencia naxalita continuó activo durante el año, aunque el número de víctimas mortales como consecuencia de la violencia armada y los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la insurgencia experimentó un ligero descenso. De acuerdo con las cifras recopiladas por el South Asia Terrorism Portal un total de 239 personas murieron en el marco del conflicto, de las que 61 eran civiles, 44 miembros de las fuerzas de seguridad y 134 integrantes del grupo armado de oposición CPI-M, la cifra más baja de víctimas mortales en el conflicto desde 2015. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio del Interior, el Gobierno considera que 90 distritos de 11 estados están afectados por la presencia de la insurgencia naxalita, aunque durante la primera mitad de 2020 solo se registraron hechos de violencia en 46 de estos distritos, menos que los 61 constatados en 2019. El ministro de Interior señaló que entre 2015 y agosto de 2020, 350 integrantes de las fuerzas de seguridad, 963 civiles y 871 insurgentes habían muerto como consecuencia del conflicto armado. Además, desde este Ministerio también se destacaron las operaciones conjuntas que se habían llevado a cabo en la zona fronteriza entre los estados de Andhra Pradesh y Odisha, por parte de las fuerzas de seguridad de ambos estados de manera coordinada, que habían dado lugar a numerosas detenciones de insurgentes. **En marzo tuvo lugar el enfrentamiento más grave del año, en el que se señaló inicialmente que al menos 17 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron muertos en enfrentamientos con la insurgencia naxalita en Chhattisgarh y otros 14 resultaron heridos durante una operación en la que participaron 600 efectivos policiales, que fueron atacados por unos 200 insurgentes. Sin embargo, en septiembre la Policía actualizó la cifra de víctimas, señalando que habían muerto 23 insurgentes**

y 17 miembros de las fuerzas de seguridad. En agosto, cuatro integrantes del CPI-M murieron en el distrito de Sukma, estado de Chhattisgarh, en enfrentamientos con la Policía, durante una operación de las fuerzas de seguridad indias. Por otra parte, el CPI-M denunció que las fuerzas de seguridad seguían llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales, señalando que las muertes de varios insurgentes no se habían producido como consecuencia de enfrentamientos armados, sino que habían sido ejecutados. Según el grupo armado, dos de sus integrantes murieron de esta forma en diciembre en Odisha. El CPI-M denunció también que las fuerzas de seguridad están estableciendo campamentos en zonas tribales, con consecuencias muy negativas para la población adivasi. En cuanto a los impactos de género del conflicto armado, cabe destacar la detención del activista VS Krishna, activo en la búsqueda de justicia para 11 mujeres adivasi víctimas de violencia sexual por parte de la policía en Andhra Pradesh en 2007, que debía participar en el juicio por estos hechos. El activista fue acusado de haber forzado a las supervivientes a prestar falso testimonio contra la Policía y su arresto impediría su participación en el juicio.

Pakistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, milicias talibán, insurgentes extranjeros, EEUU
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto armado que afecta al país surge a raíz de la intervención en 2001 en Afganistán. Inicialmente, el conflicto tuvo como escenario principal la zona que comprende las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA) y la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (anteriormente denominada Provincia Fronteriza del Noroeste). Tras la caída del régimen talibán en Afganistán, miembros de este Gobierno y sus milicias, así como varios grupos de insurgentes de distintas nacionalidades, entre ellos al-Qaeda, encontraron refugio en Pakistán, fundamentalmente en varias agencias tribales, aunque el liderazgo se distribuyó por varios núcleos urbanos (Quetta, Lahore o Karachi). Si bien en un inicio, Pakistán colaboró con EEUU en la búsqueda de insurgentes extranjeros (chechenos, uzbekos) y de al-Qaeda, Pakistán no mantuvo la misma colaboración con el liderazgo talibán. El descontento de varios de los grupos de origen pakistaní que formaban parte de la insurgencia talibán, dio lugar a la formación en diciembre de 2007 del movimiento talibán pakistaní (Tehrik-e Taliban Pakistan, TTP) que comenzó a cometer atentados en el resto del territorio pakistaní, tanto contra instituciones estatales como contra la población civil. Con el aumento de la violencia a niveles desconocidos hasta entonces, y con una serie de ataques especialmente contra las minorías chií, ahmadí y cristiana, y en menor medida contra sufíes y barelvíes, la opinión pública se posicionó a favor de acabar con los santuarios terroristas. En junio de 2014, el Ejército lanzó la operación Zarb-e Azb para eliminar la insurgencia en las agencias del Waziristán Norte y Sur.

El conflicto armado en Pakistán siguió activo durante todo el año, pero se consolidó la tendencia de reducción de la violencia que nuevamente presentó unos niveles de intensidad menores que los registrados el año anterior.

Según las cifras de mortalidad asociadas a la violencia recopiladas por el Center for Research and Security Studies de Pakistán, durante el año se registraron 600 muertes en el conjunto del país, frente a las 679 de 2019 y 754 de 2018. No obstante, de acuerdo con las cifras registradas por el South Asia Terrorism Portal, se observó un ligero repunte con respecto a las cifras recopiladas por este mismo centro el año anterior, con 506 víctimas mortales. **La provincia de Khyber Pakhtunkwa resultó la más afectada por la violencia como consecuencia de las operaciones de seguridad contra la insurgencia talibán pakistaní, los enfrentamientos armados y los atentados que causaron múltiples víctimas mortales.** También se produjeron ataques contra trabajadores sanitarios que administran la vacuna de la polio, a lo que se oponen los talibanes. Varias operaciones de las fuerzas de seguridad en enero y en febrero en contra de la insurgencia talibán en los distritos de Dera Ismail Khan y Bajaur, así como en las inmediaciones de Peshawar, en Khyber Pakhtunkwa, causaron la muerte de varios combatientes talibanes. En marzo, siete insurgentes y cuatro soldados murieron en enfrentamientos armados en el distrito de Waziristán Norte, según fuentes oficiales. A finales de abril se produjo otro episodio similar en el que nueve insurgentes y dos soldados murieron en enfrentamientos armados en el mismo distrito, el más afectado por la violencia de la provincia. En julio, un atentado con explosivos en una zona comercial en Parachinar, en el distrito de Kurram, dejó 20 personas heridas, incluyendo un menor de edad. Otro atentado de enorme gravedad tuvo lugar en octubre en la ciudad de Peshawar en el que una explosión en un seminario religioso causó la muerte de al menos ocho personas e hirió a otras 136. Gran parte de las personas congregadas eran estudiantes procedentes de Khyber Pakhtunkwa y Baluchistán que atendían una conferencia del clérigo afgano Rahimullah Haqqani, supuesto objetivo del atentado. Días antes, seis miembros de las Fuerzas Armadas habían muerto en el distrito de Waziristán Norte como consecuencia de una explosión al paso del convoy militar en el que se desplazaban. En noviembre y diciembre se llevaron a cabo varios ataques contra ancianos líderes tribales en los distritos de Bajaur y Waziristán Norte, causando la muerte de al menos cinco. Este tipo de ataques se repiten como consecuencia de los diferentes acuerdos alcanzados con las autoridades pakistaníes para impedir la acción talibán. En cuanto a los impactos de género del conflicto, cabe señalar que la organización TransAction Alliance Khyber Pakhtunkwa denunció el asesinato a tiros de la activista trans Gul Panra en Peshawar, señalando que en los últimos cinco años 1.500 personas trans han sido víctimas de violencia sexual y 68 han sido asesinadas. Human Rights Watch denunció que en 2018 se produjeron 479 ataques contra mujeres trans. Además, continuaron las amenazas contra las mujeres y niñas por acceder a la educación formal por parte de la insurgencia talibán.

Pakistán (Baluchistán)

Inicio:	2005
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, BLA, BRP, BRA, BLF y BLT, Baloch Raji Aojoi Sangar, LeJ, TTP, talibanes afganos (shura de Quetta), ISIS
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

Desde la creación del Estado de Pakistán en 1947, Baluchistán, la provincia más rica en recursos naturales, pero con algunas de las tasas de pobreza más elevadas del país, ha vivido cuatro periodos de violencia armada (1948, 1958, 1963-69 y 1973-77) en los que la insurgencia ha explicitado su objetivo de obtener una mayor autonomía e incluso la independencia. En el año 2005 la insurgencia armada reaparece en escena, atacando fundamentalmente infraestructuras vinculadas a la extracción de gas. El grupo armado de oposición BLA se convierte en la principal fuerza opositora a la presencia del Gobierno central, al que acusan de aprovechar la riqueza de la provincia sin que ésta revierta en la población local. Como consecuencia del resurgimiento de la oposición armada, una operación militar fue iniciada en 2005 en la provincia, provocando desplazamientos de la población civil y enfrentamientos armados. De forma paralela, se desarrolla un movimiento de la población civil que pide el esclarecimiento de la desaparición de centenares, sino miles, de baluchíes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

El conflicto armado en Baluchistán continuó activo todo el año, pero se registró un notable descenso de la violencia armada y de las víctimas mortales asociadas a esta. De acuerdo con las cifras recopiladas por el Center for Research and Security Studies de Pakistán durante el año se registraron 138 muertes en la provincia y según el South Asia Terrorism Portal, los fallecimientos fueron 215. **No obstante, los grupos armados nacionalistas baluchis y otras organizaciones armadas como los talibanes e ISIS, continuaron activas y llevaron a cabo diferentes acciones violentas y se enfrentaron con las fuerzas de seguridad pakistaníes. También se produjeron atentados contra infraestructuras.** En enero un atentado suicida reivindicado por ISIS contra una mezquita en Quetta, durante los rezos del viernes, causó la muerte de al menos 15 personas e hirió a otras 20. Las fuerzas de seguridad señalaron que la mezquita estaba dirigida por los talibanes afganos. En los días previos a este atentado, dos personas habían muerto y otras cuatro resultaron heridas como consecuencia de un ataque en un mercado perpetrado por una facción disidente del TTP denominada Hizbul Ahrar. En febrero se produjo otro atentado de gravedad, cuando una explosión en las inmediaciones del club de prensa de Quetta causó la muerte a diez personas e hirió a otras 35. El atentado tenía como objetivo a integrantes de la organización ilegalizada y anti shií Ahlesunnat Wal Jamat, y podría haber sido perpetrado por ISIS. Días después, el grupo armado baluchi BLT reivindicó un ataque contra las fuerzas de seguridad en Singasila, distrito de Dera

Bugti, en el que habrían muerto 16 miembros de las fuerzas de seguridad pakistaníes. En julio, un ataque de BRAS (alianza de cuatro grupos armados baluchis, BLF, BLA, BRA y BRG) en el distrito de Kech, causó la muerte de cinco soldados. Días después otros cuatro soldados murieron como consecuencia de un ataque del grupo BLF en el distrito de Awaran. Este mismo grupo reivindicó haber causado la muerte de 190 miembros de las fuerzas de seguridad pakistaníes en una serie de atentados y ataques armados durante los nueve primeros meses del año, aunque las cifras no pudieron ser corroboradas de forma independiente. En septiembre, la destacada periodista y defensora de los derechos de las mujeres Shaheena Shaheen Baloch, murió tiroteada en el distrito de Kech. Aunque inicialmente se acusó al grupo armado BLA de estar detrás del asesinato, investigaciones posteriores apuntaron a que se trataba de un caso de violencia de género, dando visibilidad al importante impacto contra las mujeres en esta provincia de los conocidos como “crímenes de honor”. Otro ataque de BRAS en octubre causó la muerte de siete miembros de las fuerzas de seguridad y siete guardias de seguridad privados en un atentado contra un convoy de la Oil and Gas Development Company en el distrito de Gwadar. Por otra parte, organizaciones de derechos humanos continuaron denunciando las continuas desapariciones a manos de las fuerzas de seguridad pakistaníes, especialmente de jóvenes activistas sociales y estudiantes.

Sudeste Asiático y Oceanía

Filipinas (NPA)	
Inicio:	1969
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, NPA
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

El NPA, brazo armado del Partido Comunista de Filipinas, inicia la lucha armada en 1969 y alcanza su cenit en los años ochenta bajo la dictadura de Ferdinand Marcos. A pesar de que las purgas internas, la democratización del país y los ofrecimientos de amnistía debilitaron el apoyo y la legitimidad del NPA a principios de los años noventa, actualmente se estima que está operativo en la mayor parte de las provincias del país. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE erosionó enormemente la confianza entre las partes y en buena medida provocó la interrupción de las conversaciones de paz con el Gobierno de Gloria Macapagal Arroyo. El NPA, cuyo principal objetivo es el acceso al poder y la transformación del sistema político y el modelo socioeconómico, tiene como referentes políticos al Partido Comunista de Filipinas y al National Democratic Front (NDF), que agrupa a varias organizaciones de inspiración comunista. El NDF mantiene negociaciones de paz con el Gobierno desde principios de los años noventa.

Aunque las Fuerzas Armadas no ofrecieron datos de mortalidad asociados al conflicto armado entre el Gobierno y el NPA, **los niveles de violencia fueron parecidos a los del año anterior**. Sin embargo, la dinámica del conflicto discurrió en paralelo a un claro deterioro de la confianza entre el Gobierno de Duterte y el NDF y a la completa parálisis del proceso de paz, especialmente a partir del mes de mayo. Así las cosas, a finales de año el propio Duterte dijo que bajo su mandato no se reanudarían las negociaciones con el NDF y no se produciría ningún otro alto el fuego con el NPA, incluyendo el que tradicionalmente decretan ambas partes con motivos de las fiestas de Navidad. Por su parte, el NDF también dio por cerrada cualquier opción de diálogo con el Gobierno actual y planteó su intención de entablar conversaciones con la oposición para discutir acerca de la posible reanudación de las negociaciones en un escenario post-Duterte. En tales circunstancias, tanto el Gobierno como las Fuerzas Armadas declararon que la estrategia contrainsurgente del Estado pasaba por una intensificación de las operaciones militares contra el NPA y por un incremento de las llamadas negociaciones de paz locales directas con combatientes del NPA y con comunidades afectadas por la violencia. Al amparo de la Orden Ejecutiva nº70 y de la implementación de la llamada Whole-of-Nation Approach, el Grupo de Trabajo Nacional para Finalizar los Conflictos Armados Comunistas Locales (un organismo conformado por varias agencias del Estado) ha llevado a cabo cientos de diálogos directos con combatientes del NPA en las provincias en las que opera el grupo (más de 30, según el propio NPA). Según el Gobierno, este tipo de negociaciones directas con los combatientes parten de la idea de que existe una desconexión creciente entre los combatientes del NPA y la cúpula del movimiento comunista (principalmente con el panel negociador del NDF, residente en Holanda desde hace décadas). Según manifestó el propio Duterte, estas conversaciones locales, que incluyen también a los gobiernos locales y contemplan las demandas de las comunidades en zonas de conflicto, está comportando que un alto número de combatientes se entreguen y decidan entrar en un proceso de desarme y reintegración en la sociedad civil. **Las Fuerzas Armadas consideran que al actual ritmo de rendiciones y deserciones en el seno del NPA, este será un grupo irrelevante en un futuro cercano**. Por su parte, el NDF criticó estas negociaciones directas a escala local por considerar que son una estrategia contrainsurgente que buscan más desmovilizar a la insurgencia que no resolver el conflicto armado y abordar sus causas estructurales. Según el NDF, esta estrategia de ofrecer vivienda y trabajo a los combatientes se ha practicado desde la época del dictador Ferdinand Marcos, sin lograr desarticular ni erosionar al movimiento comunista.

En cuanto a las dinámicas del conflicto armado, cabe destacar que la tregua unilateral que tanto el Gobierno como el NPA habían decretado a finales de 2019 con motivo de las fiestas navideñas, y que finalizó el

7 de enero, abrió la puerta a la reanudación de las negociaciones de paz a finales de ese mismo mes con la facilitación del Gobierno de Noruega, pero finalmente no se celebró ninguna nueva ronda de negociación. **Poco después de la expansión de la pandemia provocada por la COVID-19 en el mes de marzo, tanto el Gobierno como el NDF decretaron unilateralmente la suspensión de las acciones ofensivas** (el Gobierno entre el 19 de marzo y el 15 de abril, argumentando la necesidad de concentrar los esfuerzos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la contención del coronavirus; y el NDF entre el 26 de marzo y el 15 de abril, en respuesta al llamamiento a un alto el fuego global por parte del secretario general de la ONU, António Guterres). El 15 de abril el NDF prolongó el alto el fuego hasta el 30 de abril, pero el Gobierno decidió no hacerlo alegando numerosas violaciones del alto el fuego por parte del NPA (según Manila, 26 soldados murieron entre el 15 de marzo y el 23 de abril en los 36 ataques que llevó a cabo el NPA en 23 provincias). Del mismo modo, el Partido Comunista de Filipinas declaró que en los 36 días que duró su alto el fuego fallecieron 18 combatientes del NPA y 31 soldados. Tras la finalización del cese de hostilidades, el Gobierno anunció su intención de incrementar sus operaciones de contrainsurgencia contra el NPA, amenazó con imponer la ley marcial si el NPA seguía obstaculizando el envío de ayuda de emergencia y persistiendo en sus ataques a militares en tareas de humanitarias y declaró públicamente que no volvería a reunirse con el NDF. A raíz de la intensificación de la violencia, en los diez primeros días de mayo, 17 combatientes del NPA fallecieron en enfrentamientos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mientras que como mínimo otros 26 combatientes murieron entre el 13 y el 19 de mayo por enfrentamientos en las provincias de Agusan del Norte y Surigao del Sur. Los niveles de violencia durante los siguientes meses hasta finalizar el año fueron relativamente estables. Cabe destacar que en el mes de octubre el PCF ordenó al NPA incrementar sus ataques contra empresas chinas involucradas en proyectos de infraestructuras, a las que acusa de contaminar el medio ambiente y dañar los territorios ancestrales de varias minorías nacionales del país; de provocar la militarización de las regiones en las que operan, incluyendo las habitadas históricamente por los pueblos indígenas (Lumad); o incluso de erosionar los recursos marinos del Mar de Filipinas Oriental (o de la China Meridional), en violación de la soberanía de Filipinas. En el mes de diciembre, después de que las Fuerzas Armadas recomendaran a Duterte no decretar el tradicional alto el fuego por fechas navideñas, el presidente declaró que bajo su mandato no volvería a haber ningún otro cese de las hostilidades.

Aún si Duterte manifestó su intención de debilitar al NPA a través de la incentivación de rendiciones y deserciones, durante el año también reconoció que el terrorismo sigue siendo la principal amenaza del país,

identificando al NPA como el actor con mayor capacidad de desestabilizar el país (por encima del grupo armado de oposición Abu Sayyaf). Según datos hechos públicos por el Gobierno en julio, **el número de militares fallecidos en enfrentamientos con el (o ataques del) NPA desde 1975 hasta mediados de 2020 era de más de 13.300, una cifra más de cuatro veces superior a la de las bajas militares infringidas por el MNLF y el MILF**. Algunos medios de comunicación estimaron que el número de personas que podrían haber fallecido en el marco del conflicto armado era de alrededor de 53.000 personas.

Filipinas (Mindanao)	
Inicio:	1991
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/ Grupo Maute, Ansar Khilafa, Grupo Toraife, facciones del MILF y el MNLF
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

La actual situación de violencia en Mindanao, en la que varios grupos armados se enfrentan al Gobierno y en ocasiones entre sí, está estrechamente vinculada al conflicto armado de larga duración entre Manila y el MNLF y posteriormente el MILF, organizaciones luchaban por la autodeterminación del pueblo moro. La falta de implementación del acuerdo de paz de 1996 con el MNLF hizo que algunas facciones del grupo no estén plenamente desmovilizadas y participen esporádicamente de episodios de violencia, mientras que las dificultades surgidas en el proceso de negociación del MILF con el Gobierno propiciaron la emergencia del BIFF, una facción del grupo opuesta a dicho proceso fundada en 2010 por el ex comandante del MILF Ameril Umbra Kato. Por otra parte, el grupo Abu Sayyaf lucha desde principios de los años noventa para establecer un Estado islámico independiente en el archipiélago de Sulu y las regiones occidentales de Mindanao (sur). Si bien inicialmente reclutó a miembros desafectos de otros grupos armados como el MILF o el MNLF, posteriormente se fue alejando ideológicamente de ambas organizaciones e incurriendo de forma cada vez más sistemática en la práctica del secuestro, la extorsión y los atentados con bomba, lo que le valió su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE. Finalmente, cabe destacar que la irrupción de ISIS en la escena internacional provocó el surgimiento de numerosos grupos en Mindanao que juraron lealtad y obediencia al grupo. En 2016, ISIS reivindicó por primera vez un ataque de envergadura en Mindanao y anunció su intención de fortalecer su estructura e incrementar sus ataques en la región.

En paralelo a los avances en la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno y el MILF y el despliegue institucional de la Región Autónoma Bangsamoro en el Mindanao Musulmán (RABMM), los niveles de violencia en determinadas regiones de Mindanao experimentaron una cierta reducción respecto de años anteriores. **En 2020, como en años precedentes, se registraron enfrentamientos entre las Fuerzas**

Armadas y varios grupos que operan en Mindanao y que han jurado lealtad a ISIS (como Abu Sayyaf, el Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, el Grupo Maute o Ansar Khilafa), pero también se produjeron episodios de violencia comunitarios y clánicos (conocidos localmente como rido), principalmente por cuestiones de tierras; así como escaramuzas entre facciones del MILF (que se halla en pleno proceso de desmovilización y reintegración), entre facciones del MNLF, o entre estos grupos y milicias locales. Aunque los enfrentamientos comunitarios o los protagonizados por facciones del MILF o el MNLF provocaron decenas de víctimas mortales, la mayor parte de los episodios de violencia que se registraron en el sur del país se produjeron en el marco de operaciones de contrainsurgencia contra grupos armados cercanos a ISIS, en las que las Fuerzas Armadas utilizaron ataques aéreos de manera recurrente. En octubre, las Fuerzas Armadas declararon que entre enero y septiembre más de 100 combatientes de los grupos vinculados a ISIS habían muerto, 227 se habían rendido y una treintena habían sido arrestados. La mayor parte de las víctimas mortales pertenecían a Abu Sayyaf (55), mientras que el resto eran del BIFF (28) o el Grupo Maute (24).

En febrero, un portavoz de las Fuerzas Armadas declaró que estaban en disposición de derrotar militarmente para finales de marzo a Abu Sayyaf, en los últimos años el principal grupo armado en Mindanao. Sin embargo, las dinámicas del conflicto en los meses posteriores parecieron desmentir esta afirmación. De hecho, **el Departamento de Defensa de EEUU publicó un informe en agosto en el que señalaba que a pesar del apoyo ininterrumpido de Washington a las Fuerzas Armadas y la Policía de Filipinas, del incremento de las operaciones contrainsurgentes de Manila y de la declaración de la ley marcial en Mindanao entre mayo de 2017 y 31 de diciembre de 2019, tanto la capacidad operativa y bélica de los grupos armados en el sur del país como su capacidad de reclutamiento se habían mantenido relativamente inalteradas desde el fin del asedio a la ciudad de Marawi a finales de 2017.** Cabe recordar que en tal asedio, en el que la ciudad quedó prácticamente destruida tras cinco meses de enfrentamientos de alta intensidad y un 98% de su población tuvo que desplazarse forzosamente, buena parte de la estructura de los grupos armados que participaron en ella quedó seriamente diezmada y la mayor parte de sus líderes murieron. El Gobierno declaró que esperaba que la reconstrucción de dicha ciudad hubiera finalizado en 2021 o durante el primer trimestre de 2022, pero a finales de año todavía había unas 127.000 personas que no habían podido regresar a sus hogares. Según algunos analistas, esta circunstancia confiere a varios grupos armados (en especial el Grupo Maute) una gran capacidad de reclutamiento.

En cuanto a Abu Sayyaf, el grupo protagonizó algunos de los principales episodios de violencia durante el

año. Cabe destacar, por ejemplo, un ataque en Patikul (provincia de Sulu) a mediados de abril en el que 11 soldados murieron y otros 14 resultaron heridos, o el atentado en la ciudad de Jolo a finales de agosto en el que dos personas se inmolaron con artefactos explosivos que estallaron de manera consecutiva, provocando que 15 personas murieran y que otras 74 resultaran heridas. Según el Gobierno, este atentado se produjo en represalia por la muerte en una batalla en julio de Hatib Hajan Sawadjaan, líder de una de las facciones más activas de Abu Sayyaf. Según algunas fuentes, Sawadjaan tomó el control del grupo tras la muerte en 2017 de Isnilon Hapilon, reconocido como el emir de ISIS en el sur de Filipinas. Según algunas fuentes, Sawadjaan era considerado como el líder de facto de ISIS en Mindanao, y habría impulsado nuevas formas de acción como los llamados atentados suicidas, una práctica que no se había utilizado en Mindanao desde el inicio del conflicto en los años setenta. Poco después del atentado en Jolo, el Gobierno declaró que desde la consolidación de ISIS en la región, y muy especialmente desde el mencionado asedio a la ciudad de Marawi, se han registrado cinco atentados de este tipo, el de mayor envergadura en enero de 2019 (23 personas murieron y 109 resultaron heridas tras el estallido de dos artefactos en la catedral de Jolo), orquestado precisamente por Sawadjaan. Tras la muerte de Sawadjaan, se estima que la facción que comandaba en Sulu (también conocida como Ajang-Ajang, y que opera en Sulu, Tawi-Tawi e incluso en el estado malasio de Sabah) pasó a ser liderada por su sobrino, Mudzimar “Mundi” Sawadjaan (varios de sus familiares perdieron la vida en combate durante el año). Siendo Abu Sayyaf un grupo poco jerárquico en los últimos años y con una organización interna muy determinada por el carácter insular de la zona en la que opera, las otras dos facciones de grupo están lideradas por Furuji Indama en Basilan y por Radullan Sahiron en Sulu. Las facciones de Sawadjaan y Indama declararon su lealtad a ISIS, mientras que las de Sahiron (que combatió con el fundador del grupo Abdurajak Janjalani y recibió el liderazgo de Abu Sayyaf de Khadaffi Janjalani tras su muerte en 2006) prefirió mantenerse distanciado de la creciente articulación de grupos armados en Mindanao impulsada por ISIS.

Durante el año el Gobierno declaró que el grupo estaba siendo seriamente diezmado por las operaciones de contrainsurgencia, la neutralización de algunos de sus líderes (como el propio Sawadjaan o Abduljihad Susukan en Davao a mediados de agosto) y las rendiciones de sus combatientes (solamente en el mes de octubre el Gobierno declaró que un centenar de miembros de Abu Sayyaf entraron en programa de desmovilización y reintegración), pero a la vez reconoció que sigue siendo una de las principales amenazas a la seguridad nacional. Según Manila, 83 personas han muerto (20 soldados y 63 civiles) y más de 500 (70 policías o militares y 435 civiles) han resultado heridas desde el año 2009 en los 47 atentados con

artefactos explosivos perpetrados por Abu Sayyaf en las provincias de Sulu, Basilan y Zamboanga. Del mismo modo, el Gobierno destacó el incremento de las actividades de piratería del grupo en el mar de Sulu y en las aguas cercanas al estado malasio de Sabah. Si bien el grupo ha centrado sus actividades en el secuestro (solamente entre 2016 y 2019 ha secuestrado a 39 personas de nacionalidad indonesia) y en el ataque a pequeñas embarcaciones, en ocasiones también ha llevado a cabo ataques contra mercantes de mayores dimensiones que navegaban entre China y Australia. En este sentido, ante el incremento de este tipo de actividades durante el año, los Gobiernos de Malasia, Indonesia y Filipinas reiteraron su intención de reforzar la cooperación antiterrorista en la región. Además, el Gobierno también destacó la capacidad del grupo para reclutar a combatientes extranjeros. Así, varios analistas señalaron que buena parte de los atentados suicidas de los últimos años fueron llevados a cabo por personas de nacionalidad extranjera (Egipto, Indonesia o Marruecos). En el asedio a la ciudad de Marawi murieron 39 combatientes de nacionalidad no filipina, y en 2018 el Gobierno identificó a alrededor de 100 combatientes extranjeros en la región, la mayoría de Indonesia y Malasia, pero también de países árabes, de Europa y de la región china de Xinjiang.

Además de los combates entre las Fuerzas Armadas y Abu Sayyaf en el archipiélago de Sulu y en la península de Zamboanga, otros grupos también estuvieron muy activos en otras regiones de Mindanao. En la región de Maguindanao y Cotobato Norte, la facción del BIFF conocida como Grupo Toraife (liderada por Esmael Abdulmalik, alias Comandante Toraife) protagonizó algunos episodios de violencia significativos durante el año (en marzo, por ejemplo, 14 combatientes del grupo y cuatro soldados murieron en un choque en Maguindanao), pero las otras dos facciones del grupo (lideradas respectivamente por Imam Minimbang, alias Comandante Karialan y por Esmael Abubakar, alias comandante Bungos) también llevaron a cabo varias acciones armadas en la región. En la provincia de Lanao del Sur, y especialmente en la ciudad de Marawi, el conocido como Grupo Maute también protagonizó varios episodios de violencia y, según el Gobierno, siguió reclutando a combatientes entre las decenas de miles de personas todavía desplazadas por la batalla de Marawi de 2017. Tras la muerte de los hermanos Maute y de su sucesor, Abu Dar, actualmente el grupo está dirigido por Ker Mimbantas (alias Comandante Zacarías). Finalmente, cabe destacar que en las regiones de Cotobato Sur, Sarangani o General Santos, la insurgencia más activa fue Ansar Khilafa, a pesar de que un operativo militar en septiembre provocó la muerte de su líder Jeffrey Nilong (alias comandante Momoy), mientras que las zonas centrales de Mindanao el grupo armado liderado por Salahuddin Hassan (que fue de los primeros en jurar lealtad al nuevo califa de ISIS, Al-Qurashi) también se mostró operativo.

Myanmar	
Inicio:	1948
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados (Firmantes del alto el fuego: ABSDF, ALP, CNF, DKBA, KNU, KNU/KNLA-PC, PNLO, RCSS, NMSP, LDU; No firmantes del alto el fuego: KIA, NDAA, MNDAA, SSPP/SSA, TNLA, AA, UWSA, ARSA, KNPP)
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

Desde 1948 decenas de grupos armados insurgentes de origen étnico se han enfrentado al Gobierno de Myanmar reclamando un reconocimiento a sus particularidades étnicas y culturales y demandando reformas en la estructuración territorial del Estado o la independencia. Desde el inicio de la dictadura militar en 1962 las Fuerzas Armadas han combatido a grupos armados en los estados étnicos, combinándose las demandas de autodeterminación de las minorías, con las peticiones de democratización compartidas con la oposición política. En 1988 el Gobierno inició un proceso de acuerdos de alto el fuego con parte de los grupos insurgentes, permitiéndoles proseguir con su actividad económica (tráfico de drogas y piedras preciosas básicamente). No obstante, las operaciones militares han sido constantes en estas décadas, y han estado especialmente dirigidas contra la población civil, con el objetivo de acabar con las bases de los grupos armados, provocando el desplazamiento de centenares de miles de personas. En 2011 el Gobierno inició acercamientos a la insurgencia y desde entonces se han logrado acuerdos de alto el fuego con la práctica totalidad de los grupos armados

El conflicto armado continuó activo durante todo el año y, como sucedió durante 2019, mantuvo su epicentro en el estado de Rakhine, con enfrentamientos constantes entre las fuerzas de seguridad gubernamentales y el grupo armado de oposición Arakan Army (AA). De acuerdo con las cifras recopiladas por ACLED, durante 2020 murieron 646 personas como consecuencia de los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y los diferentes grupos armados de oposición que operan en el país. La mayor parte de los enfrentamientos y actos violentos que derivaron en muertes tuvieron lugar en el estado de Rakhine, que registró la violencia de mayor intensidad. También se produjeron episodios de violencia en los estados Chin, Shan y Kachin. El Gobierno chino negó estar proporcionando armamento a los grupos armados que operan en la zona fronteriza entre ambos países, ante las acusaciones de que estaba armando a grupos insurgentes para incrementar su capacidad de presión en el país. Uno de los episodios más graves tuvo lugar en febrero, cuando un ataque contra una escuela en el estado de Rakhine hirió a 21 estudiantes. En marzo, 21 personas resultaron muertas y más de 20 heridas como consecuencia de los ataques aéreos de las Fuerzas Armadas en el estado Chin, que trataban de evitar la toma por parte del AA de una base militar. Miles de personas se desplazaron

como consecuencia de la violencia que tuvo un impacto especialmente grave en la población civil. Además, el Gobierno declaró al AA organización terrorista. En mayo el Gobierno decretó un alto el fuego unilateral que debía prorrogarse hasta el mes de agosto (en respuesta al llamamiento efectuado por el secretario general de la ONU de decretar altos el fuego en todo el mundo durante el transcurso de la pandemia por COVID-19) pero que excluía las áreas que servían de base a organizaciones terroristas y por tanto dejaba fuera las zonas afectadas por el conflicto armado con el AA. En julio Naciones Unidas, cuatro misiones diplomáticas en el país y 21 organizaciones humanitarias internacionales (entre ellas Oxfam, Norwegian Refugee Council o Save the Children) hicieron un llamamiento a un alto el fuego en el estado de Rakhine, para poner fin a la escalada de la violencia en el norte del estado y proteger a la población civil. Entre agosto y octubre se produjo el desplazamiento forzado de más de 36.000 personas, según denunció la organización Rakhine Ethnic Congress, y en octubre tuvieron lugar operaciones militares conjuntas aéreas, terrestres y marítimas de las Fuerzas Armadas contra el AA. Además de los enfrentamientos con el grupo armado AA también se registraron choques con el ARSA. En junio dos integrantes de este grupo murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la frontera con Bangladesh. En el estado Shan, se repitieron los enfrentamientos entre el Ejército de Myanmar y el grupo armado de oposición RCSS. En julio la población civil denunció que se estaban produciendo muertes de civiles como consecuencia de las operaciones militares contra el RCSS, lo que había llevado a centenares de personas a desplazarse de manera forzada huyendo de la violencia. También se produjeron enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el SSA-N, forzando el desplazamiento de más de 200 personas.

En noviembre el partido de Aung San Suu Kyi, NLD, ganó las elecciones generales del país obteniendo una mayoría parlamentaria suficiente para formar gobierno. Observadores internacionales como el Carter Center certificaron que las elecciones se habían celebrado de forma libre y transparente en términos generales, aunque estuvieron precedidas de un clima de violencia que llevó a su cancelación en gran parte del estado Rakhine, así como en zonas de los estados Shan y Kachin que habían sido escenario de violencia en las semanas previas. En octubre los enfrentamientos armados entre el AA y las fuerzas de seguridad se habían intensificado ocasionando decenas de víctimas, según International Crisis Group. Tras las elecciones y la publicación de los resultados, aunque el AA se mostró favorable a que las elecciones pudieran tener lugar en el estado de Rakhine durante el mes de diciembre y se anunció un alto el fuego informal para facilitarlos, finalmente no se celebraron.

En lo que respecta a los impactos de género del conflicto armado, la denuncia de una mujer en el estado Rakhine por violencia sexual contra tres soldados, puso de nuevo sobre la mesa la utilización de la violencia sexual en el conflicto, denunciada y reconocida por

múltiples organizaciones de derechos humanos. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos señaló que la impunidad por la violencia sexual y de género continuaba siendo generalizada.

Tailandia (sur)	
Inicio:	2004
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno
Actores:	Gobierno, BRN y otros grupos armados de oposición secesionistas
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Síntesis:	El conflicto en el sur de Tailandia se remonta a principios del siglo XX, cuando el entonces Reino de Siam y la potencia colonial británica en la península de Malasia decidieron partir el Sultanato de Patani, quedando algunos territorios bajo soberanía de la actual Malasia y otros (las provincias meridionales de Songkhla, Yala, Pattani y Narathiwat) bajo soberanía tailandesa. Durante todo el siglo XX ha habido grupos que han luchado para resistir las políticas de homogeneización política, cultural y religiosa impulsadas por Bangkok o bien para exigir la independencia de dichas provincias, de mayoría malayo-musulmana. El conflicto alcanzó su momento álgido en los años sesenta y setenta y remitió en las siguientes décadas gracias a la democratización del país. Sin embargo, la llegada al poder de Thaksin Shinawatra en 2001 implicó un drástico giro en la política contrainsurgente y antecedió el estallido del conflicto armado que vive la región desde 2004. La población civil, tanto budista como musulmana, es la principal víctima de la violencia, normalmente no reivindicada por ningún grupo.

Los niveles de violencia en el sur del país se redujeron sustancialmente respecto de los años anteriores y alcanzaron un mínimo histórico en las últimas décadas. Según fuentes del centro de investigación Deep South Watch, en 2020 110 personas murieron y otras 160 resultaron heridas en las provincias sureñas de Yala, Pattani, Narathiwat y Songkhla. Estas cifras de mortalidad suponen un claro descenso respecto de las 180 víctimas mortales registradas en el año 2019 y en los años anteriores (218 en 2018, 235 en 2017, 307 en 2016, 246 en 2015, 341 en 2014, mientras que en los cuatro años anteriores las víctimas mortales siempre fueron superiores a 450). Según algunos analistas, este descenso de la mortalidad asociada al conflicto responde principalmente a los efectos de la pandemia provocada por la COVID-19 y, muy especialmente, a la decisión del BRN, el grupo armado con mayor implantación territorial y capacidad bélica, de iniciar conversaciones de paz directas con el Gobierno a partir del mes de enero. En varias ocasiones durante el año, el Gobierno insistió en la necesidad de que se redujeran los niveles de violencia para crear una atmósfera propicia para abordar los aspectos sustantivos de la negociación entre ambas partes. En esta línea, cabe destacar que **el 3 de abril el BRN declaró un cese de todas sus acciones armadas ofensivas citando motivos humanitarios y enfatizando la necesidad de priorizar la contención de**

la pandemia COVID-19. El comunicado del BRN se produjo el mismo día que el secretario general de la ONU, António Guterres, hiciera un nuevo llamamiento a todas las partes en conflicto en el mundo a decretar un alto el fuego. Sin embargo, el propio comunicado emitido por el BRN señalaba que el cese de hostilidades era vigente siempre y cuando no se produjeran acciones armadas en su contra por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Poco después de que se hiciera público el comunicado del BRN, las Fuerzas Armadas anunciaron su intención de proseguir con sus actuaciones para preservar la legalidad y la estabilidad en el sur del país. Durante el mes de abril se produjo una reducción sustancial de las hostilidades bélicas entre las partes, aunque a finales de mes se volvió a incrementar la tensión entre el Gobierno y el BRN después de que las Fuerzas Armadas mataran a tres presuntos insurgentes acusados de estar organizando atentados durante el Ramadán. Dos días más tarde, dos soldados fueron asesinados en el distrito de Nong Chik (provincia de Pattani), episodio que fue considerado un acto de venganza por parte de las Fuerzas Armadas y que según algunos medios de comunicación simbolizó el fin de la tregua por parte del BRN. Según algunos medios de comunicación, algunas organizaciones de la sociedad civil como The Patani o la Asociación Médica Islámica, fueron clave en la decisión del BRN de decretar un cese de hostilidades por razones humanitarias. El jefe del panel negociador del Gobierno, Wanlop Rugsanaoh, valoró positivamente el alto el fuego del BRN, aunque también indicó que la reducción de la mortalidad en el período en el que duró el alto el fuego podría deberse también a otros factores. Otro aspecto que podría denotar un mayor compromiso del BRN con el proceso de resolución negociada del conflicto fue su decisión de firmar una Declaración de Compromiso para Proteger a los Menores de los Efectos de los Conflictos Armados con la ONG Suiza Geneva Call. Tras varios años de trabajo conjunto con Geneva Call, la firma de dicho compromiso tuvo lugar a mediados de febrero, poco después del inicio de las negociaciones con el Gobierno. El BRN se comprometió a seguir trabajando para una mejor observación del derecho internacional humanitario y de las normas internacionales de protección de la infancia y la educación. Cabe recordar que históricamente en el sur de Tailandia se han registrado ataques contra las escuelas y el colectivo docente.

A pesar de la reducción de la violencia y del inicio de conversaciones directas entre el Gobierno y el BRN (que llevaron a cabo dos rondas de negociación en enero y marzo, pero mantuvieron comunicación a distancia durante todo el año), **el Gobierno volvió a prorrogar el decreto de emergencia que rige en el sur de Tailandia desde hace 15 años y que ha sido prolongado en más de 60 ocasiones.** Como en años anteriores, dicha decisión fue criticada por congresistas y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales por considerar que alienta la impunidad de las Fuerzas Armadas en la contención de la insurgencia. En agosto, sin embargo, el Ejército recomendó al Gobierno que

retirara las medidas de emergencia de cuatro distritos de las provincias sureñas por considerar que la situación de seguridad había mejorado ostensiblemente en los últimos años. Según datos de las Fuerzas Armadas hechos públicos en ese mes, el número de víctimas mortales respecto del año anterior había disminuído en un 70%. En cuanto a la dinámica del conflicto, algunos de los episodios de violencia más remarcables del año se produjeron en febrero, cuando seis combatientes murieron en Narathiwat en enfrentamientos con el Ejército; a mediados de marzo, resultando heridas 30 personas tras el estallido de un artefacto explosivo delante de la sede del Centro para la Administración de las Provincias Sureñas Fronterizas; a finales de abril, cuando un operativo militar provocó la muerte de tres combatientes y desencadenó el fin de la tregua por parte del BRN; a mediados de julio, con el estallido de dos bombas en Pattani, en el que 10 personas resultaron heridas; o a mediados de septiembre, por los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y un grupo de insurgentes que finalizaron con la muerte de seis de estos últimos en la provincia de Pattani.

1.3.4. Europa

Europa Oriental

Ucrania (este)	
Inicio:	2014
Tipología:	Gobierno, Identidad, Autogobierno Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, actores armados en provincias del este, Rusia
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Síntesis:	Ucrania, considerado un país en transición desde su independencia tras la caída de la Unión Soviética en 1991 y territorio de gran importancia geoestratégica, afronta un conflicto armado en zonas del este del país y es escenario de la crisis más grave entre Occidente y Rusia desde la Guerra Fría. Precedido por un cúmulo de focos de tensión en el conjunto del país entre finales de 2013 y 2014 (protestas masivas pro-europeas y antigubernamentales; caída del presidente Víktor Yanukóvich y su régimen; anexión de Crimea por Rusia; protestas anti-Maidán y emergencia de actores armados en el este), la situación en el este de Ucrania derivó en conflicto armado en el segundo trimestre de 2014, enfrentando a milicias separatistas pro-rusas en las regiones de Donetsk y Lugansk, apoyadas por Rusia, y a las Fuerzas Armadas estatales bajo las nuevas autoridades pro-europeas. Las áreas de Donetsk y Lugansk bajo control de las fuerzas rebeldes se declararon repúblicas independientes. A cuestiones como el estatus de esas provincias se añade de fondo la dimensión geoestratégica internacional (rivalidad política, económica y militar entre Occidente y Rusia en el este de Europa; demostración de fuerza de Rusia ante su propia opinión pública; entre otros elementos). La guerra ha tenido un grave impacto en la población civil, especialmente en términos de desplazamiento forzado. La guerra transcurre en paralelo a un proceso de paz con negociaciones en diversos niveles y formatos.

Se redujo la violencia en el este de Ucrania, especialmente en la segunda mitad del año, de la mano de la renovación del alto el fuego a finales de julio, si bien el conflicto continuó teniendo impactos en seguridad humana, algunos agravados en el contexto de la pandemia de la COVID-19. En 2020 murieron un centenar de personas, según la base de datos del centro de investigación ACLED, frente a los cerca de 400 registrados en 2019. En la primera mitad del año la Misión de Observación de la OSCE identificó numerosas violaciones del alto el fuego, con periodos de incrementos y reducciones de incidentes en diversas áreas de la zona de conflicto. De las tres áreas designadas en años anteriores como zonas de retirada de fuerzas (Stanytsia Luhanska, Zolote y Petrivske), en Petrivske se registraron violaciones del alto el fuego y, más puntualmente, también en Zolote. Se intensificaron las violaciones del alto el fuego en febrero y principios de mayo, así como en periodos de mayo y junio. Los incidentes de principios de mayo, con bombardeos en varias localidades en medio del contexto de pandemia y confinamiento, resultaron en seis menores heridos –además de víctimas civiles adultos–, lo que motivó demandas de la ONU de cumplimiento del derecho internacional humanitario y de respaldo al llamamiento al alto el fuego global del secretario general de la ONU. UNICEF dio un balance de nueve ataques contra colegios entre principios de año y mayo, cinco de ellos en abril, pese a la adhesión de Ucrania en 2019 a la Declaración de Escuelas Seguras, que compromete a la protección de la educación en contextos de conflicto. La misión de la OSCE también observó a lo largo del año presencia de armamento que incumplía las restricciones de las líneas para su retirada, incluyendo junto a áreas pobladas y puntos de cruce de civiles, así como presencia de minas y artefactos sin explotar, que causaron diversas víctimas. Según la OSCE, murieron más civiles a causa de minas que en el año anterior. **En el marco del Grupo Trilateral de Contacto las partes en conflicto alcanzaron el 23 de julio un acuerdo de medidas para reforzar el alto el fuego, que entró en vigor el 27 de julio.** Tras el acuerdo se redujeron significativamente los niveles de violencia y las violaciones del alto el fuego. En términos generales el alto el fuego fue respetado, pese a registrarse incidentes. Entre ellos, en noviembre la OSCE informó de que el 44% de las violaciones del alto el fuego desde el acuerdo se produjeron en áreas en torno a la estación de filtrado de agua de Donetsk. En diciembre se produjo un repunte de violaciones del alto el fuego.

La pandemia de la COVID-19 tuvo impactos negativos en la seguridad humana de la población afectada por el conflicto. Hubo cierres de los puntos de cruce de la Línea de Contacto (línea de separación de fuerzas establecida por el Acuerdo de Minsk de 2015), lo que impactó especialmente en personas mayores, que no pudieron cruzar para recibir sus pensiones y subsidios. Entre

mediados de marzo y junio todos los pasos estuvieron cerrados, en junio reabrieron parcialmente dos, y en diciembre seguían abiertos solo dos. En 2020 se registraron 3 millones de desplazamientos individuales a través de los puntos de cruce (solo un 22% del total de 2019). Los desacuerdos y el contexto de pandemia bloquearon las discusiones sobre la apertura de nuevos pasos adicionales. Norwegian Refugee Council alertó en septiembre de que **las consecuencias económicas de la pandemia impactaron negativamente en ocho de cada 10 familias en las regiones de Donetsk y Lugansk en términos de seguridad alimentaria y medios de vida** por el incremento de precio de alimentos y productos de higiene, costes adicionales de transporte y pérdidas de ingresos familiares en los meses de cuarentena. También ACNUDH alertó de que la pandemia había exacerbado las dificultades que afrontaba la población afectada por el conflicto en el este de Ucrania, especialmente por el impacto de las restricciones de libertad de movimiento en los derechos económicos y sociales, incluyendo la pérdida de acceso a asistencia sanitaria, educación, pensiones y medios de vida.⁶³ La pandemia situó a Ucrania en la peor recesión en décadas, según otro estudio de varias agencias de Naciones Unidas, que advirtieron del riesgo de que nueve millones de personas pasaran a situación de pobreza.⁶⁴ Pese a que no incluía datos separados de las áreas del este, OCHA alertó de que las consecuencias serían devastadoras para la población de las zonas en conflicto. Algunos analistas alertaron también del riesgo de una grave crisis humanitaria en las regiones del este y que esta podría afectar al rumbo del conflicto. A finales de año, 3,4 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria a causa del conflicto. Asimismo, organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales alertaron del incremento de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico en el conjunto del país.

Rusia y Cáucaso

Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	
Inicio:	2020
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional
Actores:	Azerbaiyán, Armenia, autoproclamada República de Nagorno-Karabaj,
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Síntesis:	
El conflicto entre ambos países en relación a la región de Nagorno-Karabaj –enclave de mayoría armenia formalmente parte de Azerbaiyán aunque independiente de facto– está asociado a la no resolución de las cuestiones de fondo del conflicto armado transcurrido entre diciembre de 1991 y 1994. Este comenzó como un conflicto interno entre las milicias de autodefensa de la región y las fuerzas de seguridad	

63. ACNUDH, *Impact of COVID-19 on Human Rights in Ukraine*, diciembre de 2020.

64. ONU Mujeres, FAO, PNUD, *Analytical report COVID-19 in Ukraine: Impact on Households and Businesses*, octubre de 2020.

de Azerbaiyán por la soberanía y control de Nagorno-Karabaj y progresivamente degeneró en una guerra interestatal entre esta y su vecina Armenia. El conflicto armado, que causó 20.000 muertos y 200.000 desplazados y que homogeneizó de forma forzosa la composición étnica de la población en ambos lados de la línea de alto el fuego, dio paso a una situación de conflicto no resuelto, con la cuestión del estatus de Nagorno-Karabaj y el retorno de la población como principales ejes de tensión, y con violaciones periódicas del alto el fuego. Desde el alto el fuego de 1994 ha habido diversas escaladas de violencia, como en 2016 con varios centenares de víctimas mortales. En 2020 se reabrió el conflicto armado.

Se reinició la guerra en torno a Nagorno-Karabaj entre fuerzas armenias y de Azerbaiyán en septiembre, con más de 5.000 fallecidos, mayoritariamente militares, y decenas de miles de personas desplazadas, mayoritariamente armenias. La guerra remitió en noviembre con un acuerdo tripartito entre Azerbaiyán, Armenia y Rusia –mediado por esta última– que supuso un cambio total del statu quo previo a la guerra: ratificó la partición de Nagorno-Karabaj, asignando a Azerbaiyán las áreas dentro de Nagorno-Karabaj tomadas por Bakú desde septiembre y decretó la recuperación por Azerbaiyán de todas las áreas adyacentes a Nagorno-Karabaj, mientras dejaba irresuelto el estatus de la región. El acuerdo fue acogido en Azerbaiyán como una victoria propia y una capitulación de Armenia, mientras las autoridades de Armenia y de Nagorno-Karabaj lo presentaron ante sus poblaciones como inevitable y como medio para evitar la pérdida de todo el territorio de Nagorno-Karabaj. **La guerra estuvo precedida por una escalada militar de varios días de julio en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, con uso de armamento pesado y más de una decena de fallecidos.**

El conflicto armado entre las fuerzas de Armenia y Nagorno-Karabaj y de Azerbaiyán se inició el 27 de septiembre, con acusaciones mutuas sobre su inicio. El Gobierno de Azerbaiyán lanzó ese día una ofensiva de gran escala, según Bakú, en respuesta a ataques de Armenia contra sus Fuerzas Armadas y asentamientos civiles. Mientras, Armenia acusó a Azerbaiyán de iniciar la guerra con su ofensiva. De fondo, analistas señalaron, entre otros elementos, al hartazgo de Azerbaiyán con el statu quo –en que los siete distritos adyacentes a Nagorno-Karabaj y de los que se desplazó forzosamente su población azerbaiyana por la guerra de los años noventa, habían permanecido bajo control armenio desde entonces. Con el estallido de la guerra ambos Estados declararon la ley marcial y la movilización militar. Las hostilidades transcurrieron en diversas áreas en torno a la línea de contacto, que fue quebrada por las fuerzas militares de Azerbaiyán, extendiéndose a distritos alrededor de Nagorno-Karabaj, así como a la propia región de Nagorno-Karabaj, incluyendo bombardeos frecuentes contra la capital, Stepanakert. Algunas localidades de Armenia y Azerbaiyán cercanas a la zona de conflicto también se vieron afectadas por

ataques, como las localidades azerbaiyanas de Ganja –12 víctimas mortales y 40 heridos en bombardeos a mediados de octubre según Azerbaiyán– y Mingachevir y Bardá –con una treintena de fallecidos y más de 80 heridos en ataques aéreos entre el 27 y 28 de octubre–; o áreas en torno a la localidad de Vardenis, en Armenia.

El reinicio de la guerra desencadenó llamamientos internacionales a un alto el fuego. Por su parte, Turquía, expresó su apoyo a Azerbaiyán y se comprometió a apoyarlo por todas las vías, abriendo la puerta a medios militares. Armenia acusó a Turquía de implicación en el conflicto, incluyendo a través del envío por parte de Turquía de combatientes de Siria a combatir junto a las fuerzas azerbaiyanas. Medios de comunicación señalaron la presencia de combatientes de la guerra de Siria en Azerbaiyán en apoyo a Bakú. Turquía y Azerbaiyán negaron las acusaciones. Turquía proporcionó apoyo militar a través de entrenamiento y de suministro de armamento, incluyendo drones armados. Hubo varios intentos de tregua que resultaron fallidos. Dos días después del anuncio de la toma militar por Azerbaiyán de la localidad de Shusha/Shushi –segunda localidad de Nagorno-Karabaj y de gran peso simbólico e importancia geoestratégica, y desde la cual la toma de Stepanakert podía ser inmediata–, **las partes anunciaron un acuerdo, que entró en vigor el 10 de noviembre y que contenía nueve puntos, incluyendo un alto el fuego y cese de hostilidades total**, la división de Nagorno-Karabaj, el despliegue de fuerzas rusas de mantenimiento de la paz, el control de Azerbaiyán de todos los distritos adyacentes –excepto el corredor de Lachin, que conecta Nagorno-Karabaj y Armenia, que pasaba a ser controlado por las fuerzas rusas–, el retorno de la población desplazada a Nagorno-Karabaj y a áreas adyacentes y el desbloqueo de las conexiones de transporte, entre otros.⁶⁵ La tregua se mantuvo mayoritariamente en vigor, aunque a mediados de diciembre se denunciaron algunas violaciones del alto el fuego en varios días de diciembre en la región de Hadrut. La entrega del distrito de Kelbajar a Azerbaiyán se retrasó al 25 de noviembre, mientras las de Agdam y Lachin se produjo en las fechas previstas, el 20 de noviembre y 1 de diciembre. A su vez, en diciembre se produjeron varios intercambios de prisioneros.

La guerra causó más de 5.000 víctimas mortales militares y más de un centenar de civiles. Azerbaiyán informó de 2.783 fallecidos militares y 94 civiles, así como de 1.245 militares heridos y más de 400 civiles heridos. Por su parte, Armenia y Nagorno-Karabaj cifraron en 2.718 los fallecidos militares en sus filas, y 54 víctimas mortales civiles. Las víctimas civiles incluyeron menores. Varios centenares de militares estaban desaparecidos –un centenar de Azerbaiyán, y varios cientos de Armenia. **Varias decenas de miles de personas armenias –100.000 según cifras de algunos medios de comunicación, 130.000 según UNICEF– se**

65. Véase el resumen sobre Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2021

desplazaron por la guerra. Amnistía Internacional verificó y denunció el uso de municiones de racimo por parte de Armenia y de Azerbaiyán, así como otros tipos de proyectiles contra zonas densamente pobladas. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció ataques indiscriminados en zonas pobladas en Nagorno-Karabaj y en torno a la región, y llamó a la investigación sobre posibles crímenes de guerra. HRW constató y denunció malos tratos por parte de las fuerzas de Azerbaiyán de prisioneros militares armenios. La guerra generó destrozos en infraestructura civil, incluyendo daños extensos en edificios residenciales, así como en patrimonio cultural y religioso. Según UNICEF, 76 escuelas y guarderías fueron dañadas entre finales de septiembre y finales de octubre. A mediados de diciembre, las principales necesidades humanitarias según el CICR incluían la localización de personas desaparecidas, el acceso a todos los prisioneros de guerra, suministros de alimentos e ítems de invierno para la población desplazada o retornada, apoyo para el alojamiento, apoyo en salud mental y psicosocial, reparaciones de infraestructura civil, abordaje del aumento de casos de coronavirus, entre otros.

El acuerdo de alto el fuego de noviembre generó una crisis política y social en Armenia, con fuerte rechazo al pacto, movilizaciones de protesta e irrupción de manifestantes en edificios gubernamentales. Las movilizaciones se prolongaron en semanas posteriores. Sectores opositores plantearon un ultimátum al primer ministro armenio, Nikol Pashinian, para su renuncia, y activistas lanzaron una campaña de desobediencia civil y bloqueos de calles tras el rechazo de Pashinian al ultimátum. Varios ministros (Defensa, Exteriores, Economía) dejaron sus cargos en semanas posteriores al acuerdo.

Se reanudó la guerra entre Armenia y Azerbaiyán en torno a Nagorno-Karabaj, con varios miles de víctimas mortales y un cambio total del statu quo en la región

Sudeste de Europa

Turquía (sudeste)	
Inicio:	1984
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, PKK, TAK, ISIS
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Síntesis:	El PKK, creado en 1978 como un partido político de corte marxista-leninista y dirigido por Abdullah Öcalan, anunció en 1984 una ofensiva armada contra el Gobierno, embarcándose en una campaña de insurgencia militar para reclamar la independencia del Kurdistán, fuertemente respondida por el Gobierno en defensa de la integridad territorial. La guerra que se desencadenó entre el PKK y el Gobierno afectó de manera especial a la población civil

kurda del sudeste de Turquía, atrapada en fuego cruzado y víctima de las persecuciones y campañas de evacuaciones forzadas ejercidas por el Gobierno. El conflicto dio un giro en 1999, con la detención de Öcalan y el posterior anuncio del PKK del abandono de la lucha armada y la transformación de sus objetivos, dejando atrás la demanda de independencia para centrarse en la reivindicación del reconocimiento a la identidad kurda dentro de Turquía. Desde entonces, el conflicto ha transcurrido entre fases de alto el fuego –principalmente entre 2000 y 2004– y de violencia, coexistiendo con medidas de democratización e intentos de diálogo (Iniciativa de Democratización en 2008, Diálogo de Oslo 2009-2011 y proceso de Imrali 2013-2015). En 2015 se reinició la guerra, que desde los años ochenta ha causado unas 40.000 víctimas mortales. La guerra en Siria puso de nuevo en evidencia la dimensión regional de la cuestión kurda en Turquía y el carácter transfronterizo del PKK, cuya rama siria pasó a controlar áreas de mayoría kurda en ese país.

El conflicto continuó activo en el sudeste de Turquía y, especialmente, en el norte de Iraq, donde Turquía intensificó sus ataques contra el PKK en diversos momentos del año en un escenario regional en el que se incrementó la tensión entre actores kurdos. **Se redujo la cifra de fallecidos.** Según International Crisis Group, 292 personas fallecieron en 2020 (frente a 468 en 2019), de las cuales la mayoría, 217, eran miembros del PKK. ACLED contabilizó 538 víctimas mortales en 2020 (frente a las más de 970 víctimas en 2019).

Continuaron las operaciones del Ejército turco en áreas del este y sudeste de Turquía, incluyendo zonas de las provincias de Agri, Van, Bitlis, Hakkari y Sirnak. No obstante, en 2020 el grueso de las víctimas mortales asociadas al conflicto se produjeron en el norte de Iraq. En marzo Turquía anunció la muerte de una de las integrantes del Comité Ejecutivo del PKK y co-fundadora de la rama de mujeres de la guerrilla, Nazife Bilen (alias Hacer Hilal), en una operación de los servicios de inteligencia en la región de Qandil. Turquía lanzó en junio la operación Garra de Águila contra el grupo en torno a las montañas de Qandil, Sinjar y el distrito de Makhmur, todas ellas en el norte de Iraq y estratégicas para el PKK. Fue seguida de la operación Garra de Tigre –terrestre, con apoyo aéreo– en la provincia de Duhok (norte de Iraq). Turquía alegó su derecho a atacar a quienes le atacaban. Por su parte, el PKK se atribuyó numerosas acciones de guerrilla contra el Ejército turco en la zona de Haftanin (Dohuk), alegando haber causado más de 200 bajas de militares solo entre finales de junio y de julio. Murat Karayilan, miembro del Comité Ejecutivo del PKK, afirmó que la situación en Haftanin mostraba que el PKK podía hacer frente a la tecnología militar moderna de Turquía. Además, afirmó que **el grupo demandaba reconocimiento de la identidad kurda y derechos relativos a cultura y lengua y autogobierno, con una solución dentro de Turquía.**

En el escenario regional se incrementaron las tensiones entre el PKK y el KDP –partido kurdo gobernante en la región kurda del norte de Iraq–, y entre el PKK y el Gobierno iraquí. El KDP desplegó fuerzas en abril al oeste de las montañas de Qandil, así como en octubre al noreste de Dohuk, y estableció puestos de control en torno a localidades que rodeaban la montaña de Gare –área con campos del PKK. El grupo armado advirtió de que los despliegues de fuerzas kurdas vinculadas al KDP en áreas donde están las bases del PKK se asemejaban a preparativos de guerra. Además, en octubre el Gobierno de Iraq y el KRG alcanzaron un acuerdo sobre el estatus de Sinjar (gobernación de Nínive), que distribuía competencias entre ambos en cuestiones administrativas, de seguridad y reconstrucción, entre otros aspectos, y que incluye la expulsión de fuerzas del PKK. Este criticó el pacto. En el marco de ese acuerdo, tropas iraquíes fueron desplegadas en noviembre en el distrito de Sinjar. A mediados de diciembre se produjeron choques entre fuerzas kurdas vinculadas al KDP y del PKK en la zona de Amedi (provincia de Dohuk), con dos fallecidos y varios heridos. Dos días después se produjeron choques entre miembros de las fuerzas del PKK e YPG (guerrilla kurda de siria vinculada al PKK), por un lado, y *peshmergas*, por otro, en torno al paso fronterizo de Fish Khabur (Dohuk, frontera con Siria), incrementándose las alertas de riesgos de conflicto intra-kurdo.

En el ámbito político y social en Turquía **continuaron las detenciones masivas de representantes políticos y activistas civiles kurdos, así como el cese de alcaldes y alcaldesas kurdas electas.** De los 65 municipios en que el partido pro-kurdo HDP obtuvo la alcaldía en las elecciones de 2019, en octubre de 2020 solo gobernaba en cinco de ellas, por la destitución forzada por las autoridades turcas. Varias decenas de co-alcaldes/as permanecían en prisión. El HDP hizo llamamientos al Consejo de Europa y al Comité de las Regiones de la UE a adoptar medidas. El nuevo partido Deva Parti, del ex ministro turco de Economía del AKP Ali Babacan, calificó de arbitrarias las detenciones de alcaldes del HDP en mayo.

Algunas informaciones en prensa señalaron que Babacan sería favorable a una mayor libertad lingüística y autonomía para la población kurda. Por otra parte, Mithat Sancar fue nombrado nuevo co-líder del HDP, mientras su co-líderesa Pervin Buldan, fue renovada en el cargo y llamó a una nueva Constitución con garantías para todas las identidades y creencias. Por otra parte, **el Gobierno autorizó en marzo una visita al líder del PKK encarcelado, Abdullah Ocalan, por su hermano, Mehmet Ocalan,** en el contexto de tensión tras un incendio forestal en la isla donde está la prisión. Era la primera visita de un familiar tras siete meses, mientras siguieron negándose las visitas a sus abogados (la última en 2019, tras ocho años sin visitas).

1.3.5. Oriente Medio

Golfo

Yemen (al-houthistas)	
Inicio:	2004
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas, sectores armados vinculados al partido islamista Islah, sectores separatistas agrupados en el Southern Transitional Council, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Irán
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto armado se inició en 2004 cuando los partidarios del clérigo al-Houthi, pertenecientes a la minoría shíi, iniciaron una rebelión en el norte del Yemen. El discurso oficial ha acusado a los insurgentes de pretender la reinstauración de un régimen teocrático como el que imperó durante mil años en la zona, hasta el triunfo de la revolución republicana de 1962. Los al-houthistas lo niegan y han acusado a las autoridades yemeníes de corrupción y de desatender a las regiones montañosas septentrionales y se han opuesto a la alianza de Sanaa con EEUU en la denominada lucha contra el terrorismo. El conflicto se cobró miles de víctimas mortales y provocó también masivos desplazamientos forzados de población. Los diversos intentos por buscar una salida negociada a la crisis fracasaron y las treguas suscritas se rompieron sucesivamente. En el marco de la rebelión que puso fin al Gobierno de Alí Abdullah Saleh en 2011, los al-houthistas aprovecharon para ampliar las zonas bajo su control más allá de su feudo tradicional en la provincia de Saada y se vieron crecientemente involucrados en choques con milicias salafistas, sectores afines al partido islamista Islah y milicias tribales. El avance de los al-houthistas hacia el centro y sur del país agudizó la crisis institucional y forzó la caída del gobierno, propiciando una intervención militar internacional liderada por Arabia Saudita en marzo de 2015. El conflicto ha ido adquiriendo una creciente dimensión regional e internacional y se ha visto influido por las tensiones entre Irán y Arabia Saudita y entre Washington y Teherán.

El conflicto armado en Yemen continuó siendo uno de los más graves a nivel mundial, con altísimos niveles de letalidad, la participación de numerosos actores armados, disputas superpuestas y severos impactos en la población civil que se agravaron aún más durante el año a causa de la violencia, la crítica situación humanitaria y el impacto de la COVID-19. Según los datos del centro de investigación ACLED, el conflicto armado provocó la muerte de casi 20.000 personas en 2020 (19.740), la mayor parte en ataques explosivos o como resultado de enfrentamientos. Esta cifra es similar a la registrada el año anterior en el que se contabilizaron unas 23.000 víctimas mortales, e

inferior a la de 2018, cuando se registraron en torno a 30.000. No obstante, diversas voces, incluyendo la agencia humanitaria de la ONU, subrayaron la necesidad de tener en cuenta las muertes indirectas provocadas por el conflicto armado. Según OCHA, en los últimos cinco años la guerra en Yemen ha dejado 233.000 muertes, de las cuales 131.000 serían resultado de causas indirectas como la falta de alimentos o de acceso a atención de salud. En este sentido, al finalizar el año 24,3 millones de yemeníes necesitaban algún tipo de asistencia humanitaria y protección y se multiplicaron las voces de alerta sobre la hambruna en el país, la peor en décadas a nivel mundial, según advirtió el secretario general de la ONU. La violencia también continuó motivando masivos desplazamientos de población: más de 100.000 personas habían huido de sus hogares solo entre enero y junio de 2020. Según datos de ACNUR, Yemen se situaba entre los países con mayor población desplazada interna a nivel mundial, con un total de 3,7 millones –en su mayoría mujeres y menores–, en cuarto lugar después de Colombia, Siria y la RDC. La inseguridad alimentaria, el aumento de la pobreza, las dificultades de acceso de la ayuda humanitaria y la destrucción de infraestructuras de salud en el marco del conflicto agravaron los riesgos de expansión y los impactos de la pandemia. Sin posibilidad de recoger datos exhaustivos, las informaciones parciales apuntaban a una tasa de letalidad de la enfermedad hasta cuatro veces superior que el promedio mundial.

En este contexto, cabe destacar que **el Grupo de Expertos de la ONU sobre Yemen presentó un nuevo informe sobre el conflicto armado en el que señala la responsabilidad de todas las partes en el sinnúmero de abusos cometidos contra la población yemení.** Basándose en sus conclusiones, a finales de año el grupo solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU que ampliara las sanciones y remitiera el caso de Yemen a la Corte Penal Internacional.⁶⁶ En su informe, el grupo analiza la situación en el país entre julio de 2019 y junio de 2020, insistiendo en que los actores armados implicados en el conflicto han continuado cometiendo violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y que estos abusos constituyen un patrón que se reproduce durante las hostilidades y más allá de los frentes de batalla.⁶⁷ Las vulneraciones incluyen muertes de civiles en ataques indiscriminados, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, violencia de género –incluyendo violencia sexual–, torturas,

El conflicto armado en Yemen continuó siendo uno de los más graves a nivel mundial, con altísimos niveles de letalidad, implicación de numerosos actores armados, disputas superpuestas y graves impactos en la población civil

reclutamiento de menores, denegación del debido proceso, violaciones a los derechos fundamentales y ataques a activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos, incluyendo defensoras de los derechos de las mujeres. El grupo de expertos insistió en la necesidad de que terceros Estados suspendan la transferencia de armas a las partes en pugna y subrayó la urgencia de un cese el fuego total, que no se concretó durante 2020.

Respecto a la evolución del conflicto, durante el año las dinámicas oscilaron entre declaraciones de tregua y recrudescimiento de la violencia, pero a nivel general las hostilidades entre los diversos actores armados persistieron y se intensificaron. De hecho,

si a principios de año se identificaban 33 frentes de batalla, a finales de octubre se contabilizaban 47, según datos de OCHA. Las hostilidades –que transcurrieron en paralelo a iniciativas de mediación y facilitación– se desarrollaron principalmente en torno a dos ejes de confrontación. En primer lugar, la disputa protagonizada principalmente por los al-houthistas y el Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi, apoyado por la coalición militar liderada por Arabia Saudita. A pesar de ciertas expectativas por la reducción parcial de la violencia a finales de 2019 –en el marco de contactos informales entre Riad y los al-houthistas–, desde principios de 2020 se hizo patente la intensificación de los enfrentamientos. Desde los primeros meses del año la violencia afectó de manera progresiva a Sanaa, al-Jawf, la costa del Mar Rojo y Marib –esta última rica en petróleo y último centro urbano importante en manos de Hadi. Tras el llamamiento del secretario general de la ONU a un alto el fuego global con motivo de la pandemia de COVID-19, las partes manifestaron su apoyo a la iniciativa, pero solo en términos retóricos, ya que las hostilidades continuaron. En abril Arabia Saudita declaró formalmente una tregua unilateral que despertó algunas expectativas, pero la iniciativa fue rechazada por los al-houthistas que exigieron un compromiso saudí más amplio, que incluyera el fin al bloqueo en las áreas controladas por el grupo armado –considerado por Riad como “proxy” de Irán.⁶⁸ En la práctica, la violencia se incrementó, ampliándose a la región de al-Bayda y con mayores intercambios de fuego en la zona fronteriza con Arabia Saudita. En un contexto de bloqueo de las negociaciones promovidas por la ONU y de críticas y acusaciones de parcialidad al enviado especial a Yemen, Martin Griffiths –tanto por los al-houthistas como por el Gobierno de Hadi–, el

66. UN Human Rights Council, *UN Group of Eminent International and Regional Experts on Yemen Briefs the UN Security Council Urging an end to impunity, an expansion of sanctions, and the referral by the UN Security Council of the situation in Yemen to the International Criminal Court*, 3 de diciembre de 2020.

67. UN Human Rights Office of the High Commissioner, *UN Group of Eminent International and Regional Experts on Yemen releases their third report Yemen: A Pandemic of Impunity in a Tortured Land*, 9 de septiembre de 2020.

68. Para más información, véase el resumen sobre Yemen del Sur en el capítulo 6 (Negociaciones de paz en Oriente Medio) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2020: análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2021.

incremento de los incidentes violentos en el puerto de Hodeida hizo temer por la continuidad del Acuerdo de Estocolmo, suscrito por las partes a finales de 2018. No obstante, las gestiones diplomáticas permitieron avanzar en la implementación del acuerdo en lo referente al intercambio de prisioneros. En octubre, al-houthistas y el Gobierno de Hadi liberaron a un millar de presos.

El segundo eje de confrontación se dio en el seno del bando anti al-houthista, entre las fuerzas de Hadi y el Southern Transitional Council (STC), conglomerado de fuerzas separatistas del sur apoyadas por Emiratos Árabes Unidos (EAU). Tras la escalada de violencia registrada en 2019 y la consiguiente firma del acuerdo de Riad, en 2020 quedaron en evidencia las dificultades para implementar el pacto y los enfrentamientos continuaron con oscilaciones a lo largo de todo el año. Los principales escenarios de violencia fueron Abyan y la estratégica isla de Socotra. La crisis se intensificó en abril, cuando el STC decidió decretar una administración autónoma en el sur, en medio de acusaciones al Gobierno de Hadi por supuestos preparativos para lanzar una nueva ofensiva sobre Adén, su área de influencia. En junio las fuerzas del STC tomaron la capital de Socotra –ya se habían registrado incidentes en la isla en febrero–, pero la tensión remitió tras un acuerdo mediado por Arabia Saudita. En julio el STC rescindió la declaración de autonomía y los contactos para intentar reducir la tensión continuaron, aunque en medio de amenazas y de continuos incidentes armados. Otro escenario de enfrentamientos durante el año fue Taiz, donde se produjeron choques entre fuerzas del partido islamista Islah y fuerzas de EAU y milicias próximas.

Finalmente, en diciembre, el Gobierno de Hadi y el STC anunciaron la formación de un nuevo gobierno, uno de los puntos clave del acuerdo de Riad de 2019 y para el desbloqueo del proceso que intenta impulsar la ONU. El nuevo gabinete no incluye ninguna mujer entre sus miembros –por primera vez en dos décadas–, hecho que fue denunciado por organizaciones de mujeres yemeníes. **Al finalizar el año, un ataque explosivo en el aeropuerto de Adén justo en momentos en que el nuevo gabinete desembarcaba de su avión evidenció el volátil contexto de seguridad. La ofensiva no causó muertes entre los ministros, pero sí de otras 26 personas y dejó un centenar de heridos.** A finales de año, las perspectivas de evolución del conflicto también dependían de la posible calificación de los al-houthistas como grupo terrorista por EEUU, tras las amenazas de la administración de Donald Trump en este sentido. Una medida que –según diversos análisis– podía alentar acciones de represalia por parte del grupo armado y dificultar aún más la entrega de ayuda humanitaria.⁶⁹

Yemen (AQPA)	
Inicio:	2011
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Al- Qaeda en la Península Arábiga (AQPA/Ansar Sharia), ISIS, EEUU, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, milicias tribales, milicias al-houthistas/Ansar Allah
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

Afectado por múltiples conflictos y desafíos internos, en los últimos años el Gobierno yemení ha enfrentado una fuerte presión internacional –sobre todo de EEUU y Arabia Saudita– para dedicar esfuerzos a la lucha contra al-Qaeda en el país, especialmente tras la fusión de la rama saudí y yemení de la organización que a comienzos de 2009 dio origen a al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). Si bien la presencia de al-Qaeda en Yemen se registra desde los noventa –con episodios de alta repercusión como el atentado suicida contra el barco de guerra estadounidense USS Cole en 2000–, se ha observado una escalada en sus acciones. En diciembre de 2009 el fallido atentado contra un avión que se dirigía a Detroit centró la atención internacional en AQPA, considerado por EEUU como una de las principales amenazas a su seguridad. Aprovechando el vacío de poder en Yemen en el marco de la revuelta contra el presidente Alí Abdullah Saleh (2011), AQPA amplió sus operaciones en el sur del país y las zonas bajo su control. El grupo comenzó a realizar algunas de sus acciones bajo la denominación Ansar Sharia (Partidarios de la Ley Islámica) y desde mediados de 2014 AQPA se vio crecientemente involucrada en enfrentamientos con milicias al-houthistas que avanzaron posiciones desde el norte de Yemen. AQPA ha aprovechado el clima de inestabilidad y la escalada de violencia en el país a partir de marzo de 2015 –en el marco del conflicto entre los al-houthistas y las fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi– y se ha enfrentado a ambos bandos. Este escenario también ha favorecido el ascenso de ISIS, que en los últimos años ha reivindicado diversas acciones en el país.

En línea con lo ocurrido en los últimos años, en 2020 las dinámicas de violencia que han cobrado protagonismo en Yemen en el último lustro⁷⁰ restaron visibilidad al conflicto protagonizado por al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), la filial de al-Qaeda en el país. Esta tendencia se ha visto reforzada por un declive de las actividades del grupo como consecuencia de diversos factores, entre ellos el impacto de la campaña estadounidense de ataques contra líderes y efectivos del grupo y las consecuencias de su rivalidad con otros grupos armados que operan en Yemen. El total de personas fallecidas o heridas a causa de este conflicto es complejo de precisar. Los incidentes que tuvieron mayor visibilidad mediática arrojan un balance de una decena de personas muertas. Entre ellas, el líder de

69. Human Rights Watch, *Yemen: Houthi Terrorist Designation Threatens Aid*, 10 de diciembre de 2020; Martin Chulov, “Classifying Houthis as terrorists will worsen famine, Trump is warned”, *The Guardian*, 13 de diciembre de 2020.

70. Véase el resumen sobre Yemen en este capítulo.

la organización en Yemen, Qassim al-Rimi, asesinado en un ataque aéreo con dron de EEUU en enero; una persona asesinada y crucificada en agosto por AQPA en al-Bayda tras ser acusada de espiar para el gobierno y de guiar drones de EEUU a posiciones del grupo; tres milicianos de AQPA muertos en una ofensiva de las fuerzas gubernamentales en la provincia occidental de Mahra; cinco miembros de las Security Belt Forces que forman parte del STC muertos por AQPA en un ataque en las afueras de Lawdar, en la provincia de Abyan; y un profesor universitario crítico con el extremismo islamista radical, asesinado en la provincia de Dhale (sur).

A finales de febrero, AQPA anunció que el nuevo máximo dirigente del grupo sería Khalid bin Umar Batarfi, hasta ahora número dos de al-Rimi y portavoz del grupo. La muerte de al-Rimi alentó algunos análisis sobre su impacto en el futuro de la organización. Con formación en Afganistán y uno de los fundadores de AQPA en 2009, al-Rimi fue el primer jefe militar del grupo y se convirtió en su líder en 2015 tras la ejecución de su predecesor, Nasir al-Wuhayshi, en otra ofensiva aérea de EEUU desde un avión no tripulado. Algunas voces expertas apuntaron que si bien su muerte era un golpe para la organización por tratarse de uno de los referentes históricos del grupo, las consecuencias no serían necesariamente drásticas o significativas, teniendo en cuenta que durante su etapa al mando de la organización el grupo ya había registrado un declive importante, en especial en los últimos tres años. Según especialistas, **la prioridad de AQPA sería reagruparse, reducir infiltraciones –que llevaron al grupo a suspender el reclutamiento de nuevos combatientes– y mantener su coherencia interna.**⁷¹ En esta misma línea, un análisis del centro de estudios ACLED publicado a finales de año, destacó que desde principios de 2020 el grupo se encontraría en una fase de “atrincheramiento”, después de una breve etapa de expansión aprovechando la escalada de violencia general en Yemen (2015-2016) y de una fase de reubicación del grupo en la provincia de al-Bayda y lucha con la filial de ISIS (2017-2019). En esta nueva fase de atrincheramiento de la filial de al-Qaeda influirían, además de la muerte de al-Rimi; las derrotas de AQPA e ISIS en sus choques con al-houthistas y el asesinato del responsable de difusión del grupo, también en un ataque con dron de EEUU, que habría mermado su capacidad para reivindicar acciones públicamente. AQPA estaría intentando priorizar una vez más su retórica anti al-houthista –por encima de su disputa con ISIS– para volver a presentarse como adalid de la lucha contra el grupo, una estrategia que ya usó en el pasado y que habría recuperado ante el nuevo avance al-houthista sobre al-Bayda en 2020 y la posibilidad de explotar agravios de las tribus locales. Según ACLED, en 2020 la mitad de las interacciones de AQPA fueron con fuerzas al-houthistas, mientras que la pugna con ISIS habría remitido en el último año. EEUU continuó ofreciendo recompensas económicas para quienes

proporcionaran información que permita conocer el paradero de los nuevos dirigentes de la organización.

Mashreq

Egipto (Sinaí)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (filial de ISIS), otros grupos armados (Ajnad Misr, Majlis Shura al-Mujahideen fi Aknaf Bayt al-Maqdis y Katibat al-Rabat al-Jihadiya, Popular Resistance Movement, Liwaa al-Thawra y Hasm), Israel
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

La península del Sinaí se ha convertido en un creciente foco de inestabilidad. Desde el derrocamiento de Hosni Mubarak en 2011, la zona ha registrado un aumento de la actividad insurgente, que inicialmente dirigió sus ataques contra intereses israelíes. Esta tendencia abrió diversos interrogantes sobre el mantenimiento de los compromisos de seguridad entre Egipto e Israel tras la firma del acuerdo de Camp David (1979), que condujo a la retirada de las fuerzas israelíes de la península. Sin embargo, y en paralelo a la accidentada evolución de la transición egipcia, los grupos yihadistas con base en el Sinaí han reorientado el foco de sus acciones hacia las fuerzas de seguridad egipcias, en especial tras el golpe de Estado contra el Gobierno islamista de Mohamed Mursi (2013). Progresivamente, los grupos armados –en especial Ansar Beit al-Maqdis (ABM)– han demostrado su capacidad para actuar más allá de la península, han recurrido a arsenales más sofisticados y han ampliado sus objetivos, atacando también a turistas. La decisión de ABM de declarar lealtad a la organización radical Estado Islámico (ISIS) a finales de 2014 marcó un nuevo hito en la evolución de esta disputa. La complejidad del conflicto está influida por múltiples factores, entre ellos la histórica marginación política y económica que ha alentado los agravios de la población beduina, comunidad mayoritaria en el Sinaí; las dinámicas del conflicto árabe-israelí; y la convulsión regional, que ha facilitado el tránsito de armas y combatientes en la zona.

El conflicto armado protagonizado por las fuerzas de seguridad egipcias y la filial del grupo armado ISIS que opera principalmente en la zona de Norte Sinaí, continuó motivando periódicos hechos de violencia a lo largo de 2020, aunque de una intensidad menor que la observada en años previos. Aunque los balances de víctimas mortales fueron complejos de precisar debido a las dificultades de acceso de fuentes independientes y los datos dispares ofrecidos por las partes, recuentos informales a partir de informaciones de prensa apuntan a que un mínimo de entre 150 y 200 personas fallecieron a causa de las hostilidades durante el año, cifra inferior a la contabilizada en 2019, cuando se estimó que perdieron la vida al me-

71. AFP, “Questions about the impact in Yemen from killing of AQAP chief”, *The Arab Weekly*, 10 de febrero de 2020; Saeed al-Batati, “Al-Qaeda suffers heavy losses in Yemen conflicts”, *Arab News*, 7 de marzo de 2020.

nos 500 personas. Los datos ofrecidos por el centro de estudios ACLED difieren en los totales, pero confirman la tendencia a la baja en la letalidad del conflicto. Según el centro de investigación, el conflicto provocó 626 víctimas mortales en 2020, frente al millar contabilizado el año anterior. Los hechos de violencia se concretaron, como en años previos, en enfrentamientos directos, emboscadas, acciones de francotiradores, ataques con explosivos, ofensivas contra gasoductos y agresiones contra civiles –incluyendo asesinatos y secuestros.

Respecto a la evolución del conflicto, cabe destacar que **los hechos más significativos se produjeron durante el verano, en los meses de julio y agosto, y que el principal escenario de confrontación fue la localidad de Bir al-Abd, al noreste de la provincia Norte Sinaí, donde ISIS logró ocupar temporalmente varias localidades.** En el primer semestre los incidentes más graves se produjeron a finales de abril en esta misma zona. El grupo armado ISIS –también autodenominado Provincia del Sinaí– reivindicó el ataque contra un vehículo militar que habría causado la muerte a diez militares. Las autoridades egipcias anunciaron a principios de mayo que las operaciones contra el grupo armado causaron la muerte de 18 supuestos milicianos de ISIS, mientras que otros 21 habrían fallecido en choques en Bir al-Abd al finalizar este mes. A partir de la segunda quincena de julio, esta zona –a 80 kilómetros de la capital de Norte Sinaí, al-Arish– volvió a ser escenario de enfrentamientos después de que combatientes de ISIS lanzaran un ataque contra instalaciones militares. En el marco de estas hostilidades, la filial de ISIS consiguió tomar el control de cuatro localidades de la zona –Qatiya, Iqtiya, Ganayen y Merih–, obligando al desplazamiento forzado de sus habitantes. Según el balance ofrecido por las autoridades egipcias, entre el 22 de julio y finales de agosto, la violencia en la zona provocó la muerte de 70 presuntos milicianos de ISIS y de siete militares. En agosto también se informó que ISIS había ejecutado a cuatro civiles en Bir al-Abd por presunta colaboración con el Ejército. Las fuerzas de seguridad egipcias habrían conseguido recuperar el control de la zona en septiembre, pero en los meses siguientes continuaron produciéndose escaramuzas e incidentes. Los hechos de violencia también afectaron a las localidades de al-Arish, mayor ciudad de la provincia Norte Sinaí, y en Rafah, en la frontera Gaza. Al menos 40 presuntos militantes de ISIS y ocho soldados egipcios habían muerto en diversos incidentes entre septiembre y principios de diciembre. Entre los militantes muertos en al-Arish se encontraría Abdel Qader Sweilam, uno de los dirigentes del grupo armado involucrado en el ataque a una mezquita que causó más de 300 muertes en 2017.

El conflicto armado que enfrenta a las fuerzas de seguridad egipcias y a la filial de ISIS que opera principalmente en la zona de Norte Sinaí continuó provocando hechos de violencia en 2020, aunque de una intensidad menor que en años previos

Cabe destacar que en localidades en torno a Bir al-Abd al menos 15 civiles habían muerto a causa de explosivos que quedaron en el área y que detonaron en el marco del retorno de población desplazada a la zona a partir de octubre. Las autoridades informaron que en el último trimestre del año habían destruido 437 depósitos de armas y una treintena de vehículos, desactivado 159 artefactos explosivos y confiscado varias decenas de armas en el marco de su campaña contra el grupo.

Algunas voces expertas destacaron que el despliegue de bombas trampa por parte de ISIS en el Sinaí sigue el precedente de acciones similares del grupo en Iraq y Siria.

La disputa en el Sinaí coexistió con otras situaciones de tensión que tuvieron una mayor presencia mediática y visibilidad en la agenda de seguridad y diplomática egipcia. Entre ellos, la creciente preocupación e implicación de El Cairo por la evolución del conflicto armado en la vecina Libia –a mediados de año Egipto advirtió sobre una posible intervención militar directa si los enfrentamientos alcanzaban la estratégica localidad libia de Sirte, realizó ejercicios militares en la zona fronteriza, el Parlamento aprobó un posible despliegue de tropas y se reforzaron los vínculos con países aliados en un frente informal anti-Turquía (Chipre, Francia, Grecia, EAU), incluyendo a través de ejercicios navales en diciembre– y por el conflicto entre Egipto, Sudán y Etiopía en torno a la construcción de una presa en el río Nilo –que motivó una serie de negociaciones infructuosas durante 2020.⁷² Adicionalmente, persistió la situación de tensión interna asociada a la represión a la disidencia, las vulneraciones de derechos humanos y el refuerzo del autoritarismo por parte del régimen.⁷³ Pese a este panorama y a la crisis económica en el país, el régimen continuó incrementando sus compras de armas, con Rusia, EEUU y Francia como principales proveedores. Análisis indican que París habría satisfecho 35% de las demandas de armas al régimen entre 2015 y 2019.⁷⁴

El conflicto armado que enfrenta a las fuerzas de seguridad egipcias y a la filial de ISIS que opera principalmente en la zona de Norte Sinaí continuó provocando hechos de violencia en 2020, aunque de una intensidad menor que en años previos.

Iraq	
Inicio:	2003
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes (Unidades de Movilización Popular), milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, EEUU, Irán, Turquía
Intensidad:	3
Evolución:	=

72. Véase el resumen sobre Libia en este capítulo.

73. Véase el resumen sobre Egipto en el capítulo 2 (Tensiones).

74. Maged Mandour, *Dollars to Despot: Sisi's International Patrons*, Carnegie Endowment for International Peace, 19 de noviembre de 2020.

Síntesis:

La invasión de Iraq por parte de la coalición internacional liderada por EEUU en marzo de 2003, utilizando la supuesta presencia de armas de destrucción masiva como argumento y con la voluntad de derrocar al régimen de Saddam Hussein por su presunta vinculación con los ataques del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, propició el inicio de un conflicto armado en el que progresivamente se involucraron numerosos actores: tropas internacionales, Fuerzas Armadas iraquíes, empresas de seguridad privadas, milicias, grupos insurgentes, y al-Qaeda, entre otros. El nuevo reparto de poder entre grupos sunníes, chiíes y kurdos en el marco institucional instaurado tras el derrocamiento de Hussein provocó descontento entre numerosos sectores. La violencia persistió y se hizo más compleja, superponiéndose la oposición armada contra la presencia internacional en el país a la lucha interna por el control del poder con un componente sectario, principalmente entre chiíes y sunníes, con un período especialmente cruento entre 2006 y 2007. Tras la retirada de las fuerzas estadounidenses a finales de 2011, las dinámicas de violencia han persistido, con un elevado impacto en la población civil. El conflicto armado se agravó en 2014 como consecuencia del ascenso del grupo armado Estado Islámico (ISIS) y la respuesta militar del Gobierno iraquí, apoyado por una nueva coalición internacional liderada por EEUU. Los niveles de violencia se han reducido desde 2018, tras el anuncio de derrota de ISIS, aunque el grupo continúa operando con acciones de menor intensidad. El país también se ha visto afectado por la creciente disputa entre Washington y Teherán y su competencia por influir en los asuntos iraquíes.

Los niveles de violencia del conflicto armado en Iraq continuaron siendo elevados, aunque relativamente inferiores a los de años previos. Según los datos recopilados por el centro de investigación ACLED, el conflicto se cobró la vida de al menos 2.500 personas, en su mayoría como resultado de explosiones y violencia remota, seguidos por enfrentamientos entre diversos actores armados que operan en el país. En 2019, el total de víctimas mortales ascendió a 3.232, según la misma organización. Las hostilidades en el país siguieron teniendo una grave repercusión en la población civil. De acuerdo a los datos preliminares de la organización Iraq Body Count (IBC), el número de víctimas mortales civiles por el conflicto armado ascendería al menos a 902 en 2020, frente a 2.392 en el año anterior. El panorama en el país continuó estando muy influido por la proyección de la disputa entre EEUU e Irán, así como por la persistencia de las actividades de ISIS, poniendo en entredicho la declaración de “victoria” sobre la organización armada por parte del Gobierno iraquí en 2017. Entre 2014 y 2017 la escalada de violencia en el país motivó el desplazamiento forzado interno de más de seis millones de personas. Según los datos de OCHA, hasta octubre de 2020 un total de 1,3 millones de personas permanecían desplazadas en condiciones de gran precariedad, una vulnerabilidad que se vio acentuada por la pandemia de la COVID-19. Cabe mencionar que a finales de 2020 un total de 2.800 mujeres y menores de la minoría yazidí secuestradas por ISIS tras su ofensiva en

Los niveles de violencia en Iraq continuaron siendo elevados y el conflicto armado se vio afectado por la disputa entre Irán y EEUU y la persistencia de las actividades de ISIS

Sinjar en 2014, continuaban en paradero desconocido.

Respecto a la evolución del conflicto armado, **el año se inició con una gran conmoción por el asesinato en Bagdad del general iraní Qassem Soleimani en una operación estadounidense.** El destacado militar iraní, líder de la brigada al-Quds de la Guardia Revolucionaria y a la cabeza de las actuaciones iraníes en la región, fue asesinado el 3 de enero en un ataque con dron en el que también murió el vicecomandante de la coalición de milicias shiíes Unidades de Movilización Popular (PMU, por sus siglas en inglés), Abu Mahdi al-Muhandis. **La ofensiva, que encendió alertas por el potencial de desestabilización en una región ya altamente convulsionada, motivó acciones de represalia de Teherán contra posiciones de EEUU,** en forma de ataques aéreos a bases estadounidenses ubicadas en las provincias de Anbar y Erbil y de ofensivas perpetradas por milicias pro-iraníes que operan en Iraq. La ofensiva de Washington también alentó manifestaciones y nuevas demandas de repliegue de las tropas estadounidenses por parte de diversos actores iraquíes, que insistieron en esta exigencia durante todo el año. En los meses siguientes se produjeron ataques periódicos contra objetivos de EEUU, entre ellos la embajada estadounidense en Bagdad, la llamada Zona Verde de la capital iraquí, bases de la coalición militar liderada por EEUU, empresas como Halliburton, además de personal diplomático. Aunque algunas acciones no fueron reivindicadas, destacó el papel en las ofensivas de milicias pro-iraníes, en especial del grupo Kataib Hizbollah. A mediados de año se estimaba que desde el asesinato de Soleimani se habían activado una decena de nuevas organizaciones armadas de esta línea para actuar con el propósito de expulsar a las tropas de EEUU del país. Washington ofreció una recompensa millonaria por información conducente a la captura de Muhammad Kawtharani, un alto cargo de Kataib Hizbollah responsable de la coordinación de las milicias respaldadas por Teherán en Iraq.

En junio EEUU y el nuevo Gobierno iraquí liderado por el ex jefe de inteligencia Mustafa al-Khadimi como primer ministro, establecieron lo que se calificó como “diálogo estratégico”. Grupos pro-iraníes y, en especial Kataib Hizbollah, expresaron su rechazo a la nominación de al-Khadimi, al que acusaron de estar involucrado en las muertes de Soleimani y al-Muhandis. El asesinato en julio de un destacado asesor de seguridad del primer ministro y crítico de la actuación de las milicias pro-iraníes en Iraq motivó nuevas tensiones. Los contactos entre las autoridades de Washington y Bagdad tras una segunda edición del “diálogo estratégico”, desembocaron en septiembre en el anuncio de reducción de tropas EEUU en Iraq de 5.200 a 3.000 efectivos a cambio de un compromiso de protección de las fuerzas iraquíes y de acuerdos comerciales tendientes a reducir la influencia

de Teherán en el país. Aunque milicias respaldadas por Irán anunciaron una tregua unilateral condicionada a la retirada efectiva de las fuerzas de EEUU, en los últimos meses del año continuaron produciéndose incidentes y hechos de violencia.

Paralelamente, **durante el año prosiguieron y se intensificaron las acciones de ISIS. El grupo armado se enfrentó a las fuerzas de seguridad, a efectivos de las milicias PMU, a fuerzas kurdas y además perpetró ataques explosivos, atentados suicidas y otras ofensivas contra población civil, además de actos de sabotaje.** Las hostilidades alcanzaron las provincias de Diyala, Nineveh, Kirkuk, Salah ad-Din, Erbil y Anbar. En mayo, las fuerzas de seguridad iraquíes lanzaron la operación León del Desierto para intentar erradicar a los milicianos de ISIS en las zonas colindantes de las regiones de Anbar, Nineveh y Salah ad-Din y fronteras con Siria. Las operaciones contra ISIS y las acciones del grupo armado continuaban al finalizar 2020. Cabe mencionar que a lo largo del año también se produjeron **tensiones entre los Gobiernos de Ankara y Bagdad por las incursiones de Turquía en el norte iraquí contra posiciones del PKK**, en acciones que las autoridades iraquíes denunciaron como una vulneración de su soberanía. También se produjeron tensiones entre grupos kurdos.⁷⁵ Adicionalmente, cabe subrayar que durante 2020 persistió la contestación contra las autoridades por parte de sectores de la población que continuaron con las protestas y movilizaciones iniciadas a finales de 2019.⁷⁶

Israel – Palestina	
Inicio:	2000
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional ⁷⁷
Actores:	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Síntesis:	El conflicto entre Israel y los diferentes actores palestinos se reinició en el año 2000 con el estallido de la 2ª Intifada propiciada por el fracaso del proceso de paz promovido a principios de los años noventa. El conflicto palestino-israelí se manifiesta en 1947 cuando la resolución 181 del Consejo de Seguridad de la ONU dividió el territorio de Palestina bajo mandato británico en dos Estados y poco después se proclamó el Estado de Israel (1948), sin poderse materializar desde entonces un Estado palestino. Tras la

75. Véase el resumen sobre Turquía (sudeste) en este capítulo.

76. Véase el resumen sobre Iraq en el capítulo 2 (Tensiones).

77. A pesar de que “Palestina” (cuya Autoridad Nacional Palestina es una entidad política vinculada a una determinada población y a un territorio) no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera el conflicto entre Israel y Palestina como “internacional” y no como “interno” por tratarse de un territorio ocupado ilegalmente y cuya pretendida pertenencia a Israel no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

guerra de 1948-49 Israel se anexionó Jerusalén oeste, y Egipto y Jordania pasaron a controlar Gaza y Cisjordania, respectivamente. En 1967, Israel ocupó Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza tras vencer en la llamada Guerra de los Seis Días contra los países árabes. No será hasta los acuerdos de Oslo que la autonomía de los territorios palestinos será formalmente reconocida, aunque su implementación se verá impedida por la ocupación militar y por el control del territorio impuesto por Israel.

Siguiendo la tendencia de los últimos tres años, la violencia directa vinculada al conflicto armado palestino-israelí se redujo durante 2020, a pesar del incremento de las tensiones por los planes y medidas del Gobierno israelí para consolidar su anexión de facto de territorios ocupados palestinos. Según OCHA, hasta diciembre habían muerto un total de 30 personas en distintos hechos de violencia vinculados al conflicto, de los cuales 28 eran palestinos y dos israelíes. La cifra es la más baja del último trienio, teniendo en cuenta que en 2019 se contabilizaron 144 personas fallecidas y en 2018, 313. Adicionalmente, cabe considerar que durante 2020 un total de 2.579 palestinos y palestinas resultaron heridos, frente a 57 israelíes. Los hechos de violencia con mayor letalidad se concentraron en el primer trimestre del año y, en general, se produjeron en la Franja de Gaza, a lo largo de la barrera entre Gaza e Israel, en Cisjordania –en localidades como Hebrón, Jenín– y en Jerusalén. Los incidentes incluyeron ataques aéreos israelíes, lanzamientos de cohetes y artefactos incendiarios desde Gaza, tiroteos de fuerzas israelíes contra población palestina y represión de manifestaciones y algunas agresiones de palestinos a soldados israelíes. OCHA también subrayó el impacto de las demoliciones y confiscaciones de propiedades palestinas, en su cifra más alta desde 2016. Entre enero y noviembre esta política israelí había afectado a 776 infraestructuras, forzando el desplazamiento de 946 palestinos, incluyendo 488 menores. A lo largo de todo el año, el Gobierno israelí continuó anunciando nuevos permisos y planes de construcción de miles de viviendas en distintas áreas de los territorios ocupados.

Respecto a la evolución de los acontecimientos, cabe destacar que **a finales de enero EEUU presentó finalmente –tras continuas postergaciones en los últimos años– su denominado “plan de paz definitivo” para la región**, oficializando el apoyo y alineamiento de la administración de Donald Trump a las posiciones de la extrema derecha israelí. El plan, detallado en un documento de 180 páginas y presentado por Trump en la Casa Blanca en compañía del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, contempla, entre otras medidas, el reconocimiento de asentamientos israelíes en territorios ocupados palestinos, rechaza el derecho a retorno de

la población refugiada palestina y ofrece una forma de estatalidad palestina con una capital en las afueras de Jerusalén, además de inversiones económicas. El plan alentó manifestaciones y muestras de rechazo entre la población y actores palestinos y fue catalogado por la AP como el resultado de una conspiración. Paralelamente, durante el primer trimestre continuaron los esfuerzos por intentar implementar una tregua informal en torno a la Franja de Gaza, mediada por Egipto en febrero. En este contexto, la expansión de la pandemia de la COVID-19 a partir de marzo favoreció una cierta cooperación entre la AP y el Gobierno israelí. Diversas voces alertaron sobre el potencial impacto del virus en la Franja de Gaza, debido a la fragilidad de sus infraestructuras de salud a causa de los ataques y el bloqueo impuesto por Israel en los últimos años. Representantes de Hamas y de AP también plantearon la necesidad de liberar prisioneros palestinos para evitar su exposición al virus y advirtieron sobre las responsabilidades de Israel, como potencia ocupante, por el impacto de la enfermedad en la población palestina.

Los meses siguientes estuvieron marcados por el clima electoral en Israel y por el resultado de los comicios, que derivaron en la conformación de un gobierno de coalición entre el Likud de Netanyahu y el partido Azul y Blanco de Benny Gantz. Según el acuerdo, ambos se rotarían en la posición de primer ministro, comenzando el turno Netanyahu. El acuerdo también refrendó –aunque sin detallar los mecanismos para su puesta en marcha– la **propuesta del líder del Likud para anexionar formalmente un tercio de los territorios ocupados de Cisjordania, incluyendo 235 asentamientos y la mayor parte del estratégico y fértil Valle del Jordán, fronterizo con Jordania.** La perspectiva de que el plan podía comenzar a implementarse a partir del 1 de julio, según lo anunciado por Netanyahu, elevó los niveles de tensión con las autoridades palestinas, alentó nuevas protestas y hechos de violencia, y motivó críticas y advertencias a nivel internacional. La AP denunció el plan y suspendió los acuerdos de cooperación con Israel en mayo, mientras que Hamas lo consideró como una “declaración de guerra”. Diversas voces insistieron que la medida implicaba violar los principios básicos del derecho internacional, minaba las perspectivas de una solución de dos Estados –considerada moribunda o ya del todo impracticable por muchos actores–, podía agravar los padecimientos de la población palestina y desestabilizar aún más la región. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos alertó de la ilegalidad de cualquier anexión de Cisjordania. Más de mil parlamentarios europeos de 25 países firmaron una declaración exigiendo una respuesta de la UE

La propuesta del primer ministro israelí de anexionar formalmente un tercio de los territorios ocupados en Cisjordania provocó múltiples críticas y alarmas a nivel internacional, además de rechazo entre actores palestinos

ante el plan y varios países europeos integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU –Francia, Bélgica, Alemania, Estonia, Irlanda, Reino Unido y Noruega– advirtieron de manera conjunta que no reconocerían la anexión. Varios analistas destacaron la necesidad de poner en contexto la política anunciada por Netanyahu y considerarla como una pieza que solo hace más explícita una situación que de facto ya existe.⁷⁸ En cuanto a las reacciones en territorio palestino, ante el aumento de las hostilidades, una nueva intervención de Egipto y la ONU volvió a restablecer la tregua informal entre Hamas e Israel en agosto, que se mantenía al finalizar el año aunque con esporádicos incidentes.

En este escenario de críticas internacionales, y en medio de divisiones internas en el Gobierno israelí sobre la forma y el cronograma de implementación del plan, la iniciativa quedó temporalmente suspendida y dio paso

a una serie de acuerdos de normalización de relaciones con países de mayoría árabe promovidos por EEUU. A finales de agosto se anunció la normalización de relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos (EAU), en septiembre con Bahrein y en octubre con Sudán. Más tarde, en diciembre Marruecos se sumó a la lista y a cambio Washington declaró reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.⁷⁹ EEUU insistió en presentarlos como acuerdos de paz a pesar de que, en la práctica, formalizaban relaciones ya existentes entre Israel y estos Estados, no implicados en el pasado en hostilidades directas con Israel, a excepción de Sudán. Aunque la normalización de relaciones fue defendida por estos países

como una manera de frenar el plan de anexión, Netanyahu aseguró que la propuesta seguía sobre la mesa. Las protestas palestinas ante estos acuerdos no consiguieron respaldo político ni siquiera entre la Liga Árabe, que en septiembre no llegó a aprobar una resolución de condena. Esta situación fue considerada por el primer ministro palestino como un símbolo de la inacción árabe. Pese a ello, en noviembre, la AP retomó la cooperación de seguridad con Israel, subrayó su disposición a reanudar conversaciones de paz tras la asunción de un nuevo gobierno en EEUU y propuso celebrar una conferencia internacional de paz para abordar el conflicto palestino-israelí en el primer semestre de 2021. En cuanto a Israel, cabe mencionar que durante el año se sucedieron masivas manifestaciones contra el Gobierno por su manejo de la crisis de la COVID-19, la situación económica y los casos de corrupción que involucran a Netanyahu. En diciembre, en medio de tensiones en la coalición gubernamental, el Ejecutivo israelí volvió a fracasar en su intento de aprobar los presupuestos, hecho que derivó en una convocatoria a nuevas elecciones –las cuartas en dos años– para marzo de 2021.

78. Para más información véase Escola de Cultura de Pau, Centre Delàs, IDHC, *¿Momento decisivo? La importancia de frenar el comercio de armas con Israel*, Escola de Cultura de Pau, Centre Delàs, IDHC, julio de 2020.

79. Véase el resumen sobre Marruecos - Sáhara Occidental en el capítulo 2 (Tensiones).

Siria	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición que incluye a las milicias YPG/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Turquía, Hezbollah, Irán, Rusia, entre otros actores armados
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

Controlada por el partido Baath desde 1963, la república de Siria ha sido gobernada desde los setenta por dos presidentes: Hafez al-Assad y su hijo, Bashar, que asumió el poder en 2000. Actor clave en Oriente Medio, a nivel internacional el régimen se ha caracterizado por sus políticas hostiles hacia Israel, y en el plano interno por su carácter autoritario y su férrea represión a la oposición. La llegada al Gobierno de Bashar al-Assad despertó expectativas de cambio, tras algunas medidas liberalizadoras. No obstante, el régimen frenó estas iniciativas ante la alarma del establishment, integrado por el Ejército, el partido Baath y la minoría alauita. En 2011, las revueltas en la región alentaron a la población siria a pedir cambios políticos y económicos. La brutal respuesta del Gobierno desencadenó una severa crisis en el país y desembocó en el inicio de un cruento conflicto armado con un alto impacto en la población civil. En medio de dinámicas de militarización y proliferación de actores armados de diverso signo, la disputa ha adquirido una mayor complejidad y una creciente dimensión regional e internacional.

Durante 2020 el conflicto armado en Siria continuó siendo uno de los más graves a nivel mundial, caracterizándose por la implicación de numerosos actores armados locales, regionales e internacionales; por hostilidades y otros hechos de violencia que afectaron distintas zonas del país, con dinámicas propias en los diferentes frentes; y por gravísimos y persistentes impactos en la población, agravados este año por un acusado deterioro de la situación económica y por la pandemia de la COVID-19. Pese a las dificultades para hacer un seguimiento pormenorizado de los impactos de la violencia en el país, los datos disponibles confirman los elevados niveles de letalidad, aunque el balance sería menor a años precedentes. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (SOHR), el número de víctimas mortales del conflicto en 2020 se elevaría a 6.817 personas y sería la cifra más baja de muertes en el país desde el inicio de la revuelta contra el régimen de al-Assad hace casi una década. Los datos del centro de investigación ACLED apuntan a un balance superior, de unas 7.974 personas fallecidas en el mismo periodo. La cifra total de víctimas mortales sería, por tanto, relativamente inferior a la de 2019

–15.000–, y menor a la de 2018 –30.000–, según los datos de ACLED. Respecto a las víctimas civiles, los informes bimensuales del secretario general de la ONU hicieron un recuento no exhaustivo. A partir de ellos se concluye que, como mínimo, entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020 un total de 1.164 civiles habían muerto en hechos vinculados al conflicto, 42% de los cuales eran mujeres y menores de edad –145 y 343, respectivamente. Los datos de SOHR van en la misma línea: 1.528 civiles fallecidos, de los cuales 197 mujeres y 231 menores. Según los datos de la ONU, las víctimas civiles fallecieron principalmente a causa de ataques aéreos y terrestres, artefactos explosivos, restos de explosivos de guerra. Los informes periódicos de la ONU subrayaron que las continuas bajas entre la población indicaban que las partes involucradas en el conflicto persisten en no respetar principios fundamentales del derecho internacional humanitario, como la necesaria distinción entre civiles y combatientes.

En esta línea, la ONU alertó sobre otras acciones perpetradas por actores armados, entre ellas las detenciones arbitrarias –incluyendo numerosas denuncias de muertes bajo custodia gubernamental–, torturas, violencia sexual, confiscaciones de propiedades y tierras, ataques a centros de salud y escuelas. Según datos divulgados a finales de año, solo el 50% de los centros educativos del país estaban en funciones y había 2,1 millones de niños y niñas sin escolarizar. A esto se suma la gravísima situación humanitaria en el país. **Según ACNUR, Siria seguía siendo el principal país emisor de población refugiada y el primero en población desplazada interna del mundo.** 80% de la población desplazada son mujeres y menores y 28% de las mujeres desplazadas tienen algún grado de discapacidad. Los padecimientos de la población siria también se vieron agravados por el empeoramiento de la situación económica –la canasta básica de alimentos multiplicó su precio en más de un 200% en un año y se estimaba que 9,3 millones de personas padecían inseguridad alimentaria–, por los graves incendios en diversas zonas del país –en 2020 se habrían quemado más de 35.000 hectáreas de campos de cultivo, con severas consecuencias a largo plazo para la producción de alimentos– y por los crecientes obstáculos de acceso para la ayuda humanitaria –durante el año se cerraron varios pasos fronterizos clave para la entrada de asistencia. En este contexto, diversas voces alertaron sobre el impacto añadido de la pandemia, por el creciente número de casos, aunque seguía siendo difícil de determinar el alcance del brote en el país. La interpelación a las partes para que respondieran al llamamiento del secretario general de la ONU a un alto el fuego global para focalizar los esfuerzos en la pandemia no tuvo acogida en la inmensa mayoría de los actores armados sirios.

Respecto a la evolución del conflicto y sus principales protagonistas, **en el frente noroeste, se**

registraron elevados niveles de violencia y masivos desplazamientos forzados de población en los primeros meses del año, tras la decisión del régimen y Rusia de intensificar su campaña sobre Idlib, bastión opositor, en diciembre de 2019. Turquía, principal apoyo de grupos rebeldes de la región, lanzó críticas a Moscú por vulnerar los acuerdos previos que establecían una “zona de distensión” en Idlib. En medio de crecientes intercambios de artillería entre fuerzas turcas y sirias en esta zona, con bajas de ambos bandos, se encendieron las alarmas sobre una escalada en la confrontación. A finales de febrero una ofensiva aérea atribuida al régimen sirio y las fuerzas rusas contra un convoy militar turco en Balyun (Idlib) provocó la muerte a 34 soldados –el incidente con mayor número de muertes turcas desde su implicación en la guerra en Siria– y motivó que Ankara lanzara la operación Escudo de Primavera, incrementando su actividad militar en todas las líneas de frente. **No fue hasta principios de marzo que Rusia y Turquía acordaron una nueva tregua en torno a Idlib, motivada en parte por el deseo de Ankara de prevenir una nueva llegada masiva de personas refugiadas.** Para entonces la situación humanitaria en la región se había deteriorado dramáticamente: **en tan solo tres meses un millón de personas huyó de las hostilidades**, más de la mitad de las cuales se ubicaron en una estrecha franja paralela a la frontera sirio-turca que ya albergaba a cientos de miles de personas desplazadas. Turquía abrió temporalmente su frontera con Grecia y permitió la salida de personas migrantes y refugiadas en un intento por poner presión a la UE y conseguir apoyo a sus posiciones en el conflicto sirio. En los meses siguientes, Rusia y Turquía iniciaron, aunque con dificultades, patrullas conjuntas en Idlib. En paralelo, persistieron hechos de violencia producto de choques entre Hayat Tahrir al-Sham (HTS) y grupos próximos a al-Qaeda como Hurras al-Din y entre estos grupos y las fuerzas del régimen. En junio se reanudaron los ataques aéreos rusos en Idlib, poco después de un ataque que hirió a varios soldados rusos y turcos reivindicado por un grupo denominado Kataib Khattab al-Sistani, supuestamente integrado por milicianos del Cáucaso. Durante el segundo semestre también se informó de los intentos de HTS por consolidar su posición en Idlib intensificando la represión a grupos rivales. Al finalizar el año el alto el fuego se mantenía formalmente a grandes rasgos en el noroeste, según la ONU, pero en medio de reiteradas violaciones, con intercambios de artillería casi diarios y crecientes enfrentamientos a lo largo de las líneas de control en Idlib y Alepo.

Durante el año también se produjeron choques intermitentes entre fuerzas respaldadas por Ankara y las SDF, lideradas por fuerzas kurdas YPG/YPJ, en torno a las líneas divisorias entre la operación turca “Escudo

del Éufrates” y Manbij y la más reciente operación de Ankara “Primavera de paz” y el área controlada por las SDF en el noroeste. A lo largo del año también se produjeron varios incidentes con explosivos que dejaron decenas de víctimas mortales en Afrin y un ataque con dron que causó la muerte a tres activistas kurdas en una acción que las SDF atribuyeron a Turquía. Las SDF se acogieron en marzo al llamamiento del secretario general de la ONU sobre una tregua por la pandemia y anunciaron una suspensión de sus actividades militares. Los choques continuaron, sin embargo, y en el segundo semestre destacaron los enfrentamientos en torno a Ain Issa, al norte de Raqqa. **En el frente nororiental ISIS también incrementó sus acciones tanto contra las SDF como contra fuerzas gubernamentales.** Los enfrentamientos entre ISIS y fuerzas del régimen

El conflicto armado en Siria continuó caracterizándose por la implicación de numerosos actores locales, regionales e internacionales y por elevados niveles de letalidad y desplazamientos forzados masivos de población

en una zona desértica de la provincia de Homs provocaron unas cuarenta muertes en abril. Durante el segundo semestre se registraron más enfrentamientos de ISIS con fuerzas del régimen con decenas de víctimas mortales en un área más amplia, que incluyó Raqqa, Aleppo, Deir Ez-Zor y Hama, alentando especulaciones sobre un posible resurgimiento del grupo. Según trascendió, remanentes del grupo estarían coaccionando a la población local a través de controles en carreteras y extorsiones, y entrenando a nuevos reclutas en la zona desértica de Siria nominalmente controlada por el régimen. Respecto a

EEUU, tras el anuncio de repliegue y acusaciones de abandono a sus aliados kurdos ante la incursión de Turquía a finales de 2019, sus fuerzas se concentraron en el noreste y durante 2020 continuaron con sus tareas de apoyo a las SDF en la protección de pozos petroleros, involucrándose en algunas acciones contra militantes de ISIS. En este ámbito, cabe mencionar también que hacia finales de año las SDF decretaron una amnistía para combatientes y presuntos colaboradores de ISIS que, según se informó, no estaban involucrados en delitos de sangre y habían renegado de su participación en el grupo. La medida supuso la excarcelación de más de 600 excombatientes, todos sirios. En la zona noreste preocupaba también de manera especial la situación en el campo de al-Hawl, donde permanecen retenidas personas desplazadas y familias de presuntos combatientes de ISIS. Al finalizar el año albergaba a casi 64.000 personas, de las cuales 94% eran mujeres y menores—53% de los niños y niñas, menores de 12 años.⁸⁰

En el suroeste, durante el año se intensificaron los disturbios populares. Aunque también se produjeron en otras áreas del país, en esta zona tuvieron especial notoriedad los **asesinatos selectivos, no siempre reivindicados, principalmente contra miembros de las fuerzas gubernamentales o progubernamentales y contra ex integrantes de grupos armados de oposición reconciliados con el régimen.** Solo entre abril y mayo

80. Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).

se notificaron más de 400 casos. A lo largo de todo el año se produjeron diversos ataques israelíes contra posiciones del régimen sirio, iraníes y de Hezbollah que provocaron la muerte a varias decenas de personas.⁸²

Finalmente, cabe destacar que en junio de 2020 entró en vigor la Caesar Act, la ley estadounidense que sanciona al régimen sirio, incluido su líder Bashar al-Assad, por crímenes de guerra perpetrados contra su población y que castiga a personas, entidades y países que negocien con el Gobierno de Damasco. La norma recibe su nombre de los llamados “archivos de César”, en alusión a las miles de imágenes que un fotógrafo sirio consiguió sacar del país en 2014 y que documentan las torturas y abusos en las cárceles

del régimen.⁸³ La iniciativa recibió el apoyo de la mayoría de países europeos, pero fue rechazada por Rusia y China, que denunciaron la unilateralidad de la medida y la consideraron como una vulneración de la soberanía siria. Este tema condicionó su actuación en el Consejo de Seguridad de la ONU en julio, donde ambos países vetaron la resolución sobre la asistencia humanitaria transfronteriza a Siria y defendieron que el régimen debía ser el distribuidor exclusivo de la ayuda. La resolución 2533 finalmente se aprobó, pero la operación de ayuda humanitaria quedó limitada de dos a un solo paso en el noroeste de Siria –el cruce de Bab al-Salam–, dificultando significativamente las tareas de asistencia. En enero se habían cerrado ya otros dos pasos fronterizos.

81. Véase el resumen sobre Israel - Siria, Líbano en el capítulo 2 (Tensiones).

82. US Department of State, *Caesar Syria Civilian Protection Act, Fact Sheet*, 17 de junio de 2020.